



**Elites, política y desigualdades
en América Latina**

303



NUEVA SOCIEDAD

es una revista latinoamericana abierta a las corrientes de pensamiento progresista, que aboga por el desarrollo de la democracia política, económica y social.

Se publica cada dos meses en Buenos Aires, Argentina, y circula en toda América Latina.

Directora: Svenja Blanke

Jefe de redacción: Pablo Stefanoni

Coordinadora de producción: Silvina Cucchi

Plataforma digital: Mariano Schuster, Eugenia Corriés

Administración: Vanesa Knoop, Karin Ohmann

NUEVA SOCIEDAD Nº 303

Diseño original de portada: Horacio Wainhaus

Diagramación: Fabiana Di Matteo

Ilustraciones: Álvaro Díaz

Corrección: Germán Conde, Vera Giaconi

Traducción al inglés de los sumarios: Kristie Robinson

Impreso en Talleres Gráficos Nuevo Offset,
Viel 1444, Buenos Aires, Argentina

Los artículos que integran NUEVA SOCIEDAD son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Revista. Se permite, previa autorización, la reproducción de los ensayos y de las ilustraciones, a condición de que se mencione la fuente y se haga llegar una copia a la redacción.

NUEVA SOCIEDAD – ISSN 0251-3552

Oficinas: Humberto Primo 531, C1103ACK Buenos Aires, Argentina.

Tel/Fax: (54-11) 3708-1330

Correo electrónico: <info@nuso.org>

<distribucion@nuso.org> (distribución y ventas)

<www.nuso.org>

El portal NUEVA SOCIEDAD es una plataforma de reflexión sobre América Latina.
Articula un debate pluralista y democrático sobre política y políticas latinoamericanas.

 **NUEVA
SOCIEDAD**

es un proyecto de la

**FRIEDRICH
EBERT** 
STIFTUNG

Enero-Febrero 2023

Índice

COYUNTURA

- 4849 **Esther Solano Gallego.** «Lula 3» o cómo dejar atrás el legado de Jair Bolsonaro..... 4

TRIBUNA GLOBAL

- 4850 **Alessandro Stanziani.** El trigo como arma. Comercio de cereales, especulación y orden internacional..... 13

TEMA CENTRAL

- 4851 **Mariana Heredia.** De oligarquías y hombres de paja. ¿Cómo entender el capital en América Latina? 27
- 4852 **Francisco Robles-Rivera / Inés Nercesian.** ¿Quién le pone el cascabel al gato? Las elites y su poder de influencia en Centroamérica 39
- 4853 **Hugo Cerón Anaya.** Color de piel humilde, color de piel privilegiado. Elites y blancura en América Latina 50
- 4854 **Rosario Figari Layús.** Elites y violencia: alianzas, impunidad y desigualdad 64
- 4855 **Hans-Jürgen Burchardt / Jan Ickler.** Riqueza, elites, impuestos. Viejos desafíos para un nuevo «giro a la izquierda» 78
- 4856 **Noam Titelman.** Recambio generacional y antielitismo. Las tensiones del cambio en Chile..... 88
- 4857 **Álvaro Jiménez Millán.** Colombia: una nueva gramática del poder..... 98
- 4858 **Florantonia Singer.** Venezuela: elites fugitivas en un país hecho escombros..... 106
- 4859 **Cristóbal Villalobos Dintrans.** Intelectuales y elites. ¿Parte del problema o parte de la solución?..... 117

ENSAYO

- 4860 **Renaud Garcia.** Colapsología: ¿una mutilación de la ecología?..... 130

SUMMARIES

Segunda página

Los efectos de la pandemia de covid-19, junto con la vigencia política del progresismo y la pervivencia de la protesta social, han vuelto a subrayar la cuestión de las desigualdades y, con ella, la de las elites. A explorar estas dimensiones se dedica el Tema Central de este número de NUEVA SOCIEDAD, desde diferentes ángulos y perspectivas.

Mariana Heredia abre el *dossier* con un artículo sobre el viejo/nuevo empresariado y se pregunta: ¿sigue teniendo vigencia el término «oligarquía», que ha organizado tantos combates políticos y sociales y sigue operando en la visión del mundo de los sectores progresistas?, ¿qué peso tienen los viejos apellidos patricios y cómo se modificaron sus actividades? Las respuestas muestran que, en gran medida, hoy se habla de los oligarcas como una suerte de hombres de paja, en medio de cambios profundos en la estructura económica que deben ser explorados. Francisco Robles-Rivera e Inés Nercesian abordan la relevancia del estudio de las elites y se enfocan en América Central. Los acuerdos de paz y las transiciones democráticas parecieron abrir nuevos horizontes en una región tradicionalmente atravesada por profundas desigualdades. Sin embargo, hoy ha vuelto al primer plano el avance del autoritarismo, la violencia y la falta de perspectivas para gran parte de la población, y el estudio de las elites permite establecer semejanzas y diferencias entre los distintos países y sus estructuras de poder.

Hugo Cerón Anaya vuelve sobre el color de la piel en la construcción de jerarquías sociales. A pesar de que el mestizaje ha sido un prisma para tratar de entender la realidad latinoamericana, en este subcontinente, la riqueza y la blancura siguen estrechamente vinculadas, tanto de forma simbólica como material. Varios trabajos cualitativos recientes sobre el estudio de elites permiten mostrar que tanto el fenotipo como un conjunto de hábitos asociados con la blancura siguen siendo utilizados para demarcar ideas de pertenencia e identidad. Por su parte, Rosario Figari Layús se aboca a la relación entre las elites y la violencia

política y social. Su artículo muestra que la construcción de alianzas estratégicas entre elites económicas y diversos tipos de actores ha sido clave para el ejercicio de una violencia funcional a sus intereses, como así también para la obtención de la impunidad necesaria para seguir operando y reproduciendo sus modelos de acumulación y las desigualdades resultantes.

Hans-Jürgen Burchardt y Jan Ickler escriben sobre desigualdades, elites e impuestos, una temática que viene atravesando las discusiones sobre las reformas tributarias en la región. Esto es particularmente relevante en un contexto en el que nuevas alianzas de centroizquierda están accediendo (o volviendo) al poder. Por lo tanto, sostienen los autores, es un momento pertinente para hacer un balance de la «marea rosa» de los primeros años 2000 y pensar en reformas que vayan más allá del extractivismo. Los recientes aumentos de los precios de las materias primas, en un contexto de crisis energética, pueden ser otro espejismo que haga olvidar la necesidad de reformas profundas, especialmente en el terreno tributario.

Noam Titelman y Álvaro Jiménez Millán analizan dos de estas experiencias. Titelman se concentra en el recambio generacional que vive la política chilena desde 2011 y en los efectos del antielitismo en el actual proceso de cambio, y Jiménez Millán analiza la nueva gramática política en Colombia a partir del triunfo de Gustavo Petro. Con las elites tradicionales divididas, el primer presidente de izquierda de Colombia viene desarrollando una agenda que combina horizontes de justicia social y de transición ecológica que hoy lo proyectan más allá de las fronteras colombianas. Florantonia Singer suma un análisis del caso venezolano, en el que el chavismo expresó un cambio de elites en el país. Pero de la mano de la «Revolución Bolivariana» se ha consolidado una nueva «boliburguesía» a partir de los vínculos con el Estado, que ha dado lugar a una suerte de «nación de feudos», hoy en el marco de una dolarización de facto de la economía y un nuevo festín de importaciones.

Finalmente, Cristóbal Villalobos Dintrans aborda el vínculo entre elites e intelectuales. Durante las últimas décadas, sostiene el autor, existe una revitalización de la discusión sobre las elites, que sin embargo no ha estado acompañada de un debate profundo sobre el rol de los intelectuales en la reproducción social. Tal discusión resulta importante en un contexto en el que se suele mencionar el alejamiento de las elites con respecto a la sociedad como una de las razones del deterioro democrático, tanto en América Latina como a escala global.

Este número de NUEVA SOCIEDAD ha contado con el apoyo del «Laboratorio de Conocimiento II. Confrontando las desigualdades en América Latina: perspectivas sobre riqueza y poder», del Centro María Sybilla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales (CALAS).

Los temas abordados dejan claro que es necesario intensificar, desde diferentes disciplinas y marcos teóricos, las investigaciones sobre la riqueza y el poder en la región como forma de contribuir a nuevas perspectivas más igualitarias e integradoras.

«Lula 3» o cómo dejar atrás el legado de Jair Bolsonaro

Esther Solano Gallego

La toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva estuvo cargada de símbolos. Desde la estética del acto hasta sus primeros decretos, el nuevo presidente buscó marcar una frontera respecto de su antecesor, quien viajó a Estados Unidos para no entregarle la banda presidencial. Ambiente, armas, política social, diversidad, reencuentro nacional son algunos de los ejes, que tienen como trasfondo un gabinete con nombres prestigiosos. No obstante, el bolsonarismo trasciende a Jair Bolsonaro y el nuevo gobierno deberá lidiar con la mitad del país que ha votado por el ex-presidente y ha dado lugar a un Congreso y a gobernaciones con amplia presencia conservadora.

Mientras el 1º de enero el mundo entero curaba sus resacas de la noche anterior, Brasil vivía uno de los días más emocionantes de su historia: una toma de posesión conmovedora del hombre que pareció renacer de sus cenizas al ser votado para comandar los destinos del gigante latinoamericano por tercera vez. Una ceremonia llena de simbolismos y nombres que nos van a servir en este artículo para analizar las posibilidades futuras del gobierno ya bautizado como «Lula 3».

Bolsonaro ausente, «amnistía no» y los decretos de Lula

A nadie sorprendió cuando días antes del fin de su mandato Jair Bolsonaro tomó un avión de la Fuerza Aérea Brasileña y viajó a Estados Unidos, más precisamente a Orlando, y se negó así a un rito democrático importantísimo en Brasilia, como lo es pasar la banda presidencial al nuevo mandatario del país. Tampoco su vicepresidente, Hamilton Mourão, aceptó pasar la banda.

Esther Solano Gallego: es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Complutense de Madrid y profesora de la Universidad Federal de San Pablo.

Palabras claves: izquierda, Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil.

Desde el domingo de su derrota electoral, Bolsonaro había permanecido casi escondido, prácticamente en silencio, apocado, algunos dicen que deprimido, lo que se pareció a un abandono de sus seguidores; hay que recordar que en las elecciones de octubre pasado obtuvo en la segunda vuelta 49,10% de los votos, casi la mitad de los votantes del país. Una de las grandes incógnitas con la «huida» del ya ex-presidente es qué pasará ahora con las 58 denuncias que se están tramitando contra él. Desde este momento no tiene más inmunidad y debe responder en la justicia común por procesos que conllevan desde posibles crímenes cometidos durante la pandemia (como resultado de sus discursos negacionistas), divulgación en masa de *fake news* e interferencia sobre la Policía Federal hasta ataques a jueces de las cortes superiores. Y no solo él, sus hijos también se enfrentan al riesgo de tener que responder en la justicia por casos de corrupción y noticias falsas. ¿Habrá amnistía para Bolsonaro y su familia en nombre de la pacificación y conciliación nacionales? Esta es la gran pregunta a la que respondieron quienes participaron de la asunción de Lula, mientras el ex-sindicalista pronunciaba su discurso de investidura, con la consigna «amnistía no», que resultaría premonitrice a la luz del asalto a la Plaza de los Tres Poderes, una semana más tarde, por huestes bolsonaristas. Tal vez el propio Lula dejó un indicio de respuesta. Después de la ceremonia de posesión, firmó varios decretos y

medidas, entre las cuales se encontraba una específica sobre transparencia: en 30 días, la Contraloría General de la Unión (CGU), el órgano federal responsable por la defensa del patrimonio, la transparencia y la corrupción, debe revisar el secreto que Bolsonaro impuso en varios documentos, secretos incluso de hasta 100 años. Imaginen lo que alguien quiere esconder cuando intenta esconderlo por 100 años.

El pueblo... y la primera dama

La asunción fue, sin duda, una ceremonia donde hubo dos protagonistas: Lula y la gente. Primero, porque el nuevo mandatario reunió multitudes en la capital federal, militantes y simpatizantes en una gran ola roja —los colores del Partido de los Trabajadores (PT)— que desafió las amenazas de atentado y violencia de los bolsonaristas radicales. La organización de la toma de mando fue escenificada de forma tal de mostrar una contratara del bolsonarismo: la reivindicación del Brasil diverso y plural. La «banda del pueblo» fue pasada a Lula por las manos de representantes de los sectores más vulnerables de la sociedad brasileña, que tanto han sufrido en estos cuatro años de bolsonarismo (un niño negro periférico, una persona con deficiencia, el cacique kayapó Raoni Metuktire, una recolectora cartonera, un trabajador de la industria metalúrgica, una cocinera, un profesor, un artesano). En ausencia de Bolsonaro, una mujer negra, recolectora y recicladora

de residuos, fue la encargada de colocar la banda alrededor del pecho de Lula. Hemos dicho que hubo dos protagonistas de la ceremonia, cuando tal vez sería más exacto decir tres y contar también a Rosângela «Janja» da Silva, la esposa de Lula y ahora primera dama. Janja ya ha declarado en diversas ocasiones que no será una primera dama decorativa y, de hecho, tuvo un rol importante en la campaña y fue la encargada de la organización de la toma de posesión. Su *look*, además, buscó enviar un mensaje: en lugar de los clásicos vestidos pudorosos de las primeras damas, optó por un traje de pantalón, chaleco y blazer con bordados artesanales del nordeste, región de donde proviene.

En busca de la gobernabilidad

Pocos días después de haber ganado las elecciones, Lula da Silva estaba en Brasilia negociando con el Congreso Nacional una medida considerada prioritaria para su gobierno: la Propuesta de Enmienda Constitucional de la Transición, que, fundamentalmente, excluye el gasto del programa social Bolsa Família del techo de gastos¹, una política votada durante la presidencia de Michel Temer y que impone un límite bajísimo para los gastos públicos. Lo consiguió, y fue una victoria política

antes de volver al Planalto. Logró también comenzar a encaminar la relación con un Congreso superpoderoso, en el cual el gobierno no tiene mayorías, y cuyo presidente, Artur Lira, tiene aires imperiales. La relación con el Congreso —caracterizado por lo que en Brasil se denomina la «política fisiológica», centrada en mantenerse en el cargo— va a ser un factor decisivo para la gobernabilidad. Hasta ahora, tal como lo dejó ver en el «frente democrático» que armó para volver al poder, que abarca desde la izquierda socialista hasta la centroderecha y sectores de las elites, Lula está mostrando que su habilidad negociadora será imprescindible para mantener la estabilidad política del país.

Para coronar estos éxitos iniciales, el Tribunal Supremo le hizo un regalo de Navidad al viejo-nuevo presidente: el fin del «presupuesto secreto». ¿Qué era el «presupuesto secreto»? Básicamente, otra política polémica por la que en el Congreso se movían grandes cantidades de dinero de forma ajena al escrutinio público lo que, evidentemente, institucionalizaba la corrupción generalizada. Aprobada a mediados de 2020, esta forma de reparto de los recursos le sirvió al gobierno de Bolsonaro para mantener la gobernabilidad dentro de una Cámara de Representantes caracterizada por el clientelismo político².

Además de este trabajo previo a la posesión, el día 1^o de enero se pudo

1. «Se entrega el texto de la PEC de Transición que desvincula el Bolsa Familia del techo de gastos» en *Brasil de Fato*, 17/11/2022.

2. «El Supremo de Brasil declara inconstitucional el conocido como ‘presupuesto secreto’» en *Europa Press*, 19/12/2022.

ver a Lula luciendo la banda presidencial y firmando decretos y medidas que buscaban trazar una frontera política y simbólica con su antecesor. La política social Auxílio Brasil volverá a llamarse Bolsa Família y fue fijada en 600 reales (algo más de 100 dólares estadounidenses); se limitó por decreto la posesión y circulación de armas que Bolsonaro había facilitado en línea con la ideología proarmas estadounidense; creó la Comisión Interministerial Permanente de Control y Prevención de la Deforestación (y firmó varios decretos dirigidos a fortalecer la lucha ambiental), lo cual, junto con el nombramiento de la veterana política y activista ambiental Marina Silva, busca hacer del ambiente un eje de la gestión, que lo distinga del negacionismo climático del mandatario saliente; revocó decretos de Bolsonaro que limitaban la participación popular en órganos colegiados ligados al gobierno; y, finalmente, frenó la privatización de empresas estatales importantes como Correos, Petrobras y otras cinco más. Estas medidas expresan los ejes autoimpuestos por el nuevo gobierno: lucha contra la pobreza, medio ambiente, educación, recuperación de las empresas estatales, disminución de la circulación de armas y participación popular en los órganos de gobierno.

El vicepresidente

Si la primera dama no va a ser decorativa, el vicepresidente, Geraldo Alckmin, muchísimo menos. Proveniente de la

centroderecha, el ex-gobernador de San Pablo fue la expresión de las alianzas – amplias «hasta que doliera»– construidas por Lula para vencer a Bolsonaro. Alckmin tuvo a cargo la importante tarea de coordinar los equipos que llevaban trabajando en Brasilia desde la victoria electoral para garantizar que la transición entre gobiernos fuera lo más tranquila, o al menos lo menos traumática posible. Además, Alckmin tiene otras dos tareas relevantes. Primero, la de apagar algunos fuegos que Lula seguramente provocará. El vicepresidente tiene buena relación con empresarios, industriales, sectores conservadores y, más en general, con «los mercados». El presidente puede permitirse ir un poco más a la izquierda en sus declaraciones públicas porque sabe que tiene en la retaguardia a su número dos tranquilizando a los agentes económicos. Es por eso que, además, ha nombrado a Alckmin ministro de Industria y Comercio, decisión que fue muy celebrada por quienes manejan el dinero en Brasil. Todo indica que la combinación Lula-Alckmin puede ser bastante activa, cada uno ocupándose de los sectores y temas en los que se desenvuelve mejor. Desde luego, lo cierto es que si hay alguien feliz en Brasilia, es el nuevo *vice*, que antes de volverse acompañante de Lula da Silva era un cadáver político desplazado de su partido de toda la vida –el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB, centroderecha)– y sin ninguna perspectiva de volver al escenario público. Hoy ha vuelto, y por la puerta grande, lo

que, a la vez, lo coloca como un potencial candidato para las elecciones presidenciales de 2026.

Los ministros

La pregunta del millón durante estos meses en Brasil ha sido, sin duda, quiénes integrarían el nuevo gabinete. La composición ministerial de 37 carteras, cuando hay que dar cobijo a los cuadros del PT, el mayor partido de América Latina, a los políticos que apoyaron a Lula en la segunda vuelta y a los diversos partidos que van a garantizar la gobernabilidad, se vuelve una tarea hercúlea y que requiere unas matemáticas minuciosas. El primero y más importante nombre es el de Fernando Haddad como ministro de Economía, a quien le cae sobre los hombros la complejísima misión de conjugar inversión pública y control del déficit en un país con los cofres arrasados. Militante del PT y ex-candidato presidencial con Lula en prisión, Haddad es un moderado, con un perfil socialdemócrata y negociador. En sus primeras declaraciones ha dicho que la prioridad será establecer una nueva regla fiscal que abarque los innumerables gastos necesarios para reconstruir mínimamente el país, pero que no deje las arcas públicas en rojo, es decir, en el marco de la responsabilidad fiscal. Cómo lo hará es la principal incógnita de este gobierno, y «los mercados» esperan ansiosos la respuesta. Haddad también ha afirmado que enfrentará como prioridad la reforma tributaria del esquizofrénico sistema

impositivo brasileño, que básicamente sobrecarga a los más pobres con una enorme y desorganizada cantidad de tributos. La meta es simplificar el sistema y hacerlo más justo. Lo cierto es que si Haddad hace un buen trabajo, se coloca como el sucesor más probable de Lula para 2026, si el presidente, de 77 años, cumple con su promesa de no volver a candidatearse. Junto a Haddad hay otros dos nombres del PT que se destacan por sus puestos de influencia: el ex-gobernador de Bahía, Rui Costa (PT), que será ministro de la Casa Civil, cuyo papel es, en esencia, la coordinación de las políticas públicas con los demás ministerios, y Alexandre Padilha, ministro de Relaciones Institucionales, que se encargará de la interlocución con el Congreso. Ambos son políticos de gran experiencia y capacidad, experimentados negociadores, con perfiles sensatos, que devuelven al gobierno la capacidad de diálogo que había perdido con Bolsonaro y que acompañarán a Lula de cerca.

Otro ministro cuyo nombre ha sido muy bien acogido es el del ex-gobernador de Maranhão y senador Flávio Dino (Partido Socialista Brasileño, PSB), ministro de Justicia y Seguridad Pública, encargado de la revocación de los decretos de armas de Bolsonaro. Dino es además ex-magistrado y cuenta con la simpatía de Lula. A Dino le competen ahora dos tareas nada menores: reestablecer una relación de normalidad con el Poder Judicial después de toda la onda expansiva del activismo judicial antipolítico del Lava Jato, y humanizar la seguridad pública brasileña

en un país campeón en homicidios, con un sistema carcelario que se aproxima al millón de personas presas en cárceles que más parecen mazmorras medievales, y con una policía letal que ha pasado por un proceso de radicalización y legitimación del «gatillo fácil» durante el gobierno de Bolsonaro.

Y si hablamos de nombres bien acogidos, sin duda el de la futura ministra de Medio Ambiente, la mencionada Marina Silva, ha sido uno de ellos. Lula tiene claro que la diplomacia verde reubicará a Brasil en el centro de la atención internacional, pero la nueva ministra no lo tendrá fácil: deberá enfrentar los intereses de los poderosísimos *lobbies* de los grandes latifundios, la minería y la actividad maderera, y recordemos además que ella dimitió de este mismo ministerio en 2008 y se distanció entonces de Lula. Por otro lado, el presidente ha creado el Ministerio de los Pueblos Indígenas, a cuyo frente estará la indígena arariboia Sônia Guajajara, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), ubicado a la izquierda del PT. La gran incógnita que pesa sobre este ministerio es si será simplemente simbólico o si será lo suficientemente combativo como para enfrentar los conflictos de un país que nunca ha llevado a cabo una reforma agraria, tiene uno de los campos más violentos del mundo y donde ya se habla de genocidio indígena, además de ecocidio.

En cuanto a nombramientos simbólicos, también lo ha sido el del Ministerio de Igualdad Racial, que estará a cargo de la activista feminista y antirracista Anielle Franco, hermana de la

concejala asesinada Marielle Franco, cuyo homicidio sigue sin resolverse hasta hoy. Siguiendo con la lista de nombres aplaudidos, está Nísia Trindade Lima, nueva ministra de Salud, una científica de reconocido prestigio, que hasta ahora lideraba la Fundación Oswaldo Cruz, el mayor centro científico de salud de Brasil y Latinoamérica, que tuvo un papel fundamental durante el covid-19 con la producción de millones de vacunas. La nueva ministra aparece entonces en las antípodas del negacionismo de Bolsonaro que tantas vidas costó, y su principal reto será levantar un sistema público de salud hundido por la gestión bolsonarista y por el poder mastodóntico de las empresas privadas del sector sanitario.

En contrapartida, un nombre que no le ha sentado muy bien a la izquierda es el de José Múcio Monteiro, del Partido Laborista Brasileño (PTB, por sus siglas en portugués), ministro de Defensa. Hombre conservador, forjado políticamente en la derecha, su nombramiento ha sido elogiado por los comandantes de la Fuerzas Armadas y hasta por el propio vicepresidente de Bolsonaro, el general Hamilton Mourão. Con Múcio, que más que ministro parece que será un representante de las Fuerzas Armadas en el gobierno, Lula manda un mensaje claro: no nos vamos a meter con los militares. Cierto es también que Múcio fue ministro de la Secretaría de Relaciones Institucionales en el segundo mandato de Lula y cuenta con la confianza del presidente. El gobierno de Bolsonaro ha sido el más militarizado de la historia de Brasil, y

diversos miembros de la cúpula de las Fuerzas Armadas protagonizaron episodios y declaraciones de naturaleza golpista. En Brasil, si hay alguien que parece intocable, son los militares.

Otro de los desafíos de los protagonistas del gobierno «Lula 3» será reubicar a Brasil en el escenario internacional tras una administración que lo dejó casi en la condición de paria, sobre todo tras la derrota de Donald Trump y el giro político en EEUU. Para esta tarea, ha sido elegido Mauro Vieira. Este diplomático de carrera ya fue ministro de Relaciones Exteriores con Dilma Rousseff entre 2015 y 2016, y pasó por importantes embajadas, como las de Buenos Aires y Washington, además de liderar la representación de Brasil en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Vieira es, además, un hombre de confianza de Celso Amorim, el ministro de Relaciones Exteriores responsable por la política «activa y altiva» que llevó a Brasil a su periodo de gloria internacional. Vieira tendrá que retomar las negociaciones del acuerdo Mercosur-Unión Europea, además de reconstruir las relaciones con EEUU, reestablecer la agenda Sur-Sur y repensar el papel de los BRICS (Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica), que tan importantes fueron en su día para la estrategia internacional lulista, en el nuevo contexto marcado por la invasión rusa de Ucrania.

Desafíos

Desde luego, a pesar de los primeros éxitos, los nombramientos de personas

competentes para los ministerios y las emociones del día 1º de enero, Lula da Silva no lo va a tener fácil en su tercer mandato. Se enfrenta a varios retos no menores. El reto económico de conjuguar inversión con responsabilidad fiscal tendrá al mercado pendiente de cada paso en falso. Lula, Haddad y la nueva ministra de Planificación, Simone Tebet (del ultrapragmático Movimiento Democrático Brasileño, MDB), se encuentran ante el abismo, con las cuentas públicas arrasadas y un país por reconstruir. Y es que esta ha sido la palabra de los últimos días: «reconstrucción». El hambre, la miseria y la desigualdad son los grandes desafíos, sin duda. Bolsonaro deja como legado más de 33 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria y cuestiones tan horrendas como los bajos índices de vacunación infantil después de que muchos progenitores se dejasen convencer por la política negacionista de Bolsonaro.

El reto del bolsonarismo extremo tampoco es pequeño. Se calcula que cerca de 10%-12% del electorado entra en esta categoría. Son votantes de Bolsonaro que asumen una postura radicalizada, racista, LGBT-fóbica y machista y son movidos por el odio al diferente. Pero los límites de lo decible se han ampliado en estos tiempos. Al lado de estos radicales, están los más de 58 millones de electores cuya mayoría no es fascista, pero que fue seducida por el discurso bolsonarista. Reconstruir la relación con este conjunto de la sociedad brasileña es prioritario, pero no será fácil; esos votos dieron lugar a

una fuerte bancada conservadora en el Congreso y a un conjunto de gobernaciones opositoras. Dialogar con ellos es imperativo. Pero dialogar con ellos significa plantearse, por ejemplo, cómo relacionarse con omnipresentes y poderosas iglesias neopentecostales que han diseminado el pánico moral para tratar de hacer sentir a sus fieles que un gobierno de Lula significaría, literalmente, la satanización de Brasil.

¿Cómo hacer un gobierno digno para las mujeres pobres brasileñas, que mueren por abortos clandestinos, cuando hay que tener mínimamente satisfecha a la bancada fundamentalista religiosa del Congreso y cuando el propio Lula se ha declarado contra la legalización del aborto? Un gobierno de malabarismos; así será el gobierno «Lula 3», que tendrá que conciliar lo que parece irreconciliable y navegar por las aguas turbias del legado bolsonarista. No será fácil para Lula, aunque si hay alguien que ha demostrado ser un trapealista magistral en el poder es el ex-sindicalista metalúrgico.

Además de los desafíos federales, Lula también tendrá que enfrentar desafíos regionales. De los cuatro mayores estados de Brasil, el PT solo ganó uno (Bahía) y los otros tres gobernadores (San Pablo, Minas Gerais y Río de Janeiro) son de oposición. El presidente ya ha dicho que una de sus mayores urgencias será reestablecer el diálogo con las gobernaciones, que estuvo bloqueado por parte de Bolsonaro durante la pandemia. Los ojos del país se vuelven especialmente hacia el gobernador de San Pablo, Tarcísio

Gomes de Freitas, un bolsonarista más moderado e inteligente que Bolsonaro, que arrasó en las urnas del estado más rico de la federación. Ante la ausencia y el futuro incierto del ex-presidente, Freitas se perfila como el heredero natural del bolsonarismo. Bolsonaro ha perdido el poder, pero el bolsonarismo sigue vivo, con la mayor bancada parlamentaria del país, en manos del Partido Liberal (PL), con 99 diputados y con representantes que han batido récords de votos, como la senadora y pastora fundamentalista Damare Alves, ex-ministra de Bolsonaro. Nombres como el del propio Alckmin, la ministra Tebet (tercera en las pasadas presidenciales) o el nuevo líder del PSDB y gobernador de Rio Grande do Sul Eduardo Leite son las figuras de mayor popularidad de una derecha civilizada, que urge colocar de nuevo en pie para frenar los impulsos de lo que podríamos denominar un «bolsonarismo 2.0». Las complejidades no son solo para Lula: el campo político brasileño en general debe enfrentarse a una reconstrucción inédita, después de haber pasado por un periodo de destrucción sin precedentes en el proceso democrático brasileño. De cualquier forma, el gobierno empieza con buen pie, buenos nombres, buenos proyectos. Habrá que ver si todo eso alcanza para dejar atrás el legado bolsonarista.

Epílogo: el asalto a Brasilia

Una semana después de la posesión, las alarmas se encendieron. El 8 de enero,

un grupo de unos 5.000 bolsonaristas radicales invadía los palacios de la Presidencia, el Congreso Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia en Brasilia, ante la inacción y complacencia de la Policía Militar del Distrito Federal, del secretario de Seguridad Pública de Brasilia y del gobernador del Distrito Federal. Ya tenía Brasil su versión tropical del asalto al Capitolio. El saldo: una destrucción patrimonial escandalosa y un golpe frustrado. La reacción de Lula, los jefes de los tres poderes, el Tribunal Supremo y los 27 gobernadores no se hizo esperar, fue unánime y rotunda, todos han cerrado filas en torno de la democracia. Los radicales han sido detenidos, se enfrentan a penas de cárcel y el lamentable

episodio le da a Lula la oportunidad de depurar responsabilidades y hacer rodar las cabezas de algunos políticos y comandantes bolsonaristas golpistas.

El tiro les salió por la culata, y si juega bien sus cartas y aísla a los radicales, Lula saldrá fortalecido social y políticamente, y junto a él, quien gestionó la respuesta a la crisis, el ministro de Justicia y Seguridad Pública Flávio Dino, quien con una reacción rápida y contundente y un discurso muy bien estructurado se posiciona como uno de los protagonistas del Poder Ejecutivo. Bolsonaro, claro, es el responsable político de esta intentona golpista, y el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes ya aceptó incluirlo en las investigaciones. ☒

AMÉRICA LATINA HOY Revista de Ciencias Sociales

Agosto de 2022

Salamanca

Vol. 91

ARTÍCULOS: Caracterización de la (des)colonialidad en los cinco ámbitos de existencia social: aportes desde Aníbal Quijano, **Telmo Adams** y **María Julieta Abba**. Éxito académico de personas con discapacidad en el contexto universitario. Un modelo analítico cualitativo, **Marcela Ramírez Morera** y **Rosa María Díaz Jiménez**. Actitudes políticas y solicitudes de ayuda directa a los gobiernos locales en América Latina, **Sergio Toro Maureira** y **Danytza González-Ceballos**. Marcos para la acción colectiva en exguerrilleros de FARC-EP: Tierra Grata y Ponderos (2017-2019), **Diana Rico Revelo**, **Jairo Estrada Álvarez** y **Angélica Rodríguez Rodríguez**. Dilemas de la esfera pública digital: discursos de odio y articulaciones político-ideológicas en Argentina, **Ezequiel Ipar**, **Pablo Villarreal**, **Micaela Cuesta** y **Lucía Wegelin**. ¿Financiarización de la élite empresarial? Un análisis a partir de la composición, propiedad y directorios de la cúpula empresarial argentina, **Alejandro Gaggero**, **Leandro Navarro Rocha**, **Bruno Pérez Almansi** y **Julia Gentile**. ¿Por qué la ciudadanía acepta pagar sobornos? La tolerancia a la corrupción en América Latina, **María Fernanda González Ramírez** y **Alejandro Monsiváis-Carrillo**. INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA.

Disponibles a texto completo todos los artículos de *América Latina Hoy* en
<www.americalatinahoy.es>.

América Latina Hoy. Revista de Ciencias Sociales es una publicación cuatrimestral del Instituto de Iberoamérica con Ediciones Universidad de Salamanca.

El trigo como arma

*Comercio de cereales,
especulación y orden internacional*

Alessandro Stanziani

La escasez de trigo ¿se debe a que el conflicto en Ucrania impide la producción y el comercio de cereales? Sí, pero solo en parte: lo que muestra la historia de su comercio es que el trigo siempre fue un arma al servicio del poder y la especulación, y estuvo inmerso en las disputas geopolíticas.

Guerras y comercio de cereales en la época preindustrial

Sería erróneo atribuir el aumento del precio de los cereales, y en particular del trigo, únicamente a la guerra en Ucrania, y por ende a la escasez de oferta, tal como lo sugiere la teoría económica estándar. En efecto, este resultado está vinculado a las prolongadas

relaciones entre mercados, especulaciones y tensiones geopolíticas en el seno de las cuales Rusia, Ucrania y el mar Negro desempeñan hoy un papel muy singular. Las siguientes páginas tratarán de demostrar esta tesis.

Ya en el plano de la teoría económica, un modo bastante generalizado de salir de la explicación simple en términos de oferta y demanda consiste

Alessandro Stanziani: es director de estudios de la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) y director de investigación en el Centre National de la Recherche Scientifique / Centre de Recherches Historiques (CNRS/CRH). Entre sus libros se encuentran *Les entrelacements du monde. Histoire globale, pensée globale* (CNRS Éditions, París, 2018); *Les métamorphoses du travail contraint* (Presses de Sciences Po, París, 2020) y *Capital Terre. Une histoire longue du monde d'après (XIIIe-XXIe siècle)* (Payot, París, 2021).

Nota: la versión original de este artículo en francés se publicó en *La Vie des Idées*, 6/9/2022, con el título «L'arme du blé. Commerce des céréales, spéculation et ordre international», <<https://laviedesidees.fr/>>. Traducción: Gustavo Recalde.

Palabras claves: especulación, geopolítica, guerra, trigo, Rusia, Ucrania.

en distinguir entre mala cosecha y hambruna, efectos climáticos y acción del mercado. Una mala cosecha, ligada eventual pero no necesariamente a factores climáticos (una guerra puede causarla) no se traduce forzosamente en hambruna. Esta última también puede ser producto de especulaciones comerciales. El Premio Nobel de Economía Amartya Sen construyó su reputación sobre la base de estas distinciones¹. Sen consideraba que su teoría era solo aplicable a las economías de mercado avanzadas; sin embargo, desde hace ya varias décadas, medievalistas y modernistas han cuestionado esta interpretación demostrando que los mercados contribuyeron a desencadenar las hambrunas a partir del siglo XII, precisamente debido a la importancia de los mercados internacionales y de los componentes geopolíticos, por un lado, y de los aspectos político-sociales internos, por el otro². Como buen precursor, Jean Meuvret observaba en los años 1960 y 1970 que nunca circuló por las rutas tanto trigo como en tiempos de hambruna.

Estas mismas observaciones se hicieron para las ciudades italianas a

partir del siglo XII, y para Inglaterra, Flandes y España a lo largo del periodo tardomedieval y moderno. Los historiadores de China, la India y el Sudeste asiático llegaron a conclusiones similares para estos mismos periodos³. En otras palabras, ya en la época preindustrial, tanto en Europa como en varias regiones de Asia, una mala cosecha solo se transformaba en hambruna si se interponían los mercados y la especulación. Desde luego, a diferencia de la especulación de épocas posteriores, la de la época moderna derivaba también del hecho de que el porcentaje de cosechas que ingresaba en el mercado era limitado, entre 2% y 10% según el caso. Las especulaciones intervenían pues sobre una base de autoconsumo que corría el riesgo en todo momento de ser deficiente.

Al mismo tiempo, tampoco debe creerse que el capitalismo y la especulación han sido constantes desde el siglo XII. Tal como Karl Polanyi y muchos otros han demostrado, lo que cambia no es el mercado en sí, sino sus formas, su extensión y el rol de las instituciones. En la época preindustrial, varias instituciones intervinieron en

1. A. Sen: *Poverty and Famine: An Essay on Entitlement and Deprivation*, Clarendon Press, Oxford, 1982.

2. Entre los libros clásicos, v. Jean Meuvret: *Le problème des subsistances à l'époque de Louis XIV*, Mouton/ EHESS, Paris-La Haya, 1977; Massimo Montanari: *La fame e l'abbondanza*, Laterza, Bari, 1993; John Walter y Richard Schofield: *Famine, Disease and Social Order in Early Modern Society*, Cambridge UP, Cambridge, 1996; Cormac Ó Gráda: *Famine: A Short History*, Princeton UP, Princeton, 2009; Guido Alfani y C. Ó Gráda (eds.): *Famine in European History*, Cambridge UP, Cambridge, 2017.

3. Mark Elvin: *The Retreat of the Elephants: An Environmental History of China*, Yale UP, New Haven, 2004; Pierre-Etienne Will y Roy Bin Wong: *Nourish the People*, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 1991; Suraiya Faruqi, Bruce McGowan, Donald Quataert y Sevket Pamuk: *Economic and Social History of the Ottoman Empire* vol. 2, Cambridge UP, Cambridge, 1997.

la regulación de los mercados agrícolas y alimenticios, precisamente para hacer frente a los riesgos climáticos, la especulación y, en consecuencia, a la inestabilidad social. En Europa, donde predominaba el trigo, la taxonomía de los cereales estaba fuertemente ligada al orden social: las elites tenían acceso al trigo y al pan blanco, sobre todo en Francia y en algunas regiones de Italia, mientras que los demás grupos sociales debían conformarse con trigo mezclado con otros cereales, incluso con sucedáneos. Esto explica el cambio simultáneo del precio de estos alimentos: el aumento del precio del trigo conllevaba el de los demás cereales, y luego el de sucedáneos como las castañas, las bellotas y las raíces⁴.

Es allí donde el almacenamiento de los cereales resultaba fundamental: no solo en Europa, sino también en China, la India y las principales regiones de Asia, las ciudades y las autoridades estatales implementaron un sistema de reservas de cereales. Estas últimas estaban gestionadas en forma conjunta por las instituciones centrales y locales, pero también por las comunidades locales, y requerían el acuerdo de nobles, terratenientes y comerciantes. Estos acuerdos eran desde luego políticos, pero no únicamente: en Europa occidental, se había implementado una economía moral del «precio

justo»; reflejaba una jerarquía cualitativa de las mercancías que, a su vez, remitía a una jerarquía social específica⁵. Determinado pan o determinada carne para determinado grupo social, con una distribución que no pasaba solamente por el precio y el mercado, sino por las instituciones: para cada grupo social, su mercado y su carne o su pan. Este principio no apuntaba a adaptar la sociedad según las reglas de eficiencia económica, tal como sucedería a partir del siglo XIX, sino, por el contrario, buscaba precisamente limitar la influencia de la economía en la política y en la sociedad. La disciplina del mercado dependía del orden público, porque los intereses individuales solo encontraban sentido en el marco del interés general y este último surgía de la convergencia entre economía y moral, beneficio y justicia⁶.

En este marco regulacionista, Rusia no fue una excepción; a partir de la segunda mitad del siglo XVII, se crearon reservas de granos; con la organización de la sociedad en órdenes del Antiguo Régimen, presentaba una variante de las soluciones adoptadas en otros países europeos en la época. Salvo que Rusia buscaba construir un imperio precisamente a partir del control de los cereales. Su expansión en las estepas, en Asia central y más tarde en Polonia y Ucrania perseguía

4. Fernand Braudel: *Civilisation matérielle, économie et capitalisme* vol. 1, Armand Colin, París, 1979; Jean-Louis Flandrin y Massimo Montanari (dirs.): *Histoire de l'alimentation*, Fayard, París, 1996.

5. Monica Martinat: *Le «juste» marché. Le système annonaire romain au XVIIe et XVIIIe siècles*, École Française, Roma, 2005.

6. Jean-Yves Grenier: *L'économie d'ancien régime*, Albin Michel, París, 1996.

precisamente ese objetivo: desde luego, el trigo era considerado un instrumento apto para garantizar el orden social interno, como en Europa, pero constituía también una herramienta de conquista de vastos territorios: la transformación de amplios espacios poblados por presuntos «nómadas» o propietarios insumisos de Polonia y Ucrania en áreas de cultivo extensivo de cereales fue una herramienta de consolidación del poder imperial ruso⁷. En esta configuración, la producción y el control del trigo se consideraban instrumentos de presión sobre Europa en caso de guerra o de mala cosecha. Desde Pedro el Grande hasta Catalina y también con posterioridad, Rusia comercializó su trigo según modalidades que en nada coincidían con lo que Immanuel Wallerstein había señalado, a saber, una cuasi periferia sometida a Europa en vías de industrializarse⁸. Por el contrario, su extensión territorial y la importancia de su trigo para Europa ofrecían al Imperio Ruso formidables herramientas de presión⁹. Lo cual era cierto para el equilibrio social y político, pero también para el esfuerzo militar.

En efecto, el trigo y los cereales en general obligaron a todas las potencias de la época a buscar un difícil equilibrio entre la necesidad de alimentar

ejércitos (hombres y caballos) cada vez más imponentes, la alianza con las elites terratenientes, el abastecimiento de las ciudades y la gestión del campesinado, siendo este último a la vez productor, fuente de ingresos para los nobles y para el Estado, pero también una base indispensable para el reclutamiento militar. Lo que distinguía a los diferentes países era el equilibrio entre estos elementos. Rusia sometía y protegía al mismo tiempo a los campesinos frente la excesiva ambición de los nobles, mientras que China y la India dejaban mayor libertad a estos últimos. Francia, por su parte, se ubicaba a mitad de camino entre soluciones regulacionistas, ambiciones geopolíticas y el intento de conservar una alianza entre el poder monárquico y los terratenientes. Los cambios institucionales y geopolíticos de los años 1750-1820 (caída del Imperio Mogol, crisis del Imperio Otomano, Revolución Francesa, revoluciones e independencias en América Latina) reflejaban la ruptura de estos equilibrios sociopolíticos contruidos en torno de los cereales¹⁰. La falta de harina y de pan en París, la pérdida del control de los emperadores mogoles y otomanos sobre los terratenientes y la producción de cereales, la ruptura del tráfico entre los países

7. A. Stanziani y *Bâtisseurs d'Empires: Russie, Chine, Inde à la croisée des mondes, XVIIe-XIXe siècles*, Liber, París, 2012.

8. I. Wallerstein: *Capitalisme et économie-monde*, Flammarion, París, 1980.

9. A. Stanziani: *After Oriental Despotism: Eurasian Growth in Global Perspective*, Bloomsbury, Londres, 2014.

10. David Armitage y Sanjay Subrahmanyam (dirs.): *The Age of Revolutions in Global Context*, Palgrave-Macmillan, Nueva York, 2010; Suzanne Desan, Lynn Hunt y William Max Nelson (dirs.): *The French Revolution in Global Perspective*, Cornell UP, Ithaca, 2013.

ibéricos y América Latina, todos estos cambios mostraban claramente el rol de los cereales en los equilibrios políticos y sociales en ese momento.

Las pastas de cada día

El siglo XIX trajo entonces novedades significativas. Las guerras napoleónicas y el bloqueo continental produjeron un efecto inesperado: el trigo ruso no solo invadió Europa, sino que contribuyó –sobre todo el famoso *taganrog* ucraniano– a la primera verdadera revolución alimentaria global en un contexto de industrialización (la del maíz, también importante, de Europa a África, se refería al ganado o a los cultivos de subsistencia en África). En efecto, el trigo duro dio origen a las pastas industriales que, en Italia, se desarrollaron precisamente en ese momento, sumándose a las pastas frescas y a las elaboradas con trigo blando¹¹. El trigo duro se utilizaba hasta entonces en la panificación, mientras que la nueva variedad abría las puertas a la industrialización de los alimentos. La nueva variedad proveniente de Ucrania permitió que las pastas se conservaran y se vendiesen para las comidas fuera del hogar, ligadas a la urbanización y la creciente proletarización. A lo largo del siglo XIX y más aún del siglo XX, urbanización, industrialización y pastas

de trigo duro se convirtieron rápidamente en procesos globales e interconectados. Imaginemos nuestro mundo urbanizado e industrializado sin pastas ni pizzas (ni fideos instantáneos en Asia o tortillas en América Latina). Un mundo semejante sería sencillamente imposible, ya que privaría de «combustible» a sus trabajadores, que hasta hace muy poco tiempo apenas tenían acceso a la carne.

Esta solución pareció entonces dar la razón a Rusia y sus estrategias imperialistas en Asia, Ucrania y hasta en los confines del Imperio Otomano: el trigo era el punto clave de las jerarquías geopolíticas y económicas globales. Sin embargo, fue precisamente en el momento en que el mundo le parecía conquistado cuando Rusia comenzó a perder terreno, a pesar de la abolición de la servidumbre en 1861. Esto se debió a que otras potencias decidieron, al igual que los rusos, apropiarse de las tierras de las poblaciones «nómadas primitivas» y ponerlas a cultivar. Estados Unidos, Canadá y Australia produjeron masivamente cereales con menores costos, gracias a una mecanización temprana, y desplazaron rápidamente el trigo ruso de los mercados europeos. Sumada a la decadencia china, esta pérdida de los mercados fue fatal para Rusia, privada de su principal logro económico y geopolítico¹². La guerra mundial completaría este

11. Giovanni Aliberti: «L'industria molitoria meridionale nel secolo XIX» en *Rivista Storica Italiana* vol. 81 N^o 4, 1969; Silvano Serventi y Françoise Sabban: *Les pâtes*, Actes Sud, Arlés, 2001.

12. Scott Reynolds Nelson: *Oceans of Grain: How American Wheat Remade the World*, Basic Books, Londres, 2022.

proceso. El trigo, durante siglos fuente del poder imperial ruso, a pesar de sus grandes límites sociales y políticos, provocó su caída. El trigo estadounidense y canadiense generó cambios aún más importantes: destruyó el orden de los mercados tal como se había mantenido hasta entonces.

La fractura a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX

Si bien en el plano político y social, el cambio del siglo XVIII al XIX había generado grandes transformaciones ligadas en gran medida al control de los cereales, en el plano de la economía y su regulación los cambios fueron menos visibles. Las sociedades «burguesas» y capitalistas de la primera mitad del siglo XIX desconfiaban aún de las bolsas y la especulación.

Tanto en el siglo XVIII como en el XIX, la vigilancia pública de los mercados de alimentos era reconocida en Francia como necesaria y, al mismo tiempo, al contrario de lo que podríamos pensar a partir de los argumentos liberales contemporáneos, esta disciplina no era vista en absoluto como opuesta al libre mercado, sino como un resorte indispensable para el buen funcionamiento de este. Las discusiones de la época distinguían dos tipos de especulación: por

un lado, la especulación como deseo de obtener un beneficio; esta ambición era aceptada e incluso defendida por la nueva sociedad liberal. Pero, por otro lado, la especulación era también vista como sinónimo de monopolio y acaparamiento¹³. Este tipo de especulación era acusada de alterar el juego de la competencia y debía pues reprimirse. En cuanto a la bolsa, ya sea la de valores o la de mercancías, la respuesta fue clara durante buena parte del siglo XIX: las operaciones bursátiles provenían de la mera actividad especulativa. Por esta razón, las bolsas estaban estrechamente vigiladas y reguladas no solo en Francia, Italia y Prusia, sino incluso en Reino Unido¹⁴ y EEUU.

Este equilibrio se hizo pedazos a partir de los años 1860, en concomitancia con varios factores: la Guerra de Secesión estadounidense, la apertura del Canal de Suez y la expansión del telégrafo a través del Atlántico. Esta conjunción de elementos dio vida a una reorganización de los sectores y al auge de las bolsas de mercancías. Estas organizaciones, altamente reguladas hasta entonces, se liberalizaron¹⁵. Se desarrollaron los mercados a plazo (compras anticipadas de productos futuros), la especulación internacional y el intercambio de productos virtuales. Los *futuros* nada tenían que ver con los mercados a plazo que existían desde la Edad Media. Estos últimos consistían

13. A. Stanziani: *Rules of Exchange: French Capitalism in Comparative Perspective, 18th-Early 20th Century*, Cambridge UP, Cambridge, 2012.

14. Ron Harris: *Industrializing English Law*, Cambridge UP, Cambridge, 2009.

15. A. Stanziani: *Rules of Exchange*, cit.

en la compra anticipada de productos esperando reducir el riesgo y, de ser posible, generar ganancias ligadas a la distancia y a las fluctuaciones de los mercados. Permitían también a los agricultores obtener adelantos, créditos sobre las cosechas venideras. Los *futuros*, en cambio, eran promesas de productos virtuales que se intercambiaban por otras promesas de productos que quizás nunca verían la luz. Se trataba de una apuesta meramente especulativa que no recaía sobre productos futuros sino sobre promesas en torno de productos virtuales.

En la mayoría de los países occidentales (Francia, Inglaterra, EEUU, Alemania, Italia), muchas voces —socialistas, radicales, pero también representantes de los campesinos y artesanos— se elevaron para reclamar un retorno a la regulación. La estabilización de los precios señalada por los partidarios de la libertad absoluta de los mercados a plazo no se produjo, y numerosas olas especulativas afectaron las diferentes plazas comerciales y financieras, tanto en Francia como en otros países, a partir de los años 1880 y hasta la Primera Guerra Mundial.

Con la Primera Guerra Mundial, y luego de la posguerra, se adoptaron entonces fuertes medidas antiespeculativas. Estuvieron vigentes durante los años 1920, antes de la liberalización de mediados de esa década, seguida inmediatamente por la crisis de 1929. Independientemente de

las cosechas en EEUU, las violentas fluctuaciones de los precios fueron una constante en estos mercados. En Francia, al igual que en EEUU, a mediados de los años 1930 se establecieron nuevas políticas de regulación. Estas medidas se retomaron después de la Segunda Guerra Mundial cuando las bolsas de valores y de mercancías fueron sometidas a una estrecha vigilancia. Tal como veremos, habrá que esperar hasta los años 1980 para volver a una liberalización salvaje.

Pero el auge de los *futuros* no solo profundizó las desigualdades en el seno de los países desarrollados, sino que contribuyó también a ampliar la brecha entre esos países y sus colonias. A partir de la década de 1870, reiteradas hambrunas azotaron varias regiones del mundo, en África, Asia y América Latina. Entre 1876 y 1879, se registraron en la India entre ocho y diez millones de víctimas, otros diez millones diez años más tarde, sumados a los 20 millones de víctimas en China entre 1876 y 1879, un millón en Brasil durante esos mismos años y dos millones más diez años más tarde¹⁶. ¿Cómo se explica esta multiplicación de hambrunas mundiales cuando el comercio internacional y el transporte deberían estar en condiciones de impedirlos?

La respuesta se encuentra justamente en el auge de los *futuros* y la especulación internacional: en África y Asia, se abrieron bolsas de mercancías, y el comercio especulativo de

16. Arap Maharatna: *The Demography of Famine*, Oxford UP, Nueva Delhi, 1996; Mike Davis: *Géniocides tropicaux*, La Découverte, París, 2006.

cereales y las políticas coloniales de expropiación, lejos de detenerse ante las malas cosechas, exigieron en cambio que más productores locales ingresaran más productos en los circuitos internacionales. La «revolución del transporte», en particular el vapor, en lugar de reducir las hambrunas, las agravó, contrariamente a lo que sostienen las teorías económicas liberales; la razón es que los mercados no eran competitivos y que la ley de la oferta y la demanda era una hipótesis meramente teórica. Estas tensiones se repitieron durante el periodo de entreguerras en el que, junto con la conocida crisis financiera, la especulación con los productos de primera necesidad se disparó en el «Norte» y agravó las malas cosechas y las hambrunas en los mundos coloniales¹⁷. Las negociaciones sobre las promesas de venta de productos coloniales como el caucho, el cacao, el algodón y el azúcar fomentaron su cultivo en estas regiones, independientemente de cualquier consideración de orden no solo ambiental, sino incluso económico.

Hambrunas políticas

Sin embargo, el siglo xx conoció también una nueva fuente importante de hambrunas junto a los movimientos

especulativos: la política. Así, en la Unión Soviética, la terrible hambruna que azotó numerosas regiones rusas en 1922 fue consecuencia en parte de la sequía, en parte de la guerra civil que había asolado el país durante los tres años anteriores y en parte de las políticas de requisición implementadas por el poder soviético¹⁸. Diez años más tarde, frente a la resistencia campesina y política en Ucrania, Stalin recurrió a un método semejante: el poder soviético decidió quitarles a los campesinos locales, golpeados por una sequía importante, sus magras reservas de trigo. Se estima que hubo entre siete y ocho millones de víctimas. Pero la más mortífera de las hambrunas de origen esencialmente político tuvo lugar en China en la época del Gran Salto Adelante, cuando Mao dejó morir a entre 30 y 33 millones de personas¹⁹. Una vez más, el control de los cereales devino una herramienta política; salvo que esta vez, fueron los regímenes comunistas los que la utilizaron para someter a sus propias poblaciones. Los europeos habían utilizado este método en sus colonias, en nombre del beneficio y la especulación; los soviéticos se inspiraron en ellos para controlar su propio imperio en nombre de la lucha contra la especulación «capitalista» de los presuntos *kulaks* en Rusia y

17. A. Stanziani: *Capital Terre. Une histoire longue du monde d'après*, Payot, París, 2021.

18. Andrea Graziosi: *The Great Soviet Peasant War*, Harvard UP, Cambridge, 1993; Terry Martin: *The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923-1939*, Cornell UP, Ithaca, 2001; Viktor P. Danilov et al. (eds.): *Tragediia sovetskoi derevni* vol. 3: 1930-1933, Nauka, Moscú, 1978.

19. Yang Jisheng: *Stèles: La grande famine en Chine, 1958-1961*, Seuil, París, 2012; Dali Yang: *Calamity and Reform in China*, Stanford UP, Stanford, 1996.

los campesinos «antirrevolucionarios» en Ucrania. La Guerra Fría se convirtió entonces en la contraposición de dos lógicas en el uso de los cereales: una especulativa, desigual, eventualmente imperialista; otra antiespeculativa y totalitaria. Estos mundos confluyeron progresivamente a partir de los años 1970.

Especulación salvaje y productos alimenticios, desde los años 1970 hasta el presente

Los controles de la bolsa de mercancías y el equilibrio internacional en el comercio del trigo y los cereales continuaron hasta la década de 1980, cuando el neoliberalismo abrió las compuertas a una especulación salvaje. En Francia, fue el decreto de Jacques Chirac de 1986 el que marcó un giro en esta dirección. Desde entonces, Francia, alineándose con las posiciones europeas, no adoptó ninguna otra medida para limitar la especulación. Lo mismo sucedió en Europa y EEUU; la desregulación de los intercambios virtuales y los mercados a plazo de productos alimenticios se completó entre los años 1990 y 2000. Estas políticas sostenían la especulación salvaje y los beneficios a corto plazo; el auge de las bolsas y los activos financieros

orientó las dinámicas económicas globales desde la euforia de los años de Bill Clinton y Tony Blair hasta la crisis de 2008; luego, tras un pequeño paréntesis en los años siguientes, retomó su impulso en 2015-2016. Al igual que antes, las bolsas de mercancías estaban en el centro de estas dinámicas²⁰.

Entre 2002 y 2008, el número de contratos a plazo sobre materias primas aumentó 500%, mientras que las sumas colocadas en los mercados a plazo de materias primas pasaron de 13.000 a 260.000 millones de dólares. Inevitablemente, los precios de los productos alimenticios aumentaron fuertemente a partir de 2005; esta suba continuó hasta la primavera de 2008, momento en el cual la especulación financiera generó un aumento vertiginoso. Actualmente, solo 2% de las transacciones en los mercados de materias primas corresponden a intercambios de productos reales. Para el 98% restante, se trata de transacciones financieras que recaen sobre productos «imaginarios», meramente virtuales. Este contexto allanó el camino, en los mercados agrícolas, a nuevos inversores: bancos, fondos de inversión, cajas de pensiones, *hedge funds*, fondos indexados, inversores institucionales²¹. La desregulación de los intercambios internacionales y del sector bancario

20. Jean-Marc Boussard, Françoise Gérard y Marie-Gabrielle Piketty (dirs.): *Libéraliser l'agriculture mondiale: Theories, modèles et réalités*, Quae, Versailles, 2005.

21. GRAIN: «Les fonds de pensions: des acteurs clés dans l'accaparement mondial des terres agricoles», 20/6/2011, <www.grain.org/e/4288>; Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, GRAIN, Inter Pares y Solidarité Suède-Amérique Latine: «Fonds de pension étrangers et accaparement des terres au Brésil», 16/11/2015, <www.grain.org/e/5337>.

permitió invertir en fondos agrícolas y en bolsas de mercancías. Los bancos colocaron entonces una parte de su dinero en estas operaciones.

Lo paradójico de esta situación, que sin embargo refleja perfectamente la lógica de conjunto, es que escasez extrema y sobreproducción de cereales iban de la mano. Los récords en términos de producción se batían uno tras otro sin que cesaran la especulación y la escasez para una parte importante de la población mundial. Y ello precisamente cuando la escasez se atribuía, desde luego, a la excesiva presión demográfica. Este argumento se extendió en el siglo XIX y nuevamente en vísperas de la Primera Guerra Mundial, y después de ella, entre los nazis, los soviéticos, los fascistas e incluso entre algunos liberales. Este mismo discurso ha acompañado ciertas políticas llamadas de desarrollo hasta nuestros días. Así, suele afirmarse que, si en la India o más en general en Asia se propagan las hambrunas, la desnutrición y las enfermedades, se debe a que en esos países tienen demasiados hijos. Esta observación es en gran medida errónea; por un lado, tal como lo hemos mencionado, el crecimiento en la producción de cereales supera ampliamente al de la población; el problema no es ni técnico ni demográfico, sino meramente distributivo. Por otro lado, la tasa de crecimiento de la natalidad tiende actualmente a disminuir a escala mundial, incluso en

algunas regiones de África. El pico a escala mundial de la tasa de crecimiento demográfico se alcanzó a fines de la década de 1960 (2% anual); desde entonces, la tasa de fertilidad se redujo de 4,5% a 2,5% y, en consecuencia, la tasa de crecimiento demográfico también bajó a 1,2% en 2015. Para las décadas venideras, se anticipa incluso una baja a escala mundial, con una reducción de la población en Asia oriental a partir de 2040; Asia del Sur debería alcanzar su pico hacia 2060-2070, mientras que África subsahariana tendrá una tasa de crecimiento demográfico positiva hasta fines del siglo XXI, pero con una desaceleración que comenzaría a partir de 2050²².

En cambio, el ganado, un factor tradicional de limitación de los cereales (en competencia por las superficies agrícolas), ha adquirido un nuevo y espectacular peso. Actualmente, el ganado y los consumidores de carne son los peores competidores de los consumidores de cereales. Sin embargo, esta transformación no afecta a todos del mismo modo, ya que las desigualdades en este campo siguen siendo importantes entre los países desarrollados, una parte de Asia y América Latina, por un lado, y África y partes de Asia, por el otro. Estas desigualdades en términos de consumo de carne y de acceso a los cereales son también significativas entre los diferentes estratos sociales de las poblaciones afectadas²³.

22. Ian Angus y Simon Butler: *Une planète trop peuplée? Le mythe populationniste, l'immigration et la crise écologique*, Éditions Écosociété, París, 2015.

23. A. Stanziani: *Capital Terre*, cit.

Como consecuencia de estos desplazamientos en términos de utilización de las superficies, las tensiones sobre el trigo son a la vez más globales y más violentas. Actualmente, la producción mundial de trigo se concentra en cinco países o regiones: EEUU, la Unión Europea, Rusia y Ucrania, China y la India; las dos últimas potencias operaron un impresionante desplazamiento de superficies agrícolas hacia el trigo con el fin no solo de alimentar a su población, tal como lo afirman sus dirigentes, sino también y sobre todo para participar activamente en la especulación global, tal como lo refleja su respectiva presencia en el mercado mundial del trigo tras el comienzo de la guerra en Ucrania.

En este marco, la reconstrucción de Rusia después de la presidencia de Boris Yeltsin se basó en estrategias clásicas: por un lado, la geopolítica y la diplomacia hábilmente orquestada; por el otro, el trigo. La producción rusa no dejó de crecer a lo largo de los últimos 20 años; el control de Ucrania no apunta solo al mar Negro y su acceso al Mediterráneo, sino también y sobre todo a la producción de cereales y su papel clave en los equilibrios mundiales. Los países en torno del mar Negro son nuevamente decisivos: Rusia, Ucrania, Kazajistán, Turquía y Rumania representan 25% de las exportaciones mundiales de trigo. Los dos primeros países son por lejos los actores más importantes; el control de uno sobre el otro es por ende crucial tanto en geopolítica como en economía.

Conclusión

Las actuales tensiones en torno de los cereales y el trigo, en particular en relación con la guerra en Ucrania, son a primera vista el resultado de una escasez. Esta última resulta innegable, pero sería reduccionista explicarla únicamente a través del modelo de la oferta y la demanda. En efecto, a partir de nuestro relato histórico, surge claramente que la escasez actual refleja no solo la evolución coyuntural, sino también tendencias estructurales a largo plazo: la ambición expansionista de Rusia basada en su papel en el comercio internacional y más tarde mundial del trigo; la lenta evolución de los mercados occidentales, y mundiales, hacia una desregulación especulativa global de las materias primas y los productos de primera necesidad.

Rusia busca adueñarse del trigo ucraniano según una lógica imperial presente desde el siglo XVII. Desde su creación, el Imperio Ruso vio en el acceso al mar Negro y en el control de los mercados internacionales del trigo dos objetivos geopolíticos prioritarios. Al mismo tiempo, esta estrategia, tanto en el pasado como en la actualidad, no sería exitosa si, en Occidente y luego a escala mundial, la especulación con el trigo —desde los mercados a plazo hasta los *futuros* y la especulación global actual— no le hubiera creado un contexto propicio. Generando una escasez de algún modo artificial, a pesar de las capacidades técnicas y el transporte, los comerciantes y luego los capitalistas internacionales (que actualmente

incluyen también a empresas indias, chinas y brasileñas) le dan una ventaja a Vladimir Putin.

Finalmente, estas dos dinámicas convergieron gracias a la manera en que se gestionó la «transición» del socialismo al capitalismo en Rusia y en el contexto internacional con el cambio de milenio: frente al dilema de si debe comenzarse por instaurar la democracia o los mercados, la mayoría de los observadores y responsables europeos y rusos optaron por la segunda solución, olvidando que en varias realidades históricas, desde la

Rusia zarista hasta China y ciertos «tigres» del Sudeste asiático, el auge de los mercados no estuvo en absoluto acompañado por la implementación de instituciones representativas. La Rusia postsocialista emprendió ese mismo camino y, por ello, su expansionismo territorial se hace eco de la eliminación de cualquier oposición real interna. Democracias en crisis, incluso ausentes, neoliberalismo y antiguas-nuevas formas de expansionismo forman así un todo, en el cual parece difícil modificar un elemento sin afectar los otros dos. ☒

ÍCONOS

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES

Enero-Abril de 2023

Quito

Vol. xxvii Nº 75

URBANISMOS HABITADOS: VIDA SOCIAL DEL ENTORNO CONSTRUIDO EN AMÉRICA LATINA

DOSSIER: Presentación del dossier, **María Gabriela Navas-Perrone y Juliana Marcús**. Resiliencia y ciudad neoliberal: una genealogía sobre América Latina, **Andrea Lampis**. Miradas sobre la costa del litoral argentino. La comunidad pesquera ante la planificación metropolitana, **Diego Roldán y Lisandro Arelovich**. ¿Hay un modelo urbanístico poscovid? La pandemia como catalizadora de transformaciones urbanas en Buenos Aires, **Diego Ezequiel Vázquez y Martina Daniela Berardo**. Habitar territorios en riesgo: apropiaciones espaciales y disputas simbólicas en dos barrios periféricos de Quito, **Alfredo Santillán y Elisa Puga-Cevallos**. La ciudad se hace en la fiesta: transformaciones periurbanas en las celebraciones patronales de Guadalajara, **Samuel Hernández-Vázquez y Carlos Ríos-Llamas**. TEMAS: Inequidad educativa durante el aislamiento por covid-19 en Buenos Aires, **Mariela Cardozo, Corina Aimetta y Sandra Marder**. Del acomodamiento civil deficiente al gobierno político de la Defensa: planeamiento estratégico del sector en Argentina, 2015-2021, **Luciano Anzelini**. Antropología ontológica e interculturalidad de la salud en el pueblo shuar de Zamora-Chinchipe, **Christian Tym**. Entre la familia y el mercado: pobreza femenina en un programa de asistencia social en Chile, **Claudia Calquin-Donoso y Rodrigo Guerra-Arrau**. Funciones agroecológicas de los nichos de agrobiodiversidad en la ruralidad de Bogotá, Colombia, **Stefan Ortiz, Catalina Quiroga-Manrique, Julieth Monroy-Hernández y Darío Pérez**.

Íconos es una publicación cuatrimestral de Flacso-Ecuador, La Pradera E7-174 y Av. Almagro, Quito, Ecuador. Tel.: (593 2) 3238888. Correo electrónico: <revistaiconos@flacso.edu.ec>. Página web: <www.revistaiconos.ec>.



| TEMA CENTRAL

Elites, política y desigualdades en América Latina

De oligarquías y hombres de paja

*¿Cómo entender el capital
en América Latina?*

Mariana Heredia

En América Latina, el término «oligarquía» tiene una larga historia, ha organizado numerosos combates políticos y sociales, y sigue operando en la visión del mundo de los sectores progresistas. Pero ¿en qué medida sirve para entender el capitalismo actual y sus ramificaciones en la región?, ¿qué peso tienen los viejos apellidos patricios y cómo se modificaron sus actividades? y, en fin, ¿sigue teniendo sentido su uso?

Una sorpresa

Un *petit hotel* sobre la calle Florida de la ciudad de Buenos Aires, una placa de bronce con el nombre de la entidad, luego el *fumoir*, la peluquería, la escalera de caracol y por fin los sillones de tapicería floreada, la vajilla de plata y porcelana, el escritorio de madera maciza delante de un ventanal. Un mensaje titulado «audiencia con el Presidente», recibido por mail en abril de 2001, me había permitido, unos días antes, franquear la puerta. Ahí estaba el principal dirigente de la Sociedad Rural

Mariana Heredia: es socióloga por la Universidad de Buenos Aires (UBA), doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina, y profesora y directora de la maestría en Sociología Económica de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad de San Martín (UNSAM). Es autora de numerosos artículos en revistas nacionales y extranjeras y entre sus libros se destacan: *Cuando los economistas alcanzaron el poder* (Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2015) y *¿El 99% contra el 1%?* (Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2022).

Palabras claves: capitalismo, materias primas, oligarquía, ricos, América Latina.

Argentina¹, un hombre de apellido patricio, maduro y robusto, dispuesto a conversar conmigo sin apuro. Más tarde me conduciría a la biblioteca, donde sus empleados me facilitaron las actas que registraban la contabilidad de la organización y cada discurso de las autoridades, de aparición muy frecuente en la prensa. Durante nuestra charla, el dirigente rural se encargaría de subrayar el aporte de los «hombres de campo» al progreso del país, de insistir en la responsabilidad de las elites en el destino de la nación. Al hacerlo, se referiría a las dirigencias en un sentido amplio en el que obviamente él se incluía.

Semanas más tarde y después de una insistencia férrea, logré acceder a un ignoto departamento de la *city* financiera porteña. Allí se ubicaba la sede de la Asociación de Bancos de Argentina, la organización que por entonces representaba a los principales bancos privados (nacionales y extranjeros) del país. A pesar de mi perseverancia y de todos los membretes académicos que pude movilizar, ninguna de sus autoridades aceptó recibirme. Terminaron atendiéndome dos empleados de rango medio, celosísimos de la información que les solicitaba, ofreciéndome documentación escasa y a cuentagotas. Al recorrer la prensa, también los periodistas se quejaban de la reserva de los banqueros y de sus representantes. En medio de una crisis monetaria y financiera, en sus pocas apariciones públicas, los dirigentes de la banca exigían el respeto de las leyes del mercado, atribuyendo todas las dificultades de la nación a los errores de su «clase política».

Una mirada superficial podría haberme llevado a concentrar mi atención en los hombres de la Rural, herederos confesos de la vieja oligarquía. Eran ellos finalmente quienes se mantenían por generaciones dentro de los estratos superiores, quienes reconocían su riqueza y su poder, quienes delimitaban un círculo selecto de familias honorables, quienes se exhibían con orgullo a plena luz del día. No obstante, al cotejar con otras fuentes, entendí que tomar ese camino habría sido un gran error. Aun cuando algunos fueran descendientes de linajes coloniales, las autoridades de la Sociedad Rural no eran particularmente ricas ni lograban que el gobierno respondiera a sus reclamos. En las antípodas, muchos banqueros detentaban una prosperidad más reciente o eran gerentes cosmopolitas, pero gestionaban enormes patrimonios, desarrollaban negocios que les habían procurado cuantiosas ganancias y lograban doblegar a las autoridades con un discurso imperativo e influyente. Sin otros elementos de juicio, la forma en que se hacían visibles y se presentaban a sí mismos me habría llevado a conclusiones equivocadas: los hombres de la Sociedad Rural no eran tan opulentos y poderosos como

1. También conocida coloquialmente como «la Rural» o «la SRA» por sus siglas, la entidad nuclea, desde 1866, a los más grandes propietarios y productores agrícolas y sobre todo ganaderos de todo el país.



pretendían ni los de la Asociación de Bancos tan marginales e irrelevantes como aparentaban².

La sorpresa abrió en mí un primer interrogante: ¿y si por perseverar en el estudio de la elite tradicional perdía de vista a quienes se imponían en la economía y la política? ¿Y si replicando estudios hechos en otros países u otros tiempos perdía de vista el modo en que se estructuraban ahora las desigualdades? ¿Y si en lugar de regodearse en la distinción de sus privilegios las nuevas elites cultivaban una persistente discreción?

De Aristóteles a América Latina

De raíces griegas que combinan el pequeño número con las tareas de mando, la noción de oligarquía se opone, desde los escritos aristotélicos, a la democracia. Aunque la definición parezca diáfana, las controversias persistieron desde la elaboración de la *Política* cuatro siglos antes del nacimiento de Cristo³. La connotación negativa atribuida tempranamente al término no reposaba solo en la contraposición del gobierno de pocos con aquel de las mayorías, sino que remitía también a los orígenes y la orientación de quienes detentan el poder. Para algunos, los oligarcas refieren siempre y en todo lugar a los ricos, aquellos que acumulan y atesoran riquezas en detrimento del resto. Para otros, los oligarcas son aquellos que, más allá de sus patrimonios y trayectorias, abandonaron la búsqueda del bien común para atrincherarse en la defensa de intereses particulares.

Anclado en esta tradición clásica, Wilfredo Pareto renegaba de la contraposición que le servía de fundamento. De acuerdo con el padre de la teoría elitista, «[e]xcepto en intervalos muy breves de tiempo, los pueblos están siempre gobernados por una minoría». Lejos de ser una desviación, el fenómeno oligárquico, entendido como el gobierno de unos pocos, era el destino necesario de todos los regímenes políticos a lo largo de la historia. Ahora bien, según el teórico italiano, esto estaba lejos de significar que siempre gobiernan los mismos. En sus palabras,

de acuerdo con una ley fisiológica, las elites no duran. Como consecuencia, la historia del hombre es la historia del continuo reemplazo de ciertas elites: algunas ascienden y otras declinan. (...)

2. Ver M. Heredia: «Reformas estructurales y renovación de las elites económicas: estudio de los portavoces de la tierra y del capital» en *Revista Mexicana de Sociología* vol. 65 N^o 1, 1-3/2003.

3. Salvador Rus Rufino y Francisco Arenas-Dolz: «El problema de la oligarquía en la *Política* de Aristóteles» en *Revista de Estudios Políticos* N^o 181, 7-9/2018.

Claro que la nueva elite que busca sustituir a la vieja, o al menos compartir su poder y sus honores, no admite su intención de manera franca y abierta. En lugar de eso, asume el liderazgo de los oprimidos, declara su decisión de actuar no por su bien, sino por el bien de las mayorías y así va a la batalla: no por los derechos de una clase restringida, sino por los de toda la ciudadanía. Por supuesto que, una vez obtenida la victoria, subyugará a sus aliados o les ofrecerá solo algunas concesiones formales.⁴

Fecunda para caracterizar a los regímenes de todos los tiempos, la oligarquía adquirió en América Latina una referencia histórica singular. Grandes carismas visionarios, hábiles para el desarrollo de actividades primarias o extractivas, que lograron garantizarse a sí mismos y a los suyos estabilidad en el universo de la riqueza, con lazos jerárquicos claros sobre las poblaciones nativas y sus trabajadores; miembros conspicuos de círculos selectos, deseosos de vanagloriarse de sus éxitos en público, con influencias eficaces sobre las dirigencias políticas, quienes serían llamados más tarde «oligarcas» comenzaron a afirmarse en la segunda mitad del siglo XIX en distintas regiones del continente⁵.

Fecunda para caracterizar a los regímenes de todos los tiempos, la oligarquía adquirió en América Latina una referencia histórica singular

Tiempo más tarde, los monumentos, los nombres de las calles, la compilación escrupulosa de documentos oficiales e íntimos, las obras que celebraron sus proezas e infamias vendrían a enlazar durablemente a las viejas familias patricias con la construcción de los Estados nacionales y la integración (en general a sangre y fuego) de sus territorios y poblaciones.

Como tan bien se deduce de los escritos de Aristóteles y Pareto, este proceso no ocurrió en esta región, como en ninguna otra, de manera lineal. Exceptuando la continuidad imperial que acompañó la conformación del Estado brasileño, tanto en Argentina como en Chile, en México como en Colombia, fueron necesarias guerras y conflictos internos para que una fracción o una alianza de fracciones lograra imponerse sobre las demás. Solo entonces las llamadas «repúblicas oligárquicas» pudieron enfrentar el doble imperativo que atraviesa la bandera brasileña: la búsqueda de alcanzar a la vez el orden y el progreso de sus naciones.

4. W. Pareto: *The Rise and Fall of Elites* [1901], Transaction, New Brunswick, 1991, p. 36 (traducción de la autora).

5. Numerosos autores datan esta emergencia. Entre ellos, Sergio Bagú: «Tres oligarquías, tres nacionalismos: Chile, Argentina, Uruguay» en *Cuadernos Políticos* N° 3, 1-3/1975.

Dos condiciones históricas acunaron, a finales del siglo XIX, el poder de las oligarquías latinoamericanas. En términos económicos, el predominio de estos grupos se asentó en la apropiación de recursos naturales claves. En Argentina, la concentración de la propiedad rural se fue afirmando y excluyó tanto a las comunidades originarias como a la mayoría de los colonos europeos que llegaron después. En México y Chile, la situación fue más compleja porque el dominio de la tierra se combinó con la explotación minera en la que predominaban los capitales extranjeros. Pero los recursos naturales no habrían sido suficientes sin dos alianzas cruciales. La primera fue aquella que Tulio Halperin Donghi denominó el «orden neocolonial»: un entramado de vínculos con las potencias imperiales, primero con Gran Bretaña y posteriormente con Estados Unidos, que permitió que los países se insertaran en la división internacional del trabajo como proveedores de recursos naturales valorados internacionalmente⁶. La segunda alianza consistió en la construcción de acuerdos entre autoridades nacionales y locales⁷. En algunos casos, existió cierta correspondencia entre quienes detentaron el dominio de los recursos económicos dinámicos y aquellos que, a través del Estado, decidieron sobre los designios de distintos territorios. En otros, la correspondencia fue menor, y distintos mecanismos (tributarios, legislativos) permitieron cimentar los acuerdos que fundaron el orden.

Revoluciones, reformas, tecnología: el largo declive de la sociedad tradicional

En qué medida las viejas oligarquías siguieron controlando los resortes económicos y políticos de sus naciones en el siglo XX y XXI es un interrogante que requiere indagaciones minuciosas y complejas. Como en todos los países, siguió y sigue habiendo en los de América Latina estratos superiores que controlan recursos estratégicos y ejercen influencia. La cuestión es si los recursos, los apellidos y las formas de ejercer el poder perduraron a lo largo del tiempo.

Responder de manera concluyente a esta pregunta requeriría una labor titánica. Demandaría, en efecto, reconstruir en paralelo la genealogía de la riqueza, de las familias y sus proles para observar en qué medida los recursos siguieron siendo valiosos, se reprodujeron, ampliaron y continuaron en manos de los descendientes. Saldar esta inquietud exigiría primero identificar qué temporalidad es juzgada mínima para construir un linaje

6. T. Halperin Donghi: *Historia contemporánea de América Latina*, Alianza, Buenos Aires, 1992.

7. Entre otros autores que trataron la cuestión, v. Natalio Botana: *El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916* [1974], Sudamericana, Buenos Aires, 1998.

(¿el pasado colonial?, ¿la construcción de los Estados nacionales?, ¿las primeras décadas del siglo xx?). Luego, sería necesario proceder a una doble reconstrucción genealógica: la de los apellidos y la de la fortuna. De cada una de estas genealogías se derivarían nuevas preguntas: ¿qué proporción en el parentesco se requiere para ser considerado legítimo heredero de una estirpe?, ¿qué magnitud patrimonial es juzgada suficiente para concluir que estamos frente a la reproducción exitosa de una elite? Tarea compleja para los especialistas en las cortes medievales europeas, sociedades cerradas, estables y donde esta información se registraba escrupulosamente, resulta una empresa faraónica para un continente con la agitación e informalidad de América Latina en la modernidad.

A la espera de indagaciones de semejante magnitud, algunos indicios parecen reafirmar un peso modesto de las familias tradicionales en la vida política y económica contemporánea. La inestabilidad institucional así como las recurrentes crisis de acumulación parecen haber sido, durante el siglo xx, oportunidades propicias para trastocar la composición de las familias latinoamericanas más poderosas y adineradas. Los historiadores son los más renuentes a certificar una permanencia cuya erosión muchos de ellos contribuyeron a documentar. El indicio más conocido del declive de la sociedad tradicional fue el ocaso político de las viejas oligarquías. El surgimiento de movimientos contestatarios, de partidos revolucionarios y reformistas, y de gobiernos que ampliaron el arco de los grupos sociales representados en el poder político socavó la relación exclusiva o preferencial de las familias tradicionales con los regímenes políticos de la región⁸. A su vez, este desafío tendió a corresponderse con un cambio drástico de las condiciones que habían alumbrado la bonanza de la vieja oligarquía. Con la Gran Guerra y la crisis de 1930 quedó en evidencia la vulnerabilidad de la región y de sus elites a las fluctuaciones del mercado externo. Países como Chile y México llevaron a cabo sendas reformas agrarias que fueron alterando la propiedad de la tierra y erosionando el poder de las elites rurales⁹. Argentina y Brasil no avanzaron por esa vía, pero adoptaron reformas –como el congelamiento de los arriendos o los precios– que debilitaron las potestades de muchos

¿Qué magnitud patrimonial es juzgada suficiente para concluir que estamos frente a la reproducción exitosa de una elite?

8. La Revolución Mexicana, por caso, modificó el rol del Estado y de la tierra en la acumulación de capital. Al respecto, v. Roderic Camp: *Entrepreneurs and Politics in Twentieth-Century Mexico*, Oxford UP, Nueva York, 1989.

9. En el caso mexicano, así lo documentan Larissa Lomnitz Adler y Marisol Pérez-Lizaur: *A Mexican Elite Family, 1820-1980: Kinship, Class, and Culture*, Princeton UP, Princeton, 1987.

productores agropecuarios¹⁰. Incluso algunas postales ilustran en qué medida las familias de apellidos notables buscaron casar bien a sus hijas para salvarse de un descenso estrepitoso en la escala social¹¹.

Las actividades primarias que habían respaldado a las viejas oligarquías no solo dejaron de ser tan rentables; en las naciones más grandes del continente, fueron reemplazadas por el dinamismo y la centralidad de las actividades urbanas. Ciertamente, algunos de los herederos más lúcidos de las familias tradicionales supieron reorientar sus negocios. No obstante, la pujanza del comercio, los servicios y la industria facilitada por los Estados interventores alumbró nuevas oleadas de enriquecimiento y gestó nuevas fortunas. Surgieron así nuevas categorías para designar a estos empresarios prósperos entre las cuales la de «burguesía nacional» conquistó las mayores esperanzas y desilusiones. Como sea, los patrimonios anclados ahora en actividades destinadas a las ciudades y a los mercados internos reemplazaban en el podio de la riqueza aquel amasado en la naturaleza y para la exportación por parte de las viejas familias.

Claro está, en la mayoría de los países del continente, las actividades primarias no perdieron importancia. De hecho, las reformas de mercado primero y el *boom* de los *commodities* después contribuirían a finales del siglo xx a relanzarlas. Ahora bien, llegados al presente, ni las formas de producción son las mismas ni son los descendientes de las viejas oligarquías quienes se ubicaron a la vanguardia de esta renovación¹². En México o en Brasil, en Argentina o en Chile, los frutos de la naturaleza siguieron siendo una fuente de riqueza singular en términos de exportaciones, recursos tributarios y, en el caso de los productos agrícolas y ganaderos, de bienes fundamentales para el consumo de las mayorías. No obstante, con los avances en las técnicas extractivas y en las semillas y fertilizantes empleados en la producción agrícola a gran escala, la centralidad de la tierra perdió importancia frente a otros factores de la producción y comercialización.

La centralidad de la tierra perdió importancia frente a otros factores de la producción y comercialización

10. Para Argentina, v. Roy Hora: *Los terratenientes de la pampa argentina 1860-1945*, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2002.

11. La literatura argentina de mediados del siglo xx es pródiga en historias de descensos sociales compensados con la búsqueda de buenos acuerdos nupciales. Entre ellas, Luisa Mercedes Levinson: *La casa de los Felipes*, Santiago Rueda Editor, Buenos Aires, 1969 o Sara Gallardo: *Los galgos, los galgos*, Sudamericana, Buenos Aires, 1968.

12. Para el caso de la soja en Argentina, v. Carla Gras y Valeria Hernández: *Radiografía del nuevo campo argentino*, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2016 y Carlos Freytes y Juan O'Farrell: «Conflictos distributivos en la agricultura de exportación en la Argentina reciente (2003-2015)» en *Desarrollo Económico* vol. 57 N° 221, 2017.

Quienes lideraron estas innovaciones fueron muchas veces las autoridades o las empresas globales que intervienen en la maximización de los rindes y que no tenían necesariamente una relación de apego perdurable con los territorios. Así, los Estados, las compañías extranjeras o los fondos de inversión se afirman hoy, mucho más que los herederos, como los grandes protagonistas de la primarización de la producción latinoamericana.

Es probable que las viejas oligarquías sigan siendo fuertes en las zonas más alejadas de los centros neurálgicos de cada nación donde la propiedad de la tierra sigue siendo fundamental, el poder económico y político construyeron lazos estrechos y los herederos lograron perpetuarse en las posiciones más encumbradas, inmunes al paso del tiempo. Pero presuponer que eso ocurrió en la cúspide de los gobiernos latinoamericanos resulta por lo menos dudoso.

Pocos, blancos, ricos... ¿y qué más?

Al menos en las incursiones que hice al mundo de las elites en Argentina, la noción histórica de oligarquía resultaba, para propios y ajenos, un anacronismo. Tanto en las actividades industriales como en las financieras, en las primarias como en las comerciales, en los clubes selectos como en la política, todos concluían que lejos de constituir un grupo poderoso y exclusivista, los miembros de familias tradicionales ocupan un lugar secundario. Según protagonistas y observadores, las familias tradicionales «desaparecieron», «se extinguieron en la tercera generación», «están en pie de igualdad con los otros», «quedan solo de adorno».

Pronto comprendí que, con mayor o menor conciencia, la figura del oligarca suele evocar imágenes más afines a los personajes de las novelas de Balzac que a retratos fidedignos de los grandes protagonistas del capitalismo globalizado. Envuelto por la magia del *terroir* y el culto de las tradiciones, el vino me ofreció una experiencia reveladora. Al ir al encuentro de los bodegueros, esperaba encontrar descendientes de familias de origen europeo, que habían logrado perpetuarse en el negocio, dotados de una distinción e influencia política propia de las aristocracias medievales. Al salir al terreno, la historia era bien otra. No solo el consumo de masas y los precios máximos habían alentado durante el siglo xx la erradicación de cepas selectas y su reemplazo por racimos más rendidores, sino que también habían favorecido la conformación de grandes empresas y cooperativas donde quedaban pocos herederos de la primera generación. La producción de un vino más sofisticado a finales del siglo xx había traído consigo a algunos productores nacionales visionarios (la mayoría de

riqueza reciente), aunque convivían con fondos de inversión de distintos afluentes, ejecutivos con trayectorias corporativas en sectores distantes, multinacionales productoras de bebidas espirituosas, jubilados extranjeros que se lo tomaban como un *hobby*, emprendimientos de diverso tamaño y organización¹³.

El vino mendocino era apenas una muestra de lo que define hoy a las elites latinoamericanas. Si bien estas economías siguen celebrando algunos grandes carismas, muchos de los cuales se hacen fuertes diversificando sus inversiones en distintas actividades, estos hombres en puestos de mando se encuentran muchas veces asociados o subordinados a accionistas. En el vino, como en otras industrias, en Argentina como en Brasil o México, podría decirse que existe cierta oposición entre los poderes corporativos internacionales y los grupos económicos diversificados de origen local. Pero las relaciones son complejas y móviles. Existen muchas formas de interpenetración e incluso cuando los empresarios locales logran afirmar solos su prosperidad, es probable que se conviertan en «baqueanos», concededores de su actividad, de los contactos locales, de la información necesaria para dar continuidad al negocio o desarrollar un nuevo emprendimiento con fondos extranjeros.

Más que delimitar un pequeño círculo de notables o de personalidades excepcionales, el capitalismo financiarizado incita a expandirlo y considerar las reglas impersonales que lo gobiernan. Como subrayan Aeron Davis y Karel Williams, al rechazar la vigencia de la tesis desarrollada en *La elite del poder* por Charles Wright Mills, hoy el poder económico remite menos

a un conjunto de grandes capitanes de empresa que a una diversidad de actores, en estado activo o latente, muchos de ellos «expertos intermediarios, de la tecnología a las finanzas, que no trepan por una única escalera organizacional, sino que se mueven entre oportunidades y crisis»¹⁴.

En este sentido, si bien siguen existiendo hombres de negocios anclados a sus territorios o vinculados de manera perdurable a una actividad, el florecimiento de las finanzas permitió concentrar grandes

ganancias apostando más bien a la liquidez y la diversificación. Al poder de los empresarios y ejecutivos ligados de manera más flexible a las grandes

**El florecimiento
de las finanzas
permitió concentrar
grandes ganancias
apostando más
bien a la liquidez y
la diversificación**

13. M. Heredia: «Globalización y clases altas en el auge del vino argentino» en *Revista Trabajo y Sociedad* N° 24, verano de 2015. Algo semejante ocurre con la bebida estrella de México, donde el predominio de compañías extranjeras es aún más contundente. Al respecto, v. Marie Sarita Gaytán: *¡Tequila! Distilling the Spirit of Mexico*, Stanford UP, Stanford, 2014.

14. A. Davis y K. Williams: «Introduction: Elites and Power after Financiarization» en *Theory, Culture and Society* vol. 34 N° 5-6, 2017, p. 19.

empresas privadas han de agregarse las peculiaridades de los capitales financieros. Los discursos críticos alimentan la sospecha de que detrás de estos flujos está el círculo acotado de ricos. No es cierto. Los capitales financieros aúnan recursos de distintos afluentes. Aunque muchos se nutran de las inversiones de magnates y, cuando son institucionales, de fondos aportados por grandes países, las principales fuentes son fondos de jubilación, pensión y seguro y la comercialización de instrumentos de securitización que combinan inversiones de mayor y menor retorno.

Ante esta integración más impersonal que comunitaria del capital en la era de la globalización, no sorprende que, a diferencia de lo postulado por la noción de oligarquía, las relaciones entre pares y la lealtad de los subordinados revistan menor importancia. Por un lado, muchos estudios demuestran que las redes interpersonales se debilitaron con las reformas de mercado y la mayor integración comercial y financiera de los distintos países¹⁵. Por el otro, la obediencia de los trabajadores depende de un conjunto mucho más sofisticado de dispositivos (biométricos, digitales, de vigilancia a distancia) que no requieren que las bases conozcan y reconozcan el poder de las elites. Si las clases altas globales despiertan admiración no es por sus apellidos centenarios sino por un «mérito» para la competencia que los hace, muchas veces, sentirse y ser reconocidos como moralmente superiores.

De este modo, el crispado rechazo por las oligarquías se parece más al encono contra un hombre de paja que a una denuncia susceptible de revertir los mecanismos que instituyen y reproducen las mayores desigualdades sociales en el continente. Los argumentos que evocan espantapájaros dan la ilusión de debilitar al oponente cuando en realidad establecen falsas confrontaciones, dejando las polémicas ancladas en la emoción, pero desprovistas de veracidad y empuje. Muchos latinoamericanos que conforman hoy las clases más altas accedieron de manera relativamente reciente a posiciones encumbradas y replican prácticas semejantes a las endilgadas a las familias tradicionales. En la medida en que honran el requisito de no haber reproducido sus fortunas a lo largo de generaciones y de haber labrado sus riquezas con esfuerzo, poco importa si son igualmente ricos y mezquinos que los demás. Por otro lado, el foco en unas pocas personalidades destacadas desatiende los mecanismos que gobiernan el capitalismo y que permiten un ejercicio del poder menos visible y responsable. Quienes buscan acumular ganancias ya no necesitan tanto como en el pasado

15. Entre estos estudios, suele citarse como referencia el de William Carroll y Meindert Fennema: «Is There a Transnational Business Community?» en *International Sociology* vol. 17 N^o 3, 2002, pp. 393-419.

estar anclados personalmente en el territorio, contratar grandes plantillas de personal, vigilar a sus subordinados, negociar en nombre propio con las autoridades de turno.

Es cierto, las elites latinoamericanas siguen siendo pocas, blancas, ricas. La denuncia de las viejas oligarquías agregaba bastantes condimentos más a la definición aristotélica. En este marco, si las formas de organizar la riqueza y de ejercer el poder dejaron atrás las novelas costumbristas y tienen los rasgos del capitalismo 4.0, ¿para qué arrastrar una categoría zombi? Los intelectuales críticos pueden seguir deslumbrándose con la *boiserie* y las revistas de *celebrities*, o mirar ahí donde anidan los mecanismos que fundan hoy nuestra sociedad y sus nuevas inequidades. ☒

RELACIONES INTERNACIONALES

Julio-Diciembre de 2022

La Plata

Año 31, N° 63

EDITORIAL: **Norberto Consani**. DIÁLOGOS: **Abdelaziz Benali Cherif**. ESTUDIOS: Los rostros del error: decisiones políticas adoptadas sin criterio estratégico, **Julio César Spota**. La contribución de la diplomacia parlamentaria al Derecho Internacional Humanitario. El caso de Malvinas y el ADN de los caídos, **Gonzalo Salimena**. La configuración de la dinámica cooperativa en seguridad en Suramérica entre 1985 y 2015, **Ángela Camargo**. La economía política internacional de las bioenergías: avances y límites en el mercado eléctrico argentino, **Ignacio Sabbatella**. Cuba y la importancia de la agencia en la autonomía, **Matías Mongan Marcó**. Después del dólar: perspectivas para el sistema monetario internacional, **Adrien Sergent**. Bilateralismo preponderante entre Estados Unidos y China durante 2019-2021, **Sadcidi Zerpa de Hurtado**, **Alberto José Hurtado Briceño**. Asiatic decision maker: Russian Federation and its search for safety strategic leadership in Central Asia by the Shanghai Cooperation Organization (SCO) (2001-2018), **Arthur Mastroiani** **Máximo de Lucena**, **Alexandre César Cunha Leite**, **Daniela Vieira Secches**. REFLEXIONES: Algunas reflexiones acerca de la Comunidad de destino compartido para la humanidad en una nueva era... bélica, **María Francesca Staiano**. Reflexiones: G20, ¿declina?, **Alberto Ford**. HISTORIA: A 100 años de la Marcha sobre Roma, **Patricia Kreibohm**.

Director – Fundador: Dr. Norberto Consani

Relaciones Internacionales es una publicación del Instituto de Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de La Plata. Calle 48 e/ 6 y 7 – 5° Piso, 1900, La Plata, Argentina. Tel.: (54-221) 4230628. Página web: <www.iri.edu.ar>. Correo electrónico: <iri@iri.edu.ar>.

¿Quién le pone el cascabel al gato?

Las elites y su poder de influencia en Centroamérica

Francisco Robles-Rivera / Inés Nercesian

En la década de 1990, los acuerdos de paz y las transiciones democráticas parecieron abrir nuevos horizontes en una región tradicionalmente atravesada por profundas desigualdades. Sin embargo, hoy han vuelto al primer plano el autoritarismo, la violencia y la ausencia de horizontes compartidos para gran parte de la población. En este marco, el estudio de las elites ilumina sobre las similitudes y diferencias entre los países centroamericanos y sobre la persistencia de sistemas desiguales.

La profundización de las desigualdades durante los años críticos de la pandemia de covid-19 y la pospandemia revitalizó los históricos debates acerca de las elites, sus influencias y la concentración de recursos. El foco puesto sobre las elites y las desigualdades constituye un avance crucial en relación con épocas anteriores, cuando en lugar de observar las causas de las desigualdades se estudiaban de manera casi exclusiva

Francisco Robles Rivera: es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín. Se desempeña como profesor de la Universidad de Costa Rica. Realiza investigaciones comparativas sobre la desigualdad, los medios de comunicación, las elites y la financiación privada de los partidos políticos. Correo electrónico: <francisco.robles@ucr.ac.cr>.

Inés Nercesian: es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina y profesora de la UBA. Investiga sobre las elites y las desigualdades en América Latina. Es autora del libro *Presidentes empresarios y Estados capturados. América Latina en el siglo XXI* (Teseo / IEALC, Buenos Aires, 2020). Correo electrónico: <inercesian@gmail.com>.

Palabras claves: elites, Estado, puertas giratorias, América Central.

la pobreza y la situación de los sectores más vulnerables. En el caso centroamericano, los estudios sobre las elites han tomado auge en un momento convulso. Si bien a finales de la década de 1990 se aplaudió la llegada de la paz y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el avance del autoritarismo, la violencia, el debilitamiento institucional y la profundización de las desigualdades en los últimos años terminaron de desmontar las esperanzas puestas en la región. En este artículo nos preguntamos sobre el poder de influencia de las elites centroamericanas para mantener un sistema económico y político que privilegia la concentración de dinero, recursos e ideas¹. Lejos de las miradas simplificadoras que refieren a la región como un bloque homogéneo, planteamos que Centroamérica es un verdadero laboratorio de desigualdades, donde la construcción de futuros y pactos sociales depende de viejas e históricas construcciones asimétricas y de relaciones y mapas de poder singulares de cada país. En un contexto global complejo, caracterizado por la opacidad de ciertos datos y la dificultad en el acceso a la información sobre las elites económicas, proponemos algunas claves para el estudio de su poder de influencia sobre las políticas públicas.

De qué hablamos cuando hablamos de elites

Uno de los primeros puntos a clarificar es el uso de los conceptos. El concepto de elites ha sido ampliamente estudiado teórica y empíricamente tanto por las teorías clásicas sobre el elitismo como por aquellos estudios que representan miradas más renovadas sobre el tema. También ha sido largamente discutido dentro del campo del marxismo, en el que las miradas más recelosas de la teoría de clases cuestionaron su utilización con el argumento de que ocultaba la verdadera contradicción de clases, en tanto que otros enfoques defendieron su compatibilidad.

Sostenemos que el concepto de elites refiere a las personas, en su mayoría hombres, que mantienen posiciones de privilegio en instituciones poderosas, lo cual les permite ejercer una influencia desproporcionada sobre las decisiones de políticas estatales². Consideramos elites económicas a los dueños y/o socios de las principales empresas privadas en cada país y elites políticas a aquellas personas que ocupan altos cargos de decisión en el Estado (presidentes, cargos ministeriales o legislativos). Entendemos también que

1. F. Robles-Rivera e Inés Nercesian: «Tiempos de pandemia: elites e influencia en Centroamérica» en *Revista de Ciencia Política* vol. 42 N° 3, 12/2022.

2. Cristóbal Rovira-Kaltwasser: «Political Elites in Latin America» en Heinrich Best y John Higley (eds.): *The Palgrave Handbook of Political Elites*, Palgrave-Macmillan, Londres, 2018.

el concepto de elites permite medir empíricamente a los sujetos (la cúpula empresarial o la cúpula política) sin por ello abandonar categorías de clases; por ejemplo, podemos estudiar a las elites estatales e identificar cuál es el grado de imbricación que poseen las clases económicamente dominantes, o estudiar de qué manera ejerce influencia la cúpula empresarial medida en términos de las empresas de mayor facturación del país, observando los mecanismos concretos de ejercicio del poder.

Los estudios sobre el tema también han dado cuenta de las formas de organización de las elites para influir en las políticas estatales. Los modos y grados de influencia de las elites, que incluyen desde el condicionamiento hasta el veto, permiten entender las posibilidades y limitaciones estructurales que existen para el diseño y la implementación de políticas públicas con sesgo redistributivo³. En la bibliografía clásica, se plantean dos fuentes de poder de las elites para influir en la política pública: el poder instrumental y el poder estructural⁴. El primero se refiere a la capacidad de las elites de participar activamente en la política a través del financiamiento electoral, las denominadas «puertas giratorias» (entre el mundo privado y el público) o la captura de medios⁵. El segundo se refiere a la capacidad de las elites de amenazar con retirar su capital del país o reducir sus inversiones cuando perciben que una política puede llegar a modificar el *statu quo*⁶. Distinguir y entender estos dos tipos de fuentes de poder es fundamental para pensar los medios y los mecanismos a partir de los cuales las elites ejercen su influencia y prever la capacidad de veto que puedan llegar a tener⁷.

En el largo plazo, el rol particular de las elites en la formación del Estado ha conllevado a la construcción o no de instituciones redistributivas y Estados con mayor fortaleza o debilidad en cuanto a sus capacidades⁸. En

En la bibliografía clásica, se plantean dos fuentes de poder de las elites para influir en la política pública: el poder instrumental y el poder estructural

3. Juliana Martínez-Franzoni y Diego Sánchez-Ancochea: «How Did Costa Rica Achieve Social and Market Incorporation?» en *CEPAL Review* N° 121, 4/2017.

4. Ralph Miliband: *The State in Capitalist Society*, Basic Books, Nueva York, 1969; Charles Wright Mills: *The Power Elite* [1956], Oxford UP, Nueva York, 2000.

5. Patrick Bernhagen: *The Political Power of Business: Structure and Information in Public Policy-Making*, Routledge, Londres-Nueva York, 2008; Tasha Fairfield: *Private Wealth and Public Revenue in Latin America: Business Power and Tax Politics*, Cambridge UP, Nueva York, 2015.

6. P. Bernhagen: ob. cit.; T. Fairfield: ob. cit.

7. T. Fairfield: ob. cit.

8. Daron Acemoglu y James A. Robinson: *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*, Crown, Nueva York, 2012. [Hay edición en español: *Por qué fracasan los países. Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza*, Ariel, Buenos Aires, 2014].

el caso particular de Centroamérica, las elites han aprovechado su posición dominante para definir los modelos de desarrollo⁹, los tipos y alcances de los acuerdos de paz¹⁰, los alcances y límites de los sistemas tributarios¹¹, el financiamiento de partidos políticos y también los candidatos a ocupar cargos de elección popular¹².

Hasta ahora, estos estudios permitían delinear una hegemonía sin precedentes de las elites económicas y una marcada capacidad de traducir en política pública sus intereses. Sin embargo, en la última década las elites han experimentado múltiples cambios, como la diversificación, internacionalización, distanciamiento de los gobiernos y emergencia de nuevos grupos, que junto con la transnacionalización de las economías abren vías para explorar comparativamente las diferencias entre las elites y sus capacidades de influencia. De ahí la importancia de pensar históricamente los conceptos e identificar sus transformaciones en relación con otros fenómenos, como el mercado, la economía y la política.

En la última década las elites han experimentado múltiples cambios, como la diversificación, internacionalización, distanciamiento de los gobiernos y emergencia de nuevos grupos

La coyuntura crítica que se abrió a partir de la pandemia profundizó la necesidad de explorar las pautas de acción de las elites en torno de la siguiente pregunta: ¿por qué en el

marco de la crisis, que pudo haber sido una coyuntura de oportunidad para la implementación de políticas redistributivas, se reprodujeron, en distintos grados, esquemas de privilegios? El fuerte peso de las elites, la enorme capacidad de influencia y los límites de las capacidades estatales fueron obstáculos en el desarrollo de políticas progresivas en Centroamérica, aun cuando la coyuntura crítica demandaba cambios para mitigar el impacto de la crisis. Así, hallamos cuatro recursos a disposición de las elites centroamericanas para influir en la política pública: su cohesión, el paso de empresarios a la

9. William I. Robinson: *Transnational Conflicts: Central America, Social Change and Globalization*, Verso, Londres, 2003; Alexander Segovia: *Integración real y grupos de poder económico en Centroamérica. Implicaciones para el desarrollo y la democracia de la región*, Fundación Friedrich Ebert, San José de Costa Rica, 2005.

10. Angelika Rettberg: «The Private Sector and Peace in El Salvador, Guatemala, and Colombia» en *Journal of Latin American Studies* vol. 39 N° 3, 8/2007.

11. Aaron Schneider: *State-Building and Tax Regimes in Central America*, Cambridge UP, Nueva York, 2012.

12. Kevin Casas-Zamora: *Paying for Democracy: Political Finance and State Funding for Parties*, ECPR Press, Colchester, 2005; F. Robles-Rivera: «El 'derecho de picaporte'. Financiamiento privado de las campañas electorales en América Central» en *Nueva Sociedad* N° 276, 7-8/2018, disponible en <www.nuso.org>.

vida pública —puertas giratorias—, sus capacidades para formar ideas y normas —poder discursivo— y, finalmente, las capacidades estatales en cada país.

Las elites, el Estado y la importancia de la historia

La mirada histórica es una variable crucial para comprender las diferencias entre los países, pero sobre todo para entender cómo y por qué las elites tienen a disposición ciertos recursos para ejercer su influencia. El modo en que estas se involucraron en los procesos de formación estatal influyó en las formas que adquirieron las instituciones, más o menos redistributivas, y en la debilidad o fortaleza de los Estados. El concepto de capacidades estatales refiere a las posibilidades de un Estado de ejercer autoridad sobre otros actores y regular con éxito la vida social, con el fin de hacer cumplir los derechos y atender las necesidades de la ciudadanía¹³. Es decir, cuando las elites económicas son fuertes y las organizaciones sociales son débiles, las capacidades estatales para controlar la influencia de las primeras serán muy limitadas.

Así, nos encontramos con situaciones diversas. Costa Rica es un país con una historia de formación estatal temprana y conducida por elites políticas que dio vida a la creación de un régimen democrático, proclive a reformas sociales y una estructura de tenencia de la tierra menos desigual. Tiene capacidades estatales moderadas, un sistema político fragmentado pero con elites políticas estables, y elites económicas diversificadas y concentradas en los grupos locales. En cambio, en El Salvador, la formación estatal se produjo de la mano de la consolidación del régimen oligárquico, con altos niveles de fragmentación y violencia. El sistema político se vio polarizado a partir de fines del siglo xx y tanto las elites políticas como las económicas atravesaron un proceso de disputas entre los grupos vinculados a la vieja economía y las elites emergentes surgidas a partir de las transformaciones económicas de la década de 1990. Guatemala, por su parte, se caracteriza por poseer capacidades estatales extremadamente débiles y un sistema político caótico y amorfo, donde las elites políticas se encuentran imbricadas con el poder económico. La economía del café y, tiempo después, los enclaves bananeros forjaron un tipo de elite económica cerrada que mantuvo una fuerte dependencia de Estados Unidos. Aunque también hubo un proceso de diversificación, la hegemonía continuó en manos de las elites históricas afincadas. En el país, sin

13. D. Sánchez-Ancochea y S. Martí i Puig: *Handbook of Central American Governance*, Routledge, Londres, 2013.

**La década de 1990
produjo la crisis del
modelo agroexportador
tradicional y los antiguos
grupos económicos
se transformaron
o surgieron nuevos
con capacidad de
veto político**

sistema de partidos, coexisten capacidades estatales débiles y elites económicas arraigadas a lo largo de la historia con importante influencia sobre el Estado. Honduras es el único país centroamericano donde la economía del café, y por tanto las elites económicas locales vinculadas a ella, no fue predominante. Aunque en toda la región hubo enclaves bananeros transnacionales en el marco de la expansión capitalista de EEUU, en Honduras este proceso fue más pronunciado. Esto provocó elites económicas más débiles frente a la injerencia extranjera estadounidense. Desde entonces la esfera estatal fue concebida como un espacio de captura, un instrumento de carácter privado utilizado por las elites económicas y políticas, donde el bipartidismo funcionaba como garante político¹⁴. En materia económica, la década de 1990 produjo la crisis del modelo agroexportador tradicional y los antiguos grupos económicos se transformaron o surgieron nuevos con capacidad de veto político.

La cohesión de las elites, una variable crucial

Los estudios sobre las elites económicas han encontrado que cuando estas se hallan nucleadas en organizaciones formales o relacionadas con partidos políticos juegan un papel clave en la construcción del Estado y las políticas públicas. Los trabajos sobre la cohesión de las elites destacan que estas cooperarán en acciones políticas para defender sus intereses¹⁵. Y su organización aumenta sus capacidades para movilizar recursos y para alcanzar objetivos comunes y aumenta su poder político¹⁶. En el caso de América Latina, el análisis de la cohesión de las elites ha sido útil para explicar el desarrollo de los acuerdos de paz y los alcances de las reformas tributarias. En líneas generales, cuanto mayor es la cohesión, más capacidad de presión poseen estas elites frente a las políticas estatales y mayor posibilidad de actuar según un criterio de representación de clase.

14. Darío Euraque: «La configuración histórica de las elites de Honduras ante el golpe de Estado del 2009» en *Anuario de Estudios Centroamericanos* vol. 45, 8/4/2019.

15. G. William Domhoff: *Who Rules America?: Power and Politics, and Social Change*, McGraw-Hill, Nueva York, 2006.

16. David Vogel: «The New Political Science of Corporate Power» en *The Public Interest* N° 87, primavera de 1987.

Las grandes cámaras empresariales son una lente a través de la cual mirar qué tan cohesionadas se encuentran las elites. En el caso centroamericano, sus organizaciones matrices son el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) de Guatemala, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) de El Salvador, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) de Nicaragua y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP). Se trata de la reunión de los representantes de las principales empresas del país con accesos privilegiados a los tomadores de decisión e influencia sobre medios de comunicación.

Honduras y Guatemala son dos casos en los que las elites se encuentran «graníticamente unificadas», tal como sintetizó un representante empresarial. En estos dos países, las elites acuerpadas respectivamente en COHEP y CACIF mantienen una hegemonía indiscutible sobre otros actores sociales, accesos privilegiados a los tomadores de decisión y poder de veto sobre políticas públicas. El Salvador y Nicaragua dan cuenta de un cambio en los mapas de poder en ambos países. En el caso de El Salvador, la otrora todopoderosa ANEP ha visto diluida su influencia tanto por disputas internas como por su pérdida de influencia sobre el Ejecutivo tras las derrotas electorales de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, la fuerza de derecha más importante del país) desde 2009 y, más recientemente, por los ataques directos del presidente Nayib Bukele a la entidad empresarial. En el caso de Nicaragua, y tras más de una década de vínculos del gobierno con la COSEP, la crisis de 2018 y el encarcelamiento de líderes del gremio empresario demolieron las relaciones con la familia Ortega. Finalmente, en el caso de Costa Rica, las elites tradicionalmente aglutinadas en UCCAEP lograron mantener accesos e influencia sobre el gobierno de Carlos Alvarado hasta septiembre de 2020. En esa fecha se produjeron cambios en la cúpula dirigenal de la UCCAEP que revelaron fricciones entre las distintas fracciones de elites, expresadas en un grupo con mayor relación con el Estado nacional y otro con un sesgo más transnacionalizado.

La ocupación directa del Estado

Uno de los mecanismos de influencia que poseen las elites es la ocupación de cargos en puestos claves dentro del Estado¹⁷. Este mecanismo se mate-

17. I. Nercesian: *Presidentes empresarios y Estados capturados*, cit.

realiza a través de la llamada «puerta giratoria» entre el mundo empresarial y privado y el ámbito estatal. Este dispositivo permite la transferencia de conocimiento del sector privado al gobierno, con sesgos promercado, y podría constituirse en una fuente de conflictos de interés. Los conflictos de interés se refieren a la colisión entre el interés privado y el interés público de un funcionario¹⁸. De esta manera, resulta favorecida la articulación de un reducido número de redes con accesos privilegiados a las esferas político-administrativas estatales. Se trata del otorgamiento de ventajas en términos de definición y encuadre de las políticas, favoritismo en la regulación, acceso a contratos y procesos expeditos frente a otros actores fuera de la red¹⁹.

En Centroamérica, algunos países han sido más proclives a la utilización de este mecanismo, en otros hubo primacía de las elites estatales y en otros la imbricación de las elites estatales con los empresarios ha sido tan profunda que no ha habido necesidad de ocupación directa de empresarios en la política. Un análisis reciente sobre los gabinetes durante la pandemia reveló que Costa Rica fue el país con menor porcentaje de personas provenientes del mundo empresarial y mayor presencia de elites políticas, mientras que Guatemala fue el caso más alto de incorporación del empresariado, donde este número superó el 50% de cargos en el Poder Ejecutivo. El Salvador presenta perfiles con trayectorias mixtas, donde se observa la presencia de la fuerza política que representa al presidente y expresa los intereses de una elite emergente, distinta de las tradicionales vinculadas a ARENA. En Honduras, la mayoría proviene del Partido Nacional, partido con historia y fuertes vínculos con el empresariado. Y, por último, en Nicaragua, la larga continuidad en el gobierno de la familia Ortega ha ordenado la gestión del poder público y las personas en cargos ministeriales están vinculadas a la fuerza política del oficialismo.

En otros países de América Latina, la incorporación de empresarios dentro de las carteras de gobierno ha sido un rasgo notable durante el siglo XXI, inclusive contando con la presencia de presidentes empresarios como Horacio Cartes, Pedro Pablo Kuczynski, Guillermo Lasso, Mauricio Macri y Sebastián Piñera, entre los más conocidos²⁰. La ocupación directa del Estado pareciera ser un recurso sistemático de las elites y resulta una

18. Ana Castellani y Gustavo Motta: «La exposición a los conflictos de interés y la captura de la decisión pública en el Gabinete Nacional (Argentina, 2018)» en *Miríada: Investigación en Ciencias Sociales* vol. 12 N° 16, 11/2020.

19. Elise S. Brezis y Joël Cariolle: «Measuring Conflicts of Interest: A Revolving Door Indicator» en *Development* N° 122, 2015.

20. I. Nercesian: *Presidentes empresarios y Estados capturados*, cit.

clave para el análisis del comportamiento de estas en adelante. Otro hallazgo que abre líneas para seguir explorando en la comparación es que, a diferencia de los países del Cono Sur, en Centroamérica son pocos los casos de ministros con trayectoria en finanzas y recursos energéticos. Esta diferencia probablemente encuentre explicación en las dinámicas del capitalismo y la matriz económica de los distintos países.

Construcción de ideas y normas

El poder y la influencia de las elites dependen no solo de sus capacidades de acción política, sino también de sus capacidades de crear y reproducir ideas e información a través de los medios de comunicación, campañas publicitarias, informes, redes sociales y voces expertas que estructuran el debate público. Se trata de influir sobre los escenarios, soluciones y futuros de la sociedad. Nos referimos a un marco general que precede a la acción política de las elites en tanto articula narrativas y discursos que operan hacia afuera (la sociedad) y hacia adentro y que les da sentido como clase social. En tiempos de crisis e incertidumbre, el acceso privilegiado a recursos e información sobre la economía que poseen las elites les permite ampliar su influencia a la esfera pública y política²¹.

Las capacidades de crear horizontes de futuro definen un mayor o menor poder e influencia de las elites en la región. En la región centroamericana podemos identificar dos escenarios. Por un lado, países como Guatemala, Honduras y Costa Rica, donde las elites, sobre todo a través de sus cámaras empresariales, articularon información e ideas en los primeros meses de la pandemia, lo que les garantizó accesos a los tomadores de decisión y derechos de veto sobre las políticas públicas posibles. Así, por ejemplo, en estos tres países, propuestas de tributos de emergencia a la riqueza fueron vetadas o ignoradas por los gobiernos. Por otro lado, en los casos de Nicaragua y El Salvador, como comentamos antes, las disputas directas con los gobiernos de turno socavaron las capacidades de estas elites de formular propuestas de atención a las crisis.

Las capacidades de crear horizontes de futuro definen un mayor o menor poder e influencia de las elites en la región

21. F. Robles-Rivera, Ximena Alvarenga-Fournier y Gustavo Javier Fuchs: «Discursive Power in Central America: Economic Elites and the Disputes to Influence Public Policies during Covid-19 Pandemic», en prensa.

Las elites de la Centroamérica de hoy

Como ya destacamos, la región centroamericana vive hoy un retroceso democrático caracterizado por la vuelta de los militares y el autoritarismo digital de Bukele en El Salvador; la destrucción del sistema político y de las instituciones de justicia en Guatemala; la desigualdad y la fatiga democrática en Costa Rica; la narcopolítica y la debilidad institucional en Honduras y la crítica situación de Nicaragua. Estos giros recientes en la región han modificado o cimentado los mapas de poder, en los cuales las elites han logrado sostener o ver diluidas sus capacidades de influencia sobre las sociedades nacionales y sobre la gestión de la política pública. En Guatemala y Honduras, las elites locales mantienen una indiscutible hegemonía material e ideológica sobre otros grupos sociales y conservan acceso privilegiado al Estado y un poder de veto sobre las decisiones de política pública. En El Salvador, la asunción de la familia Bukele ha puesto al desnudo el ascenso de unas elites emergentes con vínculos más estrechos con el bukélismo y pactos con parte de la elite tradicional. En Costa Rica, la poca circulación de elites ha reducido históricamente los conflictos y su alta cohesión ha favorecido que, sin importar el cambio político, su agenda privada se traduzca en agenda pública nacional. En Nicaragua, la persecución de parte de la cúpula empresarial implicó un cambio en las relaciones de la familia Ortega con las elites y se rompió así el vínculo que existió entre 2007 y 2018.

Sobre cómo ejercen su influencia las elites económicas centroamericanas, destacamos particularidades y semejanzas para cada caso (v. cuadro). En Guatemala, las puertas giratorias son un mecanismo común para unas elites históricamente cohesionadas y con amplísimas capacidades de construcción y reproducción de ideas e información. En Honduras, la particular

Cuadro

Centroamérica: mecanismos de influencia de las elites y su impacto sobre la política pública

	Puertas giratorias	Cohesión	Construcción de ideas y normas	Influencia sobre política pública
Costa Rica	bajo	alto	alto	alto
El Salvador	medio	bajo	bajo	disputa
Guatemala	alto	alto	alto	alto
Honduras	medio	alto	alto	alto
Nicaragua	bajo	bajo	bajo	bajo

Fuente: elaboración de los autores.

imbricación entre el poder político y económico da cuenta de otros espacios de intercambio, elites «graníticamente unificadas» y una amplia trayectoria en la elaboración de leyes, documentos y control sobre las ideas y la información. En Costa Rica, el reducido número de puertas giratorias no disminuyó la influencia de las elites; esto pone de manifiesto que no se trata del número, sino de los cargos que estas ocupan en puestos claves de la economía. Las elites están altamente cohesionadas dados sus históricos vínculos empresariales y familiares y han ejercido una hegemonía sin disputas en la construcción de horizontes públicos y privados. En El Salvador, el número y características de las puertas giratorias expresan un cambio en la composición de las elites, entre las hoy afiliadas al bukeliismo y las tradicionales. En este contexto, las disputas por la construcción de ideas y normas las ha ganado el bukeliismo a través de las redes sociales y la captura de los medios de comunicación. Finalmente, en Nicaragua, como ya destacamos, la ruptura de los acuerdos derrumbó los puentes de influencia y dejó a las elites con menores márgenes de acción.

En el horizonte regional, queda abierta la pregunta de si las elites, al igual que en tiempos de autoritarismo y dictaduras, preferirán el *statu quo* y el *business as usual* antes que la democracia, la justicia y la dignidad en el siglo XXI. ☒



REVISTA DE CULTURA Y CIENCIAS SOCIALES

2022

Gijón

Nº 112-113

EVENT PLACES: ESPACIOS DE OCIO
Y LUGARES MEMORABLES

SUSCRIPCIONES

Suscripción personal: 40 euros

Suscripción bibliotecas e instituciones: 55 euros

Suscripción internacional: Europa - 70 euros (incluye gastos de envío)

América y otros países - 90 euros (incluye gastos de envío)

Suscripción digital: 25 euros

Ábaco es una publicación trimestral de CICEES, C/ La Muralla Nº 3, entlo. 33202 Gijón, España. Apartado de correos 202. Tel./Fax: (34 985) 31.9385. Correo electrónico: <revabaco@arrakis.es>, <revabaco@telecable.es>. Página web: <www.revista-abaco.es>.

Color de piel humilde, color de piel privilegiado

Elites y blancura en América Latina

Hugo Cerón Anaya

A pesar de que el mestizaje ha sido un prisma para tratar de entender la realidad latinoamericana, en América Latina la riqueza y la blancura están estrechamente vinculadas, tanto de forma simbólica como material. Varios trabajos cualitativos recientes sobre el estudio de elites permiten demostrar que tanto el fenotipo como un conjunto de hábitos asociados con la blancura son utilizados para demarcar ideas de pertenencia e identidad.

¿Existe el *color de piel humilde*? En su estudio acerca de las percepciones sobre la diáspora africana entre alumnos de primaria en la ciudad de Guadalajara, México, la estudiante de doctorado Marleys Meléndez Moré encontró que los niños que poseían un fenotipo semejante al atribuido a lo africano no se autoidentifican como miembros de esta comunidad en ningún sentido¹. Más bien, los estudiantes afirman que su piel «es de color humilde». Esta descripción fue hecha en un contexto de estudiantes de clase trabajadora en una escuela pública del área urbana de Guadalajara. El adjetivo «humilde» puede entenderse como una actitud de modestia ante

Hugo Cerón Anaya: es profesor asociado de Sociología en la Universidad de Lehigh (Pensilvania). Su libro *Privilege at Play: Class, Race, Gender, and Golf in Mexico* (Oxford UP, Nueva York, 2019), ganó el Premio al Mejor Libro de 2020 otorgado por la Asociación Estadounidense de Sociología de los Deportes.

Palabras claves: clase, desigualdades, elites, mestizaje, raza, América Latina.

1. Entrevista con el autor, Guadalajara, 10/6/2022.

la grandeza, pero en el entorno en el que Meléndez Moré lo registró, la noción de humildad más bien sugiere una situación carente de riqueza material o de distinción de clase. El vínculo entre color de piel y posición de clase parece fuera de lugar en un país donde el mestizaje asegura haber eliminado todo tipo de jerarquías étnico-raciales, y más aún si se toma en cuenta que México es el país donde la noción de mestizaje latinoamericano tuvo uno de sus más destacados intelectuales². En este marco, ¿por qué los alumnos de una escuela de clase trabajadora asocian los tonos de piel oscura con lo *humilde*? Asimismo, en sentido inverso, podríamos preguntar: ¿cuál es el opuesto equivalente al *color de piel humilde*? La relación entre riqueza y pertenencias étnico-raciales se ha documentado por largo tiempo en Estados Unidos. En ese país, una familia blanca posee en promedio una riqueza acumulada por hogar de 171.000 dólares, mientras que una familia latina tiene reservas económicas por 20.700 dólares y un hogar negro posee solo 17.600 dólares³. Asimismo, sabemos que el tipo de empleo, el valor de una vivienda y el nivel educativo, entre otros indicadores socioeconómicos, varían de forma considerable según la adscripción étnica y racial de las comunidades estudiadas⁴. De hecho, las categorías étnico-raciales influyen tan profundamente en la distribución de los recursos materiales que las primeras suelen ser un indicador muy cercano para determinar posiciones de clase en ese país⁵. En oposición, América Latina se ha visto a sí misma como un modelo radicalmente diferente. Parafraseando a Enrique Krauze, uno de los intelectuales públicos mexicanos más destacados, esta región poseería un modelo de tolerancia en el que el problema no sería de corte étnico-racial –y, por ende, racista– sino más bien de estructuras de clase⁶. De esta forma, la adscripción étnico-racial no sería determinante de la posición de clase. El mestizaje habría permitido superar tal atavismo al crear un modelo en el que se podría transitar con relativa facilidad por diversas categorías simbólicas, en donde el fenotipo no sería el principal organizador de la distribución de recursos materiales (como sí sucede en EEUU).

2. Ver José Vasconcelos: *La raza cósmica. Misión de la raza iberoamericana* [1925], Agencia Mundial de Librería, Barcelona, 1958.

3. Reserva Federal de EEUU: «Median Household Wealth in the United States in 2016, by Race (in us Dollars)», gráfico, 27/9/2017.

4. Mustafa Emirbayer y Matthew Desmond: *The Racial Order*, University of Chicago Press, Chicago, 2021; Elizabeth Korver-Glenn: *Race Brokers: Housing Markets and Segregation in 21st Century Urban America*, Oxford UP, Nueva York, 2021.

5. Herbert J. Gans: «Race as Class» en *Contexts* vol. 4 N^o 4, 2005.

6. E. Krauze: «Latin America's Talent for Tolerance» en *The New York Times*, 10/7/2014.

Mestizaje latinoamericano

El origen del argumento según el cual en América Latina las ideas étnico-raciales juegan un papel menor en la organización social se remonta a principios del siglo xx. En ese momento, los modernos Estados latinoamericanos buscaron nuevas formas de dejar atrás el modelo colonial y las estructuras legislativas que habían seguido arrastrando categorías coloniales durante el siglo xix. Para este fin, las obras de los intelectuales José Vasconcelos⁷ en México y Gilberto Freyre⁸ en Brasil fueron de enorme influencia. Con peculiaridades nacionales, Vasconcelos y Freyre propugnaron variantes de la idea de que las nociones étnico-raciales en América Latina devinieron en un modelo de tolerancia. Según estas visiones, en la región la mezcla cultural y matrimonial de múltiples grupos étnico-raciales dio forma a «democracias raciales» basadas en la inclusión⁹. Este argumento se contraponía a lo sucedido en EEUU, donde la exclusión y la violencia de origen colonial no desaparecieron en la versión moderna e independiente de esta nación. De las influyentes obras de Vasconcelos y Freyre emanó una amplia bibliografía que cimentó la visión sobre la inclusividad del modelo de mestizaje. El argumento se siguió realzando en el trabajo de una amplia gama de destacados intelectuales. Por ejemplo, el afamado sociólogo mexicano Pablo González Casanova aseguró a mediados del siglo xx que en México no existía la discriminación racial sino la exclusión de clase¹⁰. En sus palabras, «[u]n hombre de raza indígena con cultura nacional no resiente la menor discriminación por su raza: puede resentirla por su estatus económico, por su papel ocupacional o político. Nada más»¹¹. De esta línea argumentativa se desprende que las nociones étnico-raciales carecen de importancia en la organización de las inequidades sociales. Es en las estructuras de clase donde residen los grandes problemas latinoamericanos.

A pesar del consenso, algunas voces críticas plantearon dudas sobre tal argumento. Este fue el caso del sociólogo brasileño Alberto Guerreiro Ramos, quien desde finales de la década de 1950 resaltó el papel que las nociones étnico-raciales jugaban en la legitimidad de los análisis de la realidad social (y en la distribución de recursos para realizar investigaciones). Este autor cuestionó la insistencia –en su opinión, patológica– de la

7. J. Vasconcelos: ob. cit.

8. G. Freyre: *Casa-grande y senzala* [1933], Marcial Pons Historia, Madrid, 2010.

9. Peter Wade: «Repensando el mestizaje» en *Revista Colombiana de Antropología* N° 39, 2003.

10. P. González Casanova: *La democracia en México* [1965], Era, Ciudad de México, 2003.

11. *Ibid.*, p. 103.



intelectualidad brasileña en estudiar la negritud, acto que simultáneamente ignoraba la identidad étnico-racial blanca de los propios investigadores¹². Guerreiro Ramos argumentó que el deseo de estudiar a comunidades negras e ignorar al mismo tiempo a las comunidades blancas materializó la primera identidad en tanto que ofuscó a la segunda. Este proceso transformaría la identidad blanca en una categoría neutra, casi inexistente. Esta línea de investigación pasó desapercibida en el contexto general latinoamericano. La pregunta sobre quién es blanco en América Latina y cómo es que esta identidad étnico-racial se articula con otras dinámicas de poder no fue tomada como un eje serio de análisis.

A pesar del consenso sobre la escasa importancia de las categorías étnico-raciales dentro del universo mestizo latinoamericano, el vínculo entre clase y categorías racializadas no dejó de aparecer al realizar trabajos de campo. Por ejemplo, en su afamado estudio sobre la Nicaragua de los años 90, el antropólogo estadounidense Roger Lancaster advirtió una singular relación entre variables étnico-raciales y sociales¹³. Los nicaragüenses solían referirse a los barrios pobres como zonas «negras», en tanto que el lenguaje popular comúnmente describía los barrios ricos como áreas «blancas». La asociación iba más allá de simples referencias geográficas. Según Lancaster, los nicaragüenses parecían entender la riqueza y lo blanco como bienes de un extraordinario valor, aunque de gran escasez en esa nación centroamericana, al tiempo que la pobreza y la negritud se entendían como elementos de nulo valor, pero de gran abundancia. Trayendo a

Los nicaragüenses solían referirse a los barrios pobres como zonas «negras», en tanto que el lenguaje popular describía los barrios ricos como áreas «blancas»

cuento nuevamente el comentario inicial, el vínculo

entre estructuras de clase y jerarquías étnico-raciales parecería un sinsentido en una región que se autorrepresenta en términos de mestizaje y donde la inclusión étnico-racial se ve —por lo menos en el plano discursivo— como la fuente de su riqueza cultural.

En naciones donde el mestizaje es el modelo imperante, ¿cómo es posible que la pobreza se vea como una característica negra o indígena, en tanto que la abundancia de bienes se ve como una característica blanca? El trabajo de Lancaster nuevamente nos remite a la pregunta inicial: ¿existe el *color de piel humilde* en América Latina?

12. A. Guerreiro Ramos: «Patologia social do 'branco' brasileiro» en A. Guerreiro Ramos: *Introdução crítica à sociologia brasileira*, Editora UFRJ, Río de Janeiro, 1957.

13. R. Lancaster: «Skin Color, Race, and Racism in Nicaragua» en *Ethnology* vol. 30 N° 4, 1991.

Estudiar a las elites

Al inicio de la segunda mitad del siglo xx, un pequeño grupo de intelectuales estadounidenses propuso dejar de estudiar solamente a los grupos subalternos y comenzar a mirar a los grupos con poder económico, político y social¹⁴. La antropóloga Laura Nader llamó a esta perspectiva «*studying up*» [investigar hacia arriba]¹⁵, y con ella invitaba a los investigadores a indagar sobre la manera en que los sectores más pudientes de la sociedad reproducen sus posiciones de privilegio. En el caso estadounidense, esta perspectiva buscaba generar interés en las estructuras y dinámicas de clase entre los poderosos. En el caso latinoamericano, los trabajos antropológicos y sociológicos de corte cualitativo que han seguido esta línea de investigación han abordado (casi invariablemente) el vínculo entre las estructuras de clase y las nociones étnico-raciales, en particular aquellas que tienen que ver con lo blanco y la blancura.

Por ejemplo, el antropólogo Hugo Nutini dedicó la mayor parte de su labor académica a estudiar a la «aristocracia» mexicana¹⁶. Aunque el término podría sugerir un sarcasmo para describir a grupos socialmente pretenciosos, Nutini pormenoriza el entorno social y cultural de un pequeño sector de clase media alta que remonta su linaje y distinción familiar hasta la nobleza indígena y los conquistadores españoles de la época colonial. En tiempos recientes, algunos miembros de este grupo han perdido la capacidad financiera para equipararse con los sectores más poderosos de la sociedad mexicana. Sin embargo, la distinción social y el renombre de su linaje han permitido a esta «aristocracia» mantener una posición importante entre las clases altas. Así, a pesar de la carencia de reconocimiento legal o el limitado reconocimiento popular, la «aristocracia» mexicana forma parte de la elite en este país. Nutini da cuenta de la manera en que los «aristócratas» dibujan los límites simbólicos y materiales de esa comunidad, siendo el fenotipo un elemento central en la definición de pertenencia. Este elemento muestra que, si bien el vínculo con la aristocracia indígena es importante, la relación con España y Europa tiene un mayor peso.

Por ejemplo, además de la riqueza material transmitida de forma intergeneracional y de un conjunto de vínculos sanguíneos, la gran mayoría de los

14. Charles Wright Mills: «The Power Elite» [1956] en Craig Calhoun et al.: *Contemporary Sociological Theory*, Wiley-Blackwell, Nueva York, 1981; William Domhoff: *Who Rules America?*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1967.

15. L. Nader: «Up the Anthropologist: Perspectives Gained from Studying Up» en D.H. Hyme (ed.): *Reinventing Anthropology*, Pantheon Books, Nueva York, 1972.

16. H. Nutini: *The Mexican Aristocracy: An Expressive Ethnography, 1910-2000*, University of Texas Press, Austin, 2008.

miembros del grupo poseen rasgos corporales que los acercan a lo que en México se considera blanco, particularmente español (como la nariz aguileña, la piel y los ojos claros, así como el pelo rizado). Nutini indica que aquellos miembros del grupo que mostraban variaciones fenotípicas de ese patrón (ya sea porque poseen tonos de piel moreno claro o una nariz más ancha que el resto del grupo) frecuentemente iniciaban las entrevistas para hablar sobre la comunidad explicando su conexión directa con algún miembro

Nutini da pistas para contestar la pregunta sobre el opuesto equivalente al color de piel humilde en el México contemporáneo

de la nobleza indígena colonial. Este hecho no sucedía con otros miembros del grupo. La necesidad de explicar los rasgos físicos a través de conexiones directas con distinguidos personajes indígenas del pasado parecía una forma de autojustificación. Este dato pone el foco en la relación entre la pertenencia a un grupo de elite y la necesidad de poseer ciertos rasgos fenotípicos vinculados con la blancura. De ese modo, el trabajo

bajo de Nutini da pistas para contestar la pregunta sobre el opuesto equivalente al *color de piel humilde* en el México contemporáneo.

Por su parte, el trabajo de Carmen Martínez Novo ofrece una vía diferente para observar la manera en que actúan las nociones raciales entre sectores privilegiados en Ecuador¹⁷. Esta autora examina las transformaciones sociopolíticas que el país andino experimentó entre el periodo neoliberal de los años 90 y los dos gobiernos posteriores (autodefinidos de izquierda). Durante el periodo neoliberal, las comunidades indígenas lograron adquirir cierto grado de reconocimiento e inclusión, lo que les permitió acceder al control de algunos centros educativos y a una mayor presencia en el espacio político. Estas conquistas se fueron diluyendo con los gobiernos de izquierda, particularmente durante el periodo de Rafael Correa. Las elites políticas ecuatorianas implementaron diversos mecanismos para recuperar los pequeños espacios políticos y recursos materiales que los sectores indígenas habían logrado en las últimas décadas. Lo relevante para el presente texto es notar la manera en que la elite política echó mano con facilidad de añejos discursos que presentaban a los indígenas que resistían el control del Estado como sujetos incivilizados que deseaban detener el progreso. A través de lo que Martínez Novo llama «ventriloquismo», actores políticos blancos se autoasignaron la legítima representación de las comunidades excluidas, incluso tomando decisiones por ellas. En relación con el censo de 2010, los ecuatorianos tuvieron un intenso debate sobre el término «blanco» y quién

17. C. Martínez Novo: *Undoing Multiculturalism: Resource Extraction and Indigenous Rights in Ecuador*, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, 2021.

podría considerarse bajo esa adscripción. La autora señala que, entre las clases medias altas, un porcentaje importante de los hombres se sentía cómodo con la adscripción de blanco. Sin embargo, las mujeres del mismo estrato preferían el término «mestizo». La diferencia estribaba en que el término «blanco» se asociaba a connotaciones de arrogancia y cierto grado de extranjería, nociones que a los hombres no les molestaban pero que a las mujeres les causaban incomodidad¹⁸. Al final, el porcentaje de individuos que se autoadscribió como blanco disminuyó de 10,46% en 2001 a 6,1% en 2010¹⁹.

El caso ecuatoriano muestra la complejidad latinoamericana para entender el vínculo entre riqueza y fenotipo. Por un lado, a un sector de las clases altas ecuatorianas la categoría «blanco» les causaba un cierto rechazo por la asociación que esa adscripción tenía con engraimiento y extranjería, y preferían como sector social el término «mestizo». Sin embargo, a la luz del proceso de sojuzgamiento y exclusión que experimentaron las poblaciones indígenas ecuatorianas a manos de regímenes dirigidos en ocasiones por algunos miembros de estos mismos sectores, vale la pena preguntarse si la discusión de quién es legalmente blanco no nos ha hecho perder de vista formas más sutiles, pero más eficientes, en las que lo blanco opera en la cotidianidad. Es decir, en América Latina no existe la nitidez para determinar quién es blanco y quién no lo es, como sí existe en EEUU, donde esa identidad es una categoría legal. Dicho esto, en América Latina el poder, el prestigio y la distinción están vinculados a nociones sobre la «blancura», siendo este último elemento más asequible para aquellos que pueden demostrarla de forma corporal, entendiendo esta última como apariencia física, pero también como actitudes, visiones del mundo y hábitos.

El trabajo de Ana Ramos-Zayas ofrece una propuesta novedosa para entender esta cuestión²⁰. La autora examina los barrios de clase media alta y alta de Ipanema y Condado, en Brasil y Puerto Rico respectivamente. A pesar de las diferencias históricas entre el país y el territorio, estas dos zonas residenciales permiten apreciar cómo el privilegio de clase va de la mano del privilegio étnico-racial en América Latina. Este trabajo etnográfico detalla la forma en que estas dos comunidades desean alejarse del excesivo materialismo que suele definir a los estratos más altos. En oposición, los acaudalados sujetos de estudio buscan fomentar estilos de vida basados en el consumo ético, la promoción de hábitos de bienestar individual (como la práctica

18. Por lo limitado del espacio no tengo posibilidad de abordar la relación entre dinámicas de clase, género y nociones étnico-raciales. Sobre este tema, v. H. Cerón Anaya: *Privilege at Play: Class, Race, Gender, and Golf in Mexico*, Oxford UP, Nueva York, 2019.

19. C. Martínez Novo: ob. cit., p. 81.

20. A. Ramos-Zayas: *Parenting Empires: Class, Whiteness, and the Moral Economy of Privilege in Latin America*, Duke UP Books, Durham, 2020.

del yoga) y el desarrollo de formas empáticas de socialización (a través de la creación de espacios públicos que buscan el bienestar común). Todos estos elementos sugieren la existencia de comunidades de corte antihegemónico. Sin embargo, estas prácticas se basan en la abundancia material que caracteriza a ambas comunidades. Por ejemplo, la socialización se desarrolla en espacios que comúnmente conllevan algún costo o que tienen requisitos de residencia local, lo que termina por excluir a los sectores populares. En el caso de las prácticas que buscan fomentar la empatía y la espiritualidad, el costo de estas termina por generar espacios homogéneos en los que lo que se reproduce es la solidaridad de clase.

Este privilegio material cobra una dimensión étnico-racial cuando el universo antihegemónico de los residentes de Ipanema y el Condado se contrasta con el universo de los trabajadores. Estos últimos no pueden seguir las pautas de consumo/no-consumo de sus patrones. Ante ello, los trabajadores son incapaces de crear hábitos «antihegemónicos» que los acerquen a la moralidad que sus patrones han adoptado. Si a este entramado de relaciones añadimos que la gran mayoría de los integrantes de las clases medias altas que residen en estos barrios son blancos y la inmensa mayoría de los trabajadores son no blancos, se puede divisar cómo es que la superioridad de clase se extiende a nociones étnico-raciales. La obra de Ramos-Zayas muestra que las clases altas no solo habitan espacios donde el privilegio material ofrece estilos de vida inaccesibles para las mayorías, sino que además estos estilos

La abundancia material da pie a una supremacía moral basada en el supuesto rechazo del derroche de clase

de vida permiten la creación de hábitos que refuerzan la legitimidad de la riqueza de estos grupos. La abundancia material da pie a una supremacía moral basada en el supuesto rechazo del derroche de clase. El recurrente patrón racial entre los trabajadores no blancos y los residentes blancos permite la creación de una división «natural» entre unos y otros. Esta naturalidad se expresa, entre otros mecanismos, en el exitoso cabildeo de los residentes de Ipanema para

prohibir el funcionamiento del transporte público durante los fines de semana, cuando los trabajadores no blancos y de escasos recursos podrían socializar con los residentes blancos y acaudalados en las míticas playas de la zona. La exclusión de los trabajadores se basa tanto en su condición de clase como en su carencia de distinción étnico-racial. En este entorno, el tono de piel está profundamente vinculado con el privilegio.

Mi trabajo sobre clubes de golf en la Ciudad de México ofrece otro ejemplo para pensar sobre la existencia de un *tono de piel privilegiado*²¹.

21. H. Cerón Anaya: *Privilege at Play*, cit.

Vale la pena señalar que el golf es un deporte que solo se practica en clubes privados. En esta ciudad, el costo promedio de una membresía ronda los 35.000 dólares, lo que convierte este deporte en una práctica accesible únicamente para sectores acomodados. El mundo del golf en México no es nuevo: el deporte llegó a esta nación hace más de 100 años. Los primeros clubes fueron fundados en los últimos años del siglo XIX por acaudalados inmigrantes ingleses que llegaron al país para explotar yacimientos petrolíferos y mineros en diversos puntos. Para la década de 1930, el deporte había crecido de forma considerable de la mano de inmigrantes estadounidenses que dirigían diversos enclaves económicos destinados a la extracción de recursos naturales. Este era el caso del complejo algodonero más grande del mundo, al norte del país, que dio pie a la creación del Laguna Country Club. Para este momento, los clubes de golf imponían restricciones sobre el tipo de personas que podían afiliarse a la comunidad. Por ejemplo, el Mexico City Country Club (uno de los clubes más distinguidos) estipulaba en sus reglas que por lo menos 75% de los socios tenían que ser ciudadanos estadounidenses o ingleses («*of good moral standing*» [de buena posición moral])²². La lista de los socios mexicanos del club en ese momento permite entender que solo lo más selecto de la clase alta local tenía acceso a tales espacios. La Segunda Guerra Mundial transformó el patrón de enclave angloestadounidense de estos clubes. La precaria situación económica de Gran Bretaña y la recomposición económica estadounidense llevó a los clubes de golf a abrir sus puertas a los sectores dominantes locales, que hasta la década anterior solo entraban en cantidades mínimas.

En el presente, la limitación de clase es evidente en el costo de las membresías, las cuales no incluyen otros gastos, como consumo mínimo de comida, anualidades, compra de equipo, clases, inscripción a torneos, entre otros. En mi estudio, no encontré ningún club que articulara de forma explícita nociones étnico-raciales para determinar el ingreso a nuevos miembros. Este último dato podría avalar la tesis de que el problema mexicano y latinoamericano no es de corte étnico-racial (ni racista), sino de clase. Sin embargo, encontré que el privilegio de clase de la comunidad constantemente se entrelazaba con referencias étnico-raciales en las cuales la blancura se contraponía a la no blancura. Es interesante en este sentido el caso de los *caddies*. Se trata de los trabajadores que auxilian a los jugadores durante un partido de golf y resuelven cualquier inconveniente que estos tengan, llevan mensajes entre grupos

22. Harry Wright: *A Short History of Golf in Mexico and the Mexico City Country Club*, Country Life Press, Nueva York, 1938, p. 45.

En el entendimiento de los socios, un *caddie* es la figura opuesta a un golfista

de jugadores, encuentran pelotas perdidas, además de ofrecer sugerencias sobre estrategia. Algunos de estos trabajadores son extraordinarios jugadores de golf, pero los golfistas con los que traté nunca los consideraron jugadores. En el entendimiento de los socios, un *caddie* es la figura opuesta a un golfista.

Las explicaciones de los socios para justificar la diferencia entre golfistas y *caddies* eran extensas, pero se pueden resumir en frases como que los *caddies* «no entienden la estrategia del juego», «es gente que carece de educación», «no saben pegarle a la pelota, nadie les ha enseñado», «desgraciadamente no tiene una buena alimentación, nada más ve lo que comen», «no tienen ética de trabajo», «por más que los ayudes tarde o temprano se dedican a beber [alcohol]», «los *caddies* son los que meten las drogas a los clubes», o «ni aun juntando a los mejores *caddies* tendrías un jugador que pudiera competir en las mejores ligas del mundo». En resumen, los *caddies* carecerían del entendimiento, sagacidad, alimentación, moralidad, determinación y carácter para triunfar en este deporte y por ello no pueden ser considerados golfistas. Estos argumentos se articularon con un contexto en el que la mayoría de los socios de los clubes eran blancos (incluso bajo estándares angloestadounidenses), en tanto que la abrumadora mayoría de los *caddies* poseían tonos de piel morena (lo que en México se interpreta como «color café»).

La exclusión de los *caddies* parecía tener razones de tipo clasista al enfatizar cuestiones como la falta de educación de estos trabajadores. Sin embargo, estos discursos constantemente se vinculaban con ideas étnico-raciales al presentar las limitaciones de los *caddies* como características innatas y compartidas de forma homogénea por todos ellos (quienes poseían un fenotipo semejante). Este era el caso de las quejas sobre su falta de ética de trabajo, propensión al alcoholismo o prácticas alimenticias. Este último argumento se conecta con añejas consideraciones de la comida de las clases populares como la fuente de su atraso material, ya que esta se asocia con ingredientes de origen indígena como el maíz y el frijol²³. Tales argumentos parecían sugerir que la distinción entre *caddies* y golfistas se arraigaba en un conjunto de diferencias inherentes, casi biológicas, entre ambos grupos.

Sin embargo, como parte del trabajo de campo encontré el caso de varios *caddies* con un extraordinario nivel de juego, lo que los podría colocar en una sólida trayectoria rumbo al golf profesional (deporte que a

23. Sandra Aguilar-Rodríguez: «Nutrition and Modernity: Milk Consumption in 1940s and 1950s Mexico» en *Radical History Review* N° 110, 2011, pp. 36-58.

pesar de su limitado número de seguidores a escala global está entre las prácticas deportivas con premios económicos más altos para los jugadores profesionales)²⁴. Empero, los *caddies* reportaban que este camino era extremadamente difícil para ellos ante la falta de apoyo económico por parte tanto de los clubes en los que trabajaban como de la Federación Mexicana de Golf. Encontré el caso de un *caddie* que había obtenido una invitación para jugar en el European Golf League por su destacado nivel de juego. Sin embargo, el jugador había perdido las dos primeras fechas por «abandono» porque no pudo obtener fondos que le permitieran viajar al torneo. La entrevista con este *caddie* tuvo lugar dos semanas antes de la tercera fecha de la liga, y para entonces el *caddie* aún seguía sin conseguir los fondos para viajar (cuando lo volví a buscar, el jugador había perdido por tercera vez consecutiva por «abandono»).

Al cuestionar a los socios de estos clubes, algunos incluso miembros directivos de la Federación, por la falta de apoyo hacia los *caddies* sobresalientes, la mayoría de los entrevistados recurría a una variedad de explicaciones. En ellas, la culpa era compartida parcialmente entre las instituciones (las cuales no hacían lo suficiente para apoyar) y los propios *caddies* (que tenían demasiadas carencias como para triunfar en este deporte). Sin embargo, en una ocasión, uno de los entrevistados articuló un argumento abiertamente étnico-racial sobre el problema. Esta entrevista se llevó a cabo en una cafetería en un barrio de clase media alta. Hacia el final de la charla, el participante hizo una larga pausa, se volteó para ver a los comensales sentados atrás de nosotros (parecía que quería cerciorarse de que ningún conocido estuviera en el establecimiento) y entonces señaló:

Hace un rato me preguntaste por qué los clubes o la federación no apoyan a los *caddies* [para volverse jugadores profesionales]; *off the record* te voy a contestar lo que pienso. Creo que la mayoría de los golfistas no apoyan a los *caddies*, a pesar de que algunos son muy buenos jugadores, porque los *caddies* se parecen a sus trabajadores domésticos. Los *caddies* se parecen a sus sirvientas y a sus choferes.

Tras este comentario, la persona ofreció una multitud de ejemplos en los cuales ya fuera los clubes o la federación veladamente excluían o sabotaban las iniciativas para que los *caddies* destacados pudieran acercarse al mundo profesional. Este fue el único participante que de forma explícita utilizó la relación entre clase y percepciones étnico-raciales para describir la marginalización de los trabajadores. Para este socio, la falta de apoyo institucional se

24. Ver H. Cerón Anaya: *Privilege at Play*, cit.

basa en la cercanía fenotípica de los *caddies* con otros trabajadores igualmente carentes de prestigio. En este caso, la clase social («sirvientas y choferes») y la jerarquía fenotípica («se parecen») se entremezclan formando una dinámica común que explica la falta de oportunidades y recursos que enfrentan las clases bajas. En la mayoría de los casos, el vínculo entre estas dos estructuras se establecía a través de discursos sobre moralidad, ética del trabajo o inteligencia, según los cuales las clases altas poseían abundantes cantidades de estas características, en tanto que los sectores trabajadores carecían de ellas. Estos comentarios tenían lugar en un contexto en el que los primeros poseían un fenotipo mucho más cercano a lo que se entiende en EEUU como blanco, en tanto que los segundos poseían diversos rangos de tonalidades oscuras de piel. Quizá en este marco los entrevistados no tenían la necesidad de articular el argumento explícitamente: la condición social de unos y otros hablaba por sí misma.

Reflexiones finales

El presente texto ha usado trabajos cualitativos recientes sobre el estudio de elites para cuestionar la difundida noción de que el modelo de mestizaje latinoamericano creó un sistema flexible e inclusivo en el que las nociones étnico-raciales no influyen en la distribución de los recursos. Mi trabajo no busca negar la posibilidad de un cierto grado de fluidez racializado entre sectores de clases trabajadoras o clases medias en la región. Tampoco busca sostener que la realidad latinoamericana sigue las mismas pautas que la estadounidense, ni mucho menos sugerir que la última es mejor que la primera o viceversa. De la misma forma, no deseo situar el estudio de las dinámicas étnico-raciales de forma aislada. Más bien, este artículo buscó cuestionar el discurso autocelebratorio del mestizaje, el cual borra cualquier discusión sobre las jerarquías racializadas y su vínculo con estructuras de clase.

A contrapelo, el ensayo pone el acento en la necesidad, incluso la urgencia, de estudiar las inequidades de clase y las relaciones étnico-raciales como dinámicas que actúan de forma conjunta. Cuando estas dos dinámicas se analizan en un marco de estudios de las elites, podemos ver que existe tanto un *tono de piel humilde* como uno *privilegiado*. El primero se asocia con el mundo de lo popular, de las clases trabajadoras, de quienes comúnmente se ven como no blancos. El segundo es el mundo de las clases altas, que articulan su prestigio a través de nociones de moralidad, así como de su condición étnico-racial blanca; mientras más arriba se sube en la pirámide, más se consolida esta relación. Como se ha mencionado

anteriormente, América Latina no es EEUU, y es posible encontrar sujetos no blancos entre las elites nacionales. Sin embargo, cuando estos casos se siguen por largo tiempo, se pueden ver las estrategias matrimoniales de blanqueamiento de la descendencia, que termina por poseer tanto los recursos económicos como la blancura necesaria para pertenecer.

La discusión sobre quién tiene un tono de piel humilde y quién uno privilegiado no se remite a un mero elemento estético, como comúnmente se quiere presentar en medios masivos de comunicación. El gran problema latinoamericano estriba en la forma en que el universo de los sujetos con piel humilde se asocia con elementos de poco valor y, por consiguiente, con individuos y comunidades explotables, contaminables y desechables. En cambio, el universo de lo blanco es un mundo que requiere cuidado y protección porque es un bien de gran valor, pero de gran escasez. La solución a los grandes problemas latinoamericanos pasa tanto por el análisis de la gran acumulación de riqueza como por el estudio de cómo la blancura opera como una forma más de capital en la región. ☐

El Cotidiano

REVISTA DE LA REALIDAD MEXICANA

Noviembre-Diciembre de 2022 Ciudad de México

Nº 236

LA 4T, AMIGOS Y ENEMIGOS DEL PUEBLO

LA 4T, AMIGOS Y ENEMIGOS DEL PUEBLO: Entre la oposición y las resistencias. Las racionalidades encontradas en torno a los megaproyectos de la Cuarta Transformación, **Paulina Arredondo Fitz**. El tsunami feminista mexicano y la Cuarta Transformación, **Ángeles Palma López e Isidro Navarro Rivera**. La sociedad civil de derecha frente a AMLO y la 4T, **Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, Israel Jurado Zapata y Roberto Osorio Orozco**. AMLO y los intelectuales: el poder de la ficción, **Daniel Patricio Moreno Delgado**. El PRI y el PRD rumbo a las elecciones presidenciales del 2024, **Juan Pablo Navarrete Vela**. PAN-calderonismo: lecciones históricas ante una década de conflictos, **Rafael Solano**. Movimiento Ciudadano: de antiguo aliado a opositor de AMLO, Morena y la 4T, **Rosendo Bolívar Meza**. AMLO vs. INE: la disputa por la narrativa de la democracia, **Marco Arellano Toledo**. «El enemigo en casa»: rasgos conservadores del gobierno de la Cuarta Transformación, **Francisco Reveles Vázquez**. RESEÑAS.

<www.elcotidianoonline.com.mx>

El Cotidiano es una publicación de la Universidad Autónoma Metropolitana. Av. San Pablo 180, Edif. K-011, Col. Reynosa Tamaulipas, C.P. 02200, Ciudad de México. Tel. 53 18 93 36. Apartado Postal 32-031, Ciudad de México, 06031. Correo electrónico: <cotid@correo.azc.uam.mx>.

Elites y violencia: alianzas, impunidad y desigualdad

Rosario Figari Layús

La construcción de alianzas estratégicas entre elites económicas y diversos tipos de actores ha sido clave para el ejercicio de una violencia funcional a sus intereses, como así también para la obtención de la impunidad necesaria para seguir operando y reproduciendo sus modelos de acumulación y las desigualdades resultantes. Los casos de Argentina y Colombia, más allá de sus significativas diferencias, permiten visibilizar cómo la violencia política, la represión estatal y la impunidad han sido instrumentalizadas con frecuencia en beneficio de las elites económicas y en detrimento de derechos civiles, políticos y económicos de sus víctimas.

Introducción

En América Latina, gran parte de las elites económicas han jugado –y en muchos casos lo siguen haciendo– un rol de primera importancia en el ejercicio de la violencia política, ya sea a través del apoyo a regímenes dictatoriales –como ha sido el caso del Cono Sur, en especial en

Rosario Figari Layús: es investigadora y docente de la cátedra de Estudios de Paz de la Facultad de Derecho de la Universidad Justus-Liebig de Gießen, Alemania. Sus áreas de trabajo e investigación son: violencia política, conflictos armados y regímenes dictatoriales, derechos humanos, justicia transicional y estudios de construcción de paz.

Palabras claves: elites, impunidad, violencia, Argentina, Colombia.

Nota: este artículo es el resultado de una investigación de posdoctorado en el marco de la beca de investigación del «Laboratorio de Conocimiento II. Confrontando las desigualdades en América Latina: perspectivas sobre riqueza y poder» llevado a cabo en 2021 por el Centro María Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales (CALAS) con sede en la Universidad de Guadalajara, México.

Argentina y Chile— o a través de la construcción de alianzas y financiación de actores armados en escenarios de conflictos internos, como en Colombia y América Central. El involucramiento de elites económicas en graves abusos de derechos humanos o su complicidad y apoyo a grupos armados ilegales en la región han sido denunciados por varias organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil¹ y han sido objeto de investigaciones académicas². De hecho, las comisiones de la verdad de nueve países de América Latina han identificado la complicidad corporativa económica como uno de los elementos de las dinámicas de violencias ejercidas en contextos de dictaduras y conflictos armados³.

Sin embargo, no hay suficientes estudios sobre la forma en que tal violencia y la impunidad que suele acompañarla operan como mecanismos claves de reproducción de esas elites y son funcionales a la acumulación de su estatus y riqueza. De allí que el presente artículo proponga analizar cómo el involucramiento en prácticas de violencia, así como la construcción de alianzas estratégicas, les otorga un trato preferencial por parte de la justicia que contribuye no solo a la reproducción de su posición privilegiada, sino también a la pervivencia de las desigualdades sociales. Para esto se ejemplificará con los casos de Argentina y Colombia que, aunque con claras diferencias en las formas y extensión de la violencia, permiten ver una larga historia de represión institucional, violaciones sistemáticas de derechos humanos y violencia política con una significativa participación e impunidad de las elites empresariales. Pese a los procesos judiciales penales en ambos países, el abordaje de las elites económicas sigue siendo todavía un desafío y un tema marginal.

Elites y violencia política

Para poder identificar cómo el involucramiento en prácticas de violencia es funcional a la reproducción de las elites y, junto con ello, de las desigualdades, resulta fundamental definir en qué tipo de elites nos enfocaremos. El

1. V. por ejemplo Global Initiative for Justice, Truth and Reconciliation (GIJTR): *Roles y responsabilidades del sector privado en procesos de justicia transicional. Los casos de Colombia, Guatemala y Argentina*, Fundación para el Debido Proceso, 2021, disponible en <dplf.org>.

2. Ver Victoria Basualdo: «Responsabilidad empresarial en la represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado: avances recientes sobre la dictadura argentina (1976-1983) en un marco regional e internacional» en *La Rivada* vol. 5, 2017; Leigh A. Payne, Gabriel Pereira y Laura Bernal-Bermúdez: *Transitional Justice and Corporate Accountability from Below: Deploying Archimedes' Lever*, Cambridge UP, Cambridge, 2020.

3. Nelson Camilo Sánchez León (ed.): *Cuentas claras. El papel de la Comisión de la Verdad en la develación de la responsabilidad de empresas en el conflicto armado colombiano*, De Justicia, Bogotá, 2018, p. 28.

**El término «elite»
hace referencia al
ejercicio del poder
y al estatus social,
político y económico
privilegiado**

término «elite» hace referencia al ejercicio del poder y al estatus social, político y económico privilegiado del que gozan ciertos grupos minoritarios en una sociedad. Para el análisis de las elites resulta clave entenderlas en su heterogeneidad y pluralidad⁴, plasmadas en la diversidad de sus acciones e intereses, que incluso pueden ser contradictorios entre sí. Esta concepción de las elites como actores plurales y de poder se manifiesta en el concepto de «elites de poder» de Charles Wright Mills⁵, que identifica como integrantes de esos grupos a aquellas personas que ocupan posiciones sociales desde las cuales pueden adoptar decisiones con consecuencias significativas para otros en diversos ámbitos, como la política, la economía y la cultura. Esta noción de «elite», que pone el acento en su pluralidad, no se limita solo a quienes ejercen poder político en forma directa, sino también a quienes a su vez tienen el poder y los recursos para influir sobre ellos, de modo de poder incidir en las diversas coyunturas sociales, políticas y económicas. A su vez, uno de los términos más utilizados para dar cuenta del rol de las elites económicas en casos de graves violaciones de derechos humanos es el de «complicidad empresarial». Leigh Payne y su equipo señalan que la complicidad empresarial se refiere a

la asistencia o participación de los actores económicos en graves violaciones de los derechos humanos (incluyendo genocidio, tortura, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra) cometidos por el Estado o agentes similares al Estado (p. ej., paramilitares o fuerzas rebeldes con control sobre el territorio) durante situaciones de autoritarismo o conflicto civil. Los tipos de actuaciones del sector empresarial pueden incluir responsabilidad directa con violencia criminal (p. ej., concierto para delinquir o conspiración para cometer actos de violencia); violaciones de los derechos humanos bajo la ley laboral (p. ej., trabajo esclavo); financiación de crímenes de guerra; o empresas ilegales.⁶

En América Latina, esta complicidad se ha reflejado en el apoyo y financiamiento de actores armados con prácticas de torturas, asesinatos, amenazas, despojo de tierras, desplazamientos, etc. La complicidad suele

4. Ursula Hoffmann-Lange: «Das pluralistische Paradigma der Elitenforschung» en Stefan Hradil y Peter Imbusch (eds.): *Oberschichten – Eliten – Herrschende Klassen*, Leske + Budrich, Opladen, 2003.
5. C. Wright Mills: *The Power Elite*, Oxford UP, Nueva York, 1956.

6. N.C. Sánchez León: ob. cit., p. 23.

clasificarse como directa e indirecta. La primera opera cuando las elites tienen una participación directa y concreta en los actos de violencia o en las violaciones de derechos humanos, como, por ejemplo, en el uso de instalaciones de industrias como centros de tortura en Argentina. La participación indirecta se produce cuando los grupos económicos se involucran de forma mediada, por ejemplo, a través de la financiación de grupos armados para impedir el retorno de comunidades desplazadas a sus territorios, ya ocupados –o a ocupar– por las empresas, práctica frecuente en Colombia.

En estas dinámicas de conflictos armados y regímenes dictatoriales suelen ser los autores materiales directos, es decir, los actores armados (ya sea legales o ilegales) quienes reciben la mayor parte de la atención y cargan con mayor responsabilidad legal por sus crímenes, lo que deja en un segundo plano la implicación de actores civiles, muchas veces los principales beneficiarios de esa violencia. Pero los actores no armados en dinámicas de violencia no necesariamente son parte de las elites. La mayor parte de los trabajos que analizan la complicidad empresarial hacen referencia al rol de actores económicos, término que engloba diversos tipos de figuras que incluyen personas jurídicas (nacionales y transnacionales; públicas, privadas o mixtas), personas naturales que realizan actividades empresariales, terratenientes, agremiaciones de empresas o empresarios, etc. Pero hay que tener en cuenta que no todos los actores económicos, como por ejemplo los pequeños empresarios o comerciantes, se encuentran en la misma situación de privilegio o de poder para influir en la esfera política o en las diversas coyunturas sociales y económicas como se definió previamente. En otras palabras, no todos los actores económicos involucrados en dinámicas de violencia son parte de la elite económica. Lo mismo sucede con la cuestión de los «civiles», definición que suele utilizarse en un sentido muy amplio. Puede incluir a todas las personas que, sin ser miembros de grupos armados, contribuyeron directa o indirectamente a la comisión de delitos en el marco de conflictos armados o dictaduras, esto es, desde actores económicos (empresarios, terratenientes, ganaderos, etc.), agentes del Estado que no sean miembros de las Fuerzas Armadas (empleados o trabajadores de diversas instituciones estatales, como el Poder Judicial o administraciones locales, que, por ejemplo, hayan intervenido en el diseño o la ejecución de acciones delictivas, directa o indirectamente relacionadas con el contexto de violencia generalizada), miembros de instituciones religiosas o personas independientes. Es decir, no se puede equiparar el concepto de «civiles» con el de «elites». En este sentido, también es necesario mencionar que, en América Latina, no todas las elites económicas han estado involucradas, se han beneficiado o han contribuido por igual a dinámicas de violencia y crímenes atroces. La modalidad, los intereses

y los tipos de participación varían de acuerdo con el contexto y con los modelos económicos hegemónicos que se buscaba implantar o conservar, como se muestra a continuación con los casos de Argentina y Colombia.

Alianzas estratégicas de reproducción

La construcción de alianzas estratégicas de las elites económicas con diversos actores armados y sectores políticos y judiciales es uno de los mecanismos claves de reproducción de su poder. Esto se ve principalmente en lo que se podría considerar dos grandes tipos de alianzas estratégicas:

Las alianzas de consolidación/impunidad se refieren a vínculos, principalmente informales, con instituciones del Estado

alianzas de violencia y alianzas de consolidación/impunidad. Las primeras necesitan de las segundas para poder perpetuarse en el tiempo. Así, las alianzas de violencia son aquellas cuyos actores ejecutores, ya sean fuerzas o actores armados ilegales, posibilitan algún tipo de colaboración (directa o indirecta) en el ejercicio de acciones violentas y/o represivas con el fin de aumentar o mantener la propia riqueza y posición de poder, eliminando a la vez resistencias sociales y políticas que pueden obstaculizar ese objetivo. Por su parte, las alianzas de consolidación/impunidad se refieren a la conformación de vínculos, principalmente

informales, con instituciones del Estado, como el Poder Judicial, con frecuencia funcional a la perpetuación de esa violencia en el tiempo, a la continua obtención de beneficios por parte de las elites que ella genera y a la consolidación de la desigualdad que reproduce. Los altos niveles de impunidad con que cuentan las elites económicas sospechadas y denunciadas de haber estado involucradas en graves violaciones de derechos humanos en América Latina son una muestra de ello.

Alianzas de violencia

Las alianzas de violencia entre elites económicas y actores armados son un claro exponente de cómo esa violencia, en especial cuando es tolerada o fomentada por el Estado, funciona como mecanismo de reproducción de relaciones de desigualdad y dominación. El uso de la violencia sistemática, especialmente cuando es dirigida contra sectores populares, ya sean obreros, campesinos, estudiantes, indígenas, etc., apunta a la erosión de relaciones sociales, identidades y prácticas colectivas de resistencia y a la eliminación

de actores sociales y políticos críticos⁷. De allí que la conformación de alianzas estratégicas en el ejercicio de la violencia haya contribuido en América Latina a eliminar resistencias contrarias a los proyectos económicos de ciertas elites, cuya realización es funcional a la reproducción de desigualdades y jerarquías socioeconómicas.

Las elites económicas cuentan con diversos «socios» a la hora de garantizar la reproducción y expansión de su capital y posición de privilegio sobre la base de prácticas de violencia. Entre ellos, hay actores estatales y no estatales. Entre los últimos, encontramos en contextos de conflictos armados, como por ejemplo el colombiano, los grupos paramilitares. Varios trabajos dan cuenta de los vínculos entre el paramilitarismo y elites económicas en dinámicas de apropiación de recursos y despojos de territorios ya desde la década de 1980, en especial en lo que involucra a grupos empresariales locales, multinacionales, asociaciones agrícolas o ganaderas y empresarios independientes en diversas regiones de Colombia⁸. Mientras algunos autores se han centrado en el papel que han tenido ciertas elites económicas en el fortalecimiento de grupos paramilitares ya existentes, otros análisis plantean que la relación entre las elites económicas y las distintas unidades paramilitares es casi orgánica y se remite a los orígenes mismos del paramilitarismo en los años 1980⁹. La relación entre elite y paramilitarismo ha tenido diversas formas a través del tiempo, incluyendo el requerimiento de servicios de seguridad privada por parte de ganaderos y agricultores frente a los ataques de grupos guerrilleros que, por ejemplo, sabotearon infraestructura para interrumpir las actividades económicas y extorsionaban a los actores económicos¹⁰. Pero el accionar paramilitar no solo se dirigía contra esos grupos guerrilleros, sino que también llevaba a cabo la represión de protestas sociales de sindicalistas, activistas, líderes comunitarios, defensores de derechos humanos o cualquier otro individuo que fuera etiquetado como «guerrillero» o fuera contrario a sus intereses. Como lo explican Lara Bernal Bermúdez y Daniel Marín López¹¹, los periodos en que hubo mayor intensidad en las relaciones entre actores económicos y paramilitares

7. Los efectos de la violencia política han sido muy estudiados en América Latina. V., por ejemplo, Patricia Weiss Fagen: «Repression and State Security» en Juan Corradi, P. Weiss Fagen y Manuel Antonio Garretón (comps.): *Fear at the Edge: State Terror and Resistance in Latin America*, University of California Press, Berkeley, 1992.

8. Por ejemplo, v. Francisco Gutiérrez Sanín y Jennifer Vargas Reina (eds.): *El despojo paramilitar y su variación: quiénes, cómo, por qué*, Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 2016.

9. Laura Bernal Bermúdez y Daniel Marín López: «Los empresarios en la guerra: elementos de la verdad judicial sobre la complicidad empresarial en Colombia» en N.C. Sánchez León: ob. cit., p. 50.

10. María Teresa Ronderos: *Guerras recicladas. Una historia periodística del paramilitarismo en Colombia*, Aguilar, Bogotá, 2014, p. 53; L. Bernal Bermúdez y D. Marín López: ob. cit., p. 43.

11. L. Bernal Bermúdez y D. Marín López: ob. cit., p. 51.

correspondieron a la época de mayor recrudescimiento de la violencia paramilitar, lo que se refleja en el número de víctimas de desplazamiento, despojo y homicidios, en particular a fines de los años 1990.

Casos como el colombiano exponen cómo, en reiteradas ocasiones, la coalición de empresas con grupos paramilitares, pero también con agentes de las fuerzas de seguridad, ha funcionado como un engranaje clave para la continuidad o el aumento de las ganancias empresariales a costa del despojo de comunidades y poblaciones enteras. En Colombia, los territorios de comunidades afrocolombianas como, por ejemplo, los de la región del Bajo Atrato, han sido escenario de constantes desplazamientos, asesinatos, desapariciones y despojo que han coincidido con nuevos usos de la tierra por dinámicas empresariales, relacionadas con actividades de deforestación intensiva, agroindustria y ganadería. Varios informes han corroborado la relación existente entre la necesidad empresarial de expandir la frontera agrícola bananera y las violaciones de derechos humanos cometidas por grupos paramilitares, en connivencia con agentes del Estado. El informe de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz expone cómo, por ejemplo, el grupo económico de la empresa internacional Chiquita Brands fue objeto de un escándalo mediático por su vinculación con grupos paramilitares como estrategia para adquirir tierras en la región del Urabá¹². Tras el abandono de tierras por los desplazamientos forzados, fueron en ese caso las empresas bananeras las que ocuparon esos territorios.

Las elites económicas también tuvieron un rol significativo y ciertamente se beneficiaron de la represión de la última dictadura militar argentina (1976-1983). Ya antes y durante el régimen militar miles de personas fueron torturadas y desaparecidas por las fuerzas de seguridad. El terrorismo de Estado y la llamada «guerra contra la subversión» apuntaban a la implementación de un modelo económico en beneficio del sector financiero, para lo cual era necesario terminar con un Estado de tipo intervencionista basado en un modelo industrial¹³. Para esto se buscó eliminar a las fuerzas sociales y políticas en las que se sustentaba este modelo industrial, como sindicalistas, activistas, partidos opositores, intelectuales, periodistas y todo aquel que se considerara opositor¹⁴. El modelo represivo de la dictadura puso especial énfasis en la persecución de los trabajadores y trabajadoras, hecho

12. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz: *Empresas bananeras. Vulneración de derechos humanos y narcotráfico en el Bajo Atrato*, Mundubat, San Sebastián, 2016.

13. Alfredo Pucciarelli: «La Patria contratista. El nuevo discurso liberal de la dictadura militar encubre una vieja práctica corporativa» en A. Pucciarelli (ed.): *Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura*, Siglo XXI Ediciones, Buenos Aires, 2004, p. 100.

14. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep): *Nunca más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas*, Eudeba, Buenos Aires, 2013.

del que se beneficiaron corporaciones y grupos económicos¹⁵. Las políticas económicas y sociales implementadas en ese periodo modificaron sustancialmente el paradigma de poder económico del país y beneficiaron de manera directa a una pequeña elite de empresas y grupos económicos cercanos al régimen¹⁶. Para esto, era necesario eliminar las fuerzas sociales de resistencia, tarea para la cual el Estado contó con la colaboración de varias elites empresariales. Muchas de estas no solo apoyaron al gobierno militar proveyéndolo de «listas negras» de sindicalistas¹⁷, sino que en algunos casos hasta utilizaron sus propias instalaciones como centros ilegales de cautiverio y tortura¹⁸. La vinculación de actores civiles, incluidas las elites económicas, con el accionar represivo y con graves violaciones de derechos humanos llevó a que hoy en día se caracterice el periodo 1976-1983 como «dictadura cívico-militar».

En los análisis sobre los beneficios de las elites económicas en contextos autoritarios o de conflictos armados se suele poner el foco en la forma en que contribuyen a la violación de derechos civiles y políticos, relegando la cuestión de la erosión de los derechos socioeconómicos y laborales, que en muchos casos suele ser uno de los objetivos claves de esas dinámicas. Los derechos laborales, como el derecho a formar sindicatos y afiliarse a ellos, fueron constantemente violados durante la dictadura argentina, y trabajadores y representantes sindicales fueron uno de los principales objetivos de la represión. Además de intervenir y disolver los sindicatos, se suspendió el derecho de huelga para evitar la reivindicación de derechos laborales y sociales¹⁹. La represión estatal se centró no solo en las disidencias y militancias políticas radicalizadas, sino también en el disciplinamiento de la clase trabajadora en su conjunto, que había acumulado poder político y social durante las décadas anteriores. Como remarca Laura García Martín, el reordenamiento nacional llevado a cabo por la dictadura transformó por completo la estructura económica y social del país y afectó severamente el nivel de ingresos de los trabajadores y sus condiciones de

Los derechos laborales, como el derecho a formar sindicatos y afiliarse a ellos, fueron constantemente violados durante la dictadura argentina

15. V. Basualdo: ob. cit.

16. Laura García Martín: *Transitional Justice, Corporate Accountability and Socio-Economic Rights: Lessons from Argentina*, Routledge, Nueva York, 2020.

17. V. Basualdo: ob. cit., p. 17.

18. Flacso Argentina y Centro de Estudios Legales y Sociales: *Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado*, Flacso / CELS / EduNAM, Posadas, 2015, disponible en <www.cels.org.ar>.

19. L. García Martín: ob. cit..

vida, como así también el régimen laboral y sindical, lo que dio lugar a un aumento de los niveles de explotación, precariedad productiva y pauperización de condiciones laborales²⁰.

Alianzas de consolidación/impunidad

Las alianzas de violencia en pos de mantener el *statu quo* y riqueza de las elites no serían efectivas sin al menos la aquiescencia implícita de diversas instituciones del Estado, como las fuerzas de seguridad y el sistema judicial, y la falta de regulaciones apropiadas. En muchos contextos latinoamericanos, el sistema judicial juega en particular un rol clave tanto en la perpetuación de la violencia como en la reproducción y consolidación de desigualdades que ella contribuye a sostener. El hecho de que una gran mayoría de los casos de violaciones de derechos humanos en los que están involucradas elites económicas en contextos de conflictos armados o dictatoriales cuente con altos niveles de impunidad es un claro indicador de la influencia de estas elites en el Poder Judicial y en las instituciones del Estado²¹.

El concepto de impunidad no solo describe una situación jurídica, sino que refleja también el contexto político y social

Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de impunidad? En términos generales, la impunidad se puede definir como «ausencia de punibilidad» o «falta de castigo»²² e implica la ausencia de aplicación efectiva de leyes existentes que sancionan dichos delitos. Pero el concepto de impunidad no solo describe una situación jurídica, sino que refleja también el contexto político y social. Y es que la impartición de justicia no es un mero proceso neutral, sino que está atravesado por las relaciones de poder vigentes en cada sociedad. Allí se cristalizan las pugnas de poder actuales de diversos actores sociales, políticos, económicos e intelectuales. Por un lado, aquellos que fueron fuertemente afectados por la violencia, que suelen exigir verdad, justicia y reparación y, por otro, quienes temen perder su posición

20. *Ibíd.*

21. R. Figari Layús: «Transitional Justice in Latin America: Toward What Kind of Justice?» en Tatjana Louis, Mokgadi Molepe y Stefan Peters (eds.): *Dealing with the Past: Perspectives from Latin America, South Africa and Germany*, Nomos, Baden-Baden, 2021.

22. Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas: *Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad*, E/CN.4/2005/102/Add.1, 2005, p. 6, disponible en <www.idhc.org/esp/documents/ppiosimpunidad.pdf>.

de poder ante los tribunales. En este marco, la justicia penal tiene la potencialidad de contribuir mediante sus decisiones a la reproducción de las relaciones desiguales de poder subyacentes a la violencia o a su cuestionamiento y transformación, si se basara en el principio formal de igualdad ante la ley.

Si bien la independencia del Poder Judicial es un factor clave para su legitimidad y para un orden democrático, esta es una condición difícil de lograr. Por un lado, es necesario romper con miradas reduccionistas que ven en el Poder Judicial un actor homogéneo, que solo apunta al ejercicio de la dominación social y la reproducción de desigualdades. El campo judicial ofrece espacios de ruptura para ciertas luchas de reivindicación de derechos. Sin embargo, es innegable también que en América Latina este ámbito se encuentra frecuentemente empañado y atravesado por influencias y/o afinidades con elites políticas y económicas de larga data. Retomando el concepto de las elites como actores plurales y diversos²³ que ocupan posiciones de poder con consecuencias claves para la sociedad a la que pertenecen, es imposible negar el carácter elitista del Poder Judicial, no solo en Colombia sino en toda América Latina, lo cual se ve reflejado tanto en los procesos de selección de sus miembros (muchas veces basados en nexos políticos), sus biografías académicas, orientaciones políticas y pertenencia de clase, así como en muchas de las decisiones judiciales que toman en beneficio de ciertos sectores afines²⁴. Ya sea directamente o a través de conexiones y redes personales o políticas, se construyen y refuerzan alianzas de apoyo mutuo entre diversos grupos de elites –judicial, política y económica– que conforman una amalgama de autoprotección que es muy difícil de romper. Las elites tienen a su disposición una o varias formas de capital, ya sea económico, social o simbólico, que se potencian entre sí y favorecen relaciones de dominación en los diversos ámbitos sociales y políticos, incluido también el jurídico.

La impunidad no solo implica la ausencia de sanción penal para los responsables –y, con ello, la continuidad de su accionar–, sino también la ausencia de investigaciones exhaustivas, lo que permite que tales prácticas de violencia y las desigualdades socioeconómicas que les subyacen se sigan reproduciendo. Es esa impunidad la que, a la vez, contribuye a reforzar la posición social, política y económica de estos sectores como elites intocables en un contexto de desigualdades. En su análisis de la aplicación de la ley en América Latina, Guillermo O'Donnell argumentaba que la ley se aplica de manera discrecional

23. U. Hoffmann-Lange: ob. cit.

24. Ver el interesante trabajo sobre la pertenencia social de los jueces de Luis Miguel Donatello y Federico Lorenc Valcarce: «El ascenso a la elite judicial. Una reconstrucción de los orígenes y las trayectorias de jueces a partir de entrevistas biográficas» en *Revista Argentina de Sociología* vol. 11 Nº 19-20, 2017.

y, a menudo, rigurosamente severa sobre los sectores marginados de la sociedad como un medio efectivo de opresión²⁵. La otra cara de esta situación es la forma en que los sectores privilegiados, ya sea directamente, por presión o a través de conexiones personales, se eximen de su cumplimiento. Como afirma O'Donnell, existe en América Latina una larga tradición de ignorar la ley, o de tergiversarla, a favor de las elites, para la represión y contención de grupos marginados, usualmente considerados «peligrosos». En sus palabras: «Ser poderoso es tener impunidad»²⁶. De esta forma, el funcionamiento desigual del orden jurídico tiende no solo a reflejar las desigualdades existentes en los niveles social y económico, sino también a reproducirlas. Esta desigualdad ante la ley en la que las elites económicas ocupan un lugar de privilegio la vemos tanto en el caso colombiano como en el argentino.

Con la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final de la década de 1980, operada en los años 2000, se reabrieron en Argentina las causas judiciales penales para juzgar a los responsables por violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar. Desde 2006 hasta 2022 ha habido más de 278 sentencias con más de 1.000 personas condenadas por crímenes de lesa humanidad²⁷. En este marco, y con más

Las reparaciones monetarias a las víctimas de la dictadura en Argentina han excluido a las elites empresariales como actores responsables

fuerza a partir de 2015 con el primer juicio, empezaron a tomar impulso las querrelas a empresarios, en especial por los casos de trabajadores y sindicalistas víctimas de la dictadura, por su participación en la represión²⁸. Si bien en los últimos años ha habido avances significativos en el juzgamiento de estos casos, sobre todo en comparación con otros países de la región, los juicios son todavía pocos y muy difíciles de llevar a cabo²⁹. De igual forma, las reparaciones monetarias a las víctimas de la dictadura en Argentina han excluido a las elites empresariales como actores responsables que podrían asumir parte del pago.

25. G. O'Donnell: «Polyarchies and the (Un) Rule of Law in Latin America», trabajo presentado en el congreso de la Latin American Studies Association (LASA), Kellogg Institute y Departamento de Gobierno de la Universidad de Notre Dame, Chicago, 1998.

26. *Ibíd.*, p. 13.

27. Ministerio Público Fiscal: «Desde 2006 se dictaron 278 sentencias por crímenes de lesa humanidad en todo el país, por las que fueron condenadas 1.070 personas», 9/6/2022, disponible en <www.fiscales.gob.ar>.

28. Para un análisis detallado de los procesos judiciales a empresarios por su rol en la dictadura, v. V. Basualdo: «Empresas, crímenes de lesa humanidad y justicia transicional en Argentina» en *Revista Electrónica del Consejo de DDHH de la Defensoría de CABA* vol. 1, 2020.

29. *Ibíd.*, p. 91.

En este sentido, cabe señalar que los hechos que se investigan en los pocos procesos judiciales abiertos contra empresas no son por delitos económicos, sino por violaciones de derechos civiles y políticos en las que estuvieron involucradas elites empresariales locales, nacionales e internacionales. Es decir, no son sus proyectos económicos ni la vulneración de derechos laborales lo que se lleva al estrado judicial. Los crímenes que se les imputan a estos empresarios y directivos de empresas son privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios, los mismos delitos por los que fue acusada la mayoría de los militares y agentes de las fuerzas de seguridad. En general, los procesos en la justicia penal por violaciones de derechos humanos en Argentina se han centrado en el esclarecimiento de las desapariciones forzadas y en otras violaciones a la integridad física, por lo que las vulneraciones a derechos socioeconómicos de la represión no han sido el foco de atención aun cuando estas, en el marco de la complicidad empresarial con la dictadura, ya habían sido reveladas desde la década de 1980 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), y en la década de 1990, por denuncias internacionales de los sindicatos³⁰. Las violaciones de derechos socioeconómicos suelen ser concebidas simplemente como parte del contexto en que se desarrollaron las prácticas represivas y no como una de las motivaciones que subyacen a la violencia³¹.

En el caso colombiano, también se pueden observar grandes dificultades a la hora de obtener justicia en los casos en que las elites económicas y empresariales están involucradas en crímenes graves vinculados al conflicto armado. En los últimos 60 años de conflicto armado ha habido al menos 61 acuerdos de paz entre los actores armados ilegales y el Estado en Colombia³². En ninguno de ellos se incorporó a otros actores que también hayan tenido responsabilidad en las dinámicas de violencia o en la complicidad empresarial en violaciones de derechos humanos³³. Este tipo de acuerdos implicaban una mirada militarista o minimalista del conflicto, en la que el rol y la responsabilidad de otros actores civiles, incluidas las elites políticas y económicas, quedan relegados e invisibilizados³⁴. Por lo tanto, la solución del conflicto solo se entiende como una mera desmovilización de actores

30. V. Basualdo: «Responsabilidad empresarial en la represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado», cit., p. 16.

31. L. García Martín: ob. cit., p. 187.

32. Margarita Chaparro González y Nina Martínez Osorio: *Negociando desde los márgenes*, Dejusticia, Bogotá, 2017, p. 11.

33. L. Bernal Bermúdez y D. Marín López: ob. cit., p. 40.

34. D. Marín López: «Justicia transicional fragmentada. Entender la complicidad corporativa con actores armados desde la construcción judicial en Colombia» en Rosario Acosta (ed.): *Justicia y Paz desde otros lenguajes. Una mirada retrospectiva*, en prensa.

armados ilegales sin considerar las causas profundas, intereses socioeconómicos y actores que, como se mencionó previamente, subyacen a la continuidad de la violencia y del conflicto armado en diversas regiones del país. Sin embargo, con los diversos procesos de justicia transicional organizados en los últimos años para dar respuesta a las miles de víctimas del conflicto, se han podido ver algunas marchas y contramarchas que involucraban la rendición de cuentas de algunos miembros de grupos económicos. Por ejemplo, en el así llamado «Proceso de Justicia y Paz», que implicó la desmovilización y el juzgamiento parcial de grupos paramilitares conocidos como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 2003 y 2009, durante el gobierno de Álvaro Uribe, se puede ver un quiebre de la alianza entre esos grupos y ciertas elites económicas. Si bien ese proceso de desmovilización y justicia no fue diseñado para identificar o responsabilizar a otro tipo de actores más que los grupos paramilitares, en el marco de las confesiones de los comandantes paramilitares, llamadas «versiones libres», salieron a relucir los nombres de empresas y empresarios vinculados a operaciones y crímenes paramilitares. En otras palabras, se logró recabar una buena cantidad de información no solamente sobre cómo fueron creados esos grupos y cómo operaron y expandieron su dominio territorial, sino también sobre las estrategias que utilizaron para acumular poder político y económico, cooperando y sellando alianzas con diversos actores legales³⁵. En las confesiones de ex-miembros de las AUC salieron a relucir algunos nombres conocidos por la opinión pública, así como también los de empresas como Drummond, Chiquita Brands, Postobón, Ecopetrol y la Federación Nacional de Ganaderos, lo cual dio lugar a algunas investigaciones de la Fiscalía General y a procesos judiciales³⁶. A finales de 2015, se creó un grupo especial de fiscales e investigadores dentro de la Dirección de Justicia Transicional. Se trató de 55 funcionarios encargados de adelantar 50 investigaciones contra financiadores de los paramilitares que poco habían avanzado en la justicia ordinaria. Sin embargo, la judicialización de este tipo de casos sigue siendo hoy en día escasa, lenta y burocrática. Además de falta de voluntad judicial y ausencia de apoyo político para investigar estas causas, también hay razones de índole probatoria. Como explican Bernal Bermúdez y Marín, en casos de participación de grupos económicos es difícil encontrar pruebas que demuestren el vínculo directo o indirecto de empresarios

35. Ver Centro Nacional de Memoria Histórica y Organización Internacional para las Migraciones (CNMH): *Justicia y paz. Tierras y territorios en las versiones de los paramilitares*, Bogotá, 2012.

36. V. por ejemplo «Directivos del Fondo Ganadero de Córdoba, a responder por despojo de tierras» en <verdadabierta.com>, 11/2/2014.

con el conflicto armado³⁷. En el actual proceso de paz que comenzó a fines de 2016 entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tampoco se incluyó la problemática del rol de las elites económicas, con lo que el proceso de paz quedó como un mero problema de actores armados. Tal vez el nuevo gobierno de Gustavo Petro y su objetivo de «paz total» pueda cambiar eso.

Conclusiones preliminares

En este artículo se analizó cómo la construcción de alianzas estratégicas entre ciertas elites económicas y diversos actores (legales e ilegales/armados y civiles) juega un rol fundamental en el ejercicio de la violencia y en la obtención de impunidad. Este ha sido —y en muchos contextos sigue siendo— uno de los mecanismos claves tanto para la preservación (o expansión) de su posición de privilegio como para la reproducción de su poder y riqueza a través del tiempo.

El usufructo del ejercicio de la violencia en beneficio de las elites económicas puede tener lugar en distintos tipos de regímenes políticos, no solo en el marco de dictaduras, como fue el caso argentino, sino también en contextos de democracias formales, como en el caso de Colombia. La impunidad y la falta de regulaciones y controles estatales sobre el accionar de las elites tienen consecuencias que van mucho más allá de esos grupos en sí y sus víctimas directas. Además de contribuir a la consolidación de modelos de acumulación basados en desigualdades sociales y económicas, estas dinámicas tienden a erosionar la confianza en las instituciones del Estado y su legitimidad, a la vez que construyen distintos tipos de ciudadanías, unas de privilegio y otras de segunda clase. La impunidad de las acciones violatorias de derechos básicos por parte de elites económicas no hace más que reflejar y reforzar a la vez las desigualdades y privilegios predominantes en una sociedad determinada. ☒

37. L. Bernal Bermúdez y D. Marín López: ob. cit., p. 42.

Riqueza, elites, impuestos

*Viejos desafíos para un nuevo
«giro a la izquierda»*

Hans-Jürgen Burchardt / Jan Ickler

En América Latina está asomando una tendencia: nuevas alianzas de centroizquierda están llegando al poder. Es, por lo tanto, un momento pertinente para hacer un balance de la «marea rosa» de los primeros años 2000 y pensar en reformas que vayan más allá del extractivismo. Los recientes aumentos de los precios de las materias primas, en un contexto de crisis energética, pueden ser otro espejismo que haga olvidar la necesidad de reformas profundas, especialmente en el terreno tributario.

Por segunda vez en este siglo, alianzas de centroizquierda ganan elecciones nacionales en América Latina y el tan profetizado giro hacia la derecha no se ha materializado. ¿Estaremos realmente ante el comienzo de una segunda «marea rosa»? Aún no es posible responder esta pregunta de manera concluyente. Si bien se pueden ver algunas similitudes entre las dos «olas» (la actual y la de los primeros años

Hans-Jürgen Burchardt: es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Kassel, Alemania, director del Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales (CALAS) y director del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) de la Universidad de Kassel. Página web: <www.burchardt.uni-kassel.de>.

Jan Ickler: es investigador doctoral en la Universidad de Kassel y fue coordinador científico del «Laboratorio de Conocimiento II. Confrontando las desigualdades en América Latina: perspectivas sobre riqueza y poder» de CALAS. Su investigación se centra en el papel de las elites económicas en América Latina.

Palabras claves: elites, marea rosa, reforma tributaria, riqueza, América Latina.

Nota: traducción del alemán de Carlos Díaz Rocca.

2000), como el papel cada vez mayor de la polarización social o la creciente movilización e influencia de las redes sociales, las condiciones económicas y políticas son diferentes. A pesar de que se está invocando desde distintos sectores un nuevo superciclo de materias primas¹, los efectos de la pandemia global de covid-19 y los recientes aumentos de la inflación están afectando severamente a las economías latinoamericanas². Desde una perspectiva política, las nuevas alianzas de izquierda parecen mucho menos sólidas y dependen de una variedad de compromisos con el centro político. Prácticamente no hay nuevas acciones regionales –como lo fue la alianza contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)³. Sin embargo, los desafíos fundamentales que enfrentan todos los nuevos gobiernos progresistas son similares y valen para toda la región: la transformación en una nueva forma de economía, que lentamente pueda superar el modelo de desarrollo orientado a la exportación de productos básicos y promueva la sostenibilidad; el activo fomento de una transición energética y la protección del clima; la reducción de la enorme economía informal; una mejora en la participación social y la representación política; reformas para hacer ciudades más habitables; la promoción de la seguridad y la evitación de conflictos violentos son solo algunos ejemplos de estas tareas⁴.

Además, la devastación provocada por la pandemia no solo ha llevado los sistemas de salud de la región al borde del colapso y, como efecto de las cuarentenas, ha privado a muchas personas de oportunidades económicas⁵, sino que también ha intensificado un fenómeno bien conocido y estructural en América Latina: la desigualdad social, que no obstante haber caído discretamente durante la última «marea rosa», ha estado aumentando con fuerza desde 2018. Los sectores más pobres de la población latinoamericana son los que más han sufrido por la pandemia. Los datos de la World Inequality Database muestran claramente que la participación en el ingreso total del 50% más pobre en América Latina ha caído de 8,7% a 7,8% desde 2020⁶.

1. «Could There Be a Commodity Supercycle in a Recession?» en *Capital.com*, 20/10/2022.

2. V., por ejemplo, datos económicos sobre el PIB y la inflación en Banco Mundial: «2020 World Development Indicators», <<https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>>, fecha de consulta: 1/11/2022.

3. Jeffery R. Webber: «Rhythms of the Left in Latin America» en *NACLA Report on the Americas* vol. 54 N° 2, 2022.

4. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal): *Una década de acción para un cambio de época*, LC/FDS.5/3, Santiago de Chile, 2022.

5. Cepal: *Panorama social de América Latina 2021*, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2022, p. 97; Rebeca Ramos Padrón y H.-J. Burchardt: «Coronizando el futuro. La desigualdad en los tiempos de la pandemia» en Gerardo Gutiérrez Cham, Susana Herrera Lima y Jochen Kemner (eds.): *Pandemia y crisis. El covid-19 en América Latina*, Gedisa, Ciudad de México, 2021.

6. World Inequality Database, 2022, <<https://wid.world/>>.

Su participación en la riqueza total incluso se ha reducido a la mitad en los últimos años. La desigualdad social no solo afecta la calidad de vida de los individuos, sino que también tiene efectos sobre la sociedad en su conjunto, tales como la erosión de las instituciones democráticas, la reducción de la legitimidad democrática y la intensificación de los conflictos sociales⁷.

Mientras los pobres y marginados fueron abandonados por los gobiernos de la derecha conservadora en muchos países durante la pandemia y fueron quienes más sufrieron la crisis del coronavirus, los más ricos de las sociedades latinoamericanas a menudo sacaron provecho de ella. La participación de estos en los ingresos regionales totales aumentó significativamente⁸. Puesto que la reconstrucción social de la región requiere una enorme movilización de recursos, pero las exigencias de la transformación socioecológica cuestionan en el mediano plazo la estrategia de desarrollo orientada a la exportación de materias primas —el «extractivismo»—, a las elites económicas también habrá que recordarles sus responsabilidades. En vista de la excesiva concentración de riqueza y los sistemas impositivos hoy altamente regresivos de América Latina, los impuestos sobre la riqueza, la renta o la herencia aparecen como una herramienta probada para obtener un margen financiero suficiente que permita mitigar las consecuencias de la crisis del coronavirus y afrontar la transformación socioecológica. Las reformas tributarias pueden allanar el camino que conduzca a mayor productividad, igualdad de oportunidades y cohesión social.

En síntesis: para lograr estabilidad económica y equilibrio social, los nuevos gobiernos progresistas deben movilizar ahora ingentes recursos. Lo que se aprende del ascenso y el fracaso de la primera «marea rosa» es que estos recursos ya no deben provenir exclusivamente de la exportación de materias primas, sino que deben surgir en forma gradual de la propia sociedad.

Desigualdad y riqueza en la región

América Latina sigue estando entre las regiones con mayor desigualdad del mundo. Los gobiernos de la «marea rosa» apenas lograron algunos modestos cambios. En la primera década del nuevo milenio, varios gobiernos latinoamericanos de centroizquierda pudieron reducir la desigualdad de ingresos y combatir la pobreza⁹. Así, el índice de Gini en América Latina

7. Ver Joseph E. Stiglitz: *The Price of Inequality*, W.W. Norton & Company, Nueva York, 2013.

8. World Inequality Database, 2022, <<https://wid.world/>>.

9. Nora Lustig: «Income Redistribution and Poverty Reduction in Latin America: The Role of Social Spending and Taxation in Achieving Development Goals» en *Development* vol. 57 N° 3-4, 2014.



y el Caribe cayó 2,3% anual entre 2002 y 2014¹⁰. Las mejoras fueron aún más marcadas en países como Argentina, Bolivia y Ecuador. La pobreza y la pobreza extrema también se han reducido como consecuencia de los programas desarrollados por los gobiernos de la «marea rosa»: mientras que en 1990 la tasa de pobreza era de 51,2% y la de pobreza extrema de 15,5%, en 2015 habían caído a 29,1% y 8,8% respectivamente¹¹. Las transferencias monetarias y el aumento de los salarios mínimos fueron las razones principales de esta tendencia decreciente en la desigualdad de ingresos¹². El incremento del margen financiero de los Estados nacionales, gracias a los ingresos por exportaciones de materias primas, fue lo que más significativamente contribuyó a reducir la desigualdad en la base de la pirámide social. No obstante, no hubo casi ninguna política fiscal progresiva. Una mirada más allá de los indicadores de desigualdad altamente agregados, como el índice de Gini o el índice de Theil¹³, lo deja claro: la mayoría de quienes se ubicaban en el 10% de

Las dinámicas de esta constelación se pueden describir como un «efecto ascensor», una movilidad ascendente colectiva

la población con mayores ingresos, así como las grandes fortunas, se ahorraron impuestos adicionales, las clases medias urbanas se beneficiaron sobre todo con la buena situación económica y aumentaron su nivel de vida, mientras que los segmentos más bajos lograron mejoras a través de transferencias sociales gracias a los ingresos adicionales recibidos por los gobiernos, sobre todo por los elevados precios de exportación de las materias primas. Las dinámicas de esta constelación se pueden describir como un «efecto ascensor», es decir, una movilidad ascendente colectiva en la que (casi) todos los grupos involucrados ascendieron por igual durante la fase de *boom* económico, sin que se haya modificado la composición interna de la sociedad.

El mayor impacto en la distribución de la desigualdad, tanto a escala mundial como en América Latina, lo provocó sin duda la pandemia de covid-19. Casi todos los grupos poblacionales perdieron ingresos (el quintil superior perdió significativamente menos, o incluso ganó, como en Bolivia y Chile)¹⁴. Asimismo, existen fuertes diferencias entre países: la situación de

10. Cepal: *Panorama social de América Latina 2021*, cit., p. 51.

11. *Ibid.*, p. 67.

12. Luis Bértola y Jeffrey Williamson: *Has Latin American Inequality Changed Direction?*, Springer, Cham, 2017.

13. Los coeficientes de Gini y Theil miden la distribución de la desigualdad; en este caso, indican cómo se distribuye el ingreso entre partes de la población. A pesar de sus diferencias metodológicas, ambos índices suelen tomar valores entre 1 y 0, donde 1 simboliza una distribución completamente desigual y 0 una distribución de total igualdad.

14. Cepal: *Panorama social de América Latina 2021*, cit., p. 53.

Perú es una de las más graves, con una caída en los ingresos de la población más pobre de alrededor de 35%. En Argentina y México, por el contrario, las diferencias entre los quintiles de ingreso no son tan grandes, pero aun así los diferentes grupos han perdido 10% y 5% de sus ingresos, respectivamente¹⁵. También algunos indicadores de desarrollo social, como el índice de desarrollo humano (IDH) y el índice de pobreza multidimensional (IPM), indican que la pandemia de coronavirus profundizó sustancialmente la desigualdad en América Latina¹⁶. Hoy, el 10% más rico de la población se hace con casi 58% del ingreso total. Esta es una tasa más alta que en cualquier otra región, incluida África subsahariana. La situación no difiere si se toma incluso la población de ingresos extremadamente elevados (1% más alto en cuanto a ingresos): ese sector se lleva en América Latina y el Caribe 25% del total de los ingresos. México y Brasil dan cuenta de las tres cuartas partes de todos los multimillonarios de la región, mientras que los ingresos relativamente más altos se encuentran en Chile.

En general, la concentración de la riqueza en América Latina es particularmente pronunciada y llamativamente persistente a lo largo de la historia: según datos de la World Inequality Database, el 1% más rico posee 45% de la riqueza de la región, mientras que el 50% más pobre solo llega a 0,45%. Esto se ha intensificado durante la crisis del coronavirus: según un informe conjunto de Forbes y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el número de multimillonarios en América Latina y el Caribe saltó de 69 a 117¹⁷. La riqueza en América Latina tiene muchas caras: tradicionalmente, la propiedad de la tierra es un parámetro (histórico) importante. Los primeros ricos de la región fueron los colonizadores y sus descendientes que se dedicaron a la agricultura, plantaciones y haciendas. América Latina (particularmente Ecuador y Guatemala) se caracteriza hoy por la máxima desigualdad en la propiedad de la tierra en el Sur global: 10% de los propietarios posee casi 80% de toda la tierra cultivable¹⁸.

Otra porción significativa de la riqueza en América Latina existe en forma de inversiones. Los números exactos son difíciles de obtener, pero como muestran Néstor Gandelman y Rodrigo Lluberas utilizando datos de los hogares, las inversiones en cuentas bancarias representan una gran parte del

15. *Ibíd.*, p. 55.

16. PNUD y Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI): «2022 Global Multidimensional Poverty Index (MPI): Unpacking Deprivation Bundles to Reduce Multidimensional Poverty», 10/2022.

17. Luis Felipe López-Calva: «COVID-19 and Wealth at the Top: More and Wealthier Billionaires After the Crisis in LAC» en PNUD, 27/5/2021, <undp.org>.

18. Luis Bauluz, Yajna Govind y Filip Novokmet: «Global Land Inequality», WID.world Working Paper N° 2020/10, World Inequality Lab, 2020.

Los «Panamá Papers» de 2016 revelan solo una parte del volumen de esta riqueza no declarada e «invisible»

patrimonio de los hogares latinoamericanos ricos¹⁹. También hay siempre una discusión sobre impuestos y evasión fiscal cuando las acciones y las cuentas se mantienen en el extranjero, sin ser registradas por las autoridades estatales. Los «Panamá Papers» de 2016 revelan solo una parte del volumen de esta riqueza no declarada e «invisible»²⁰. En general, en América Latina las colocaciones en los mercados financieros como opción de ahorro e inversión quedan reservadas casi exclusivamente al 10% más rico.

La posesión privada de empresas, sociedades y bienes inmuebles es todavía más difícil de mensurar. La estructura de propiedades de las grandes empresas, a menudo familiares, es en su mayoría opaca: esto no suele ser porque sí. Los dueños de grandes «multilatinas» y grupos económicos, con actividad muchas veces en toda América Latina, son quienes particularmente simbolizan la riqueza en la región en forma de conglomerados influyentes y personajes pintorescos: sea Carlos Slim (México), Luciano Hang (Brasil) o Luis Carlos Sarmiento (Colombia), todos se encuentran en la cima de la pirámide de riqueza por su éxito empresarial.

La estructura de la riqueza se ha mantenido muy estable durante largos periodos de la historia latinoamericana. No solo los efectos y procesos económicos juegan un papel como fuentes de reproducción de la riqueza²¹, sino también los mecanismos sociales, políticos y culturales. Estos incluyen la herencia de la riqueza y la propiedad de empresas²², así como los sistemas educativos altamente exclusivos de América Latina; los privilegios de los blancos y de los varones en particular²³, y los discursos sociales y políticos sobre la justicia²⁴, que casi no tematizan la excesiva concentración de la riqueza. También es importante la influencia política

19 . Néstor Gandelman y Rodrigo Lluberas: «Wealth in Latin America», Documento de Trabajo CAF N° 2022/08, CAF, Caracas, 16/5/2022.

20. OCDE: «Transparencia fiscal en América Latina 2022. Informe de progreso de la Declaración de Punta del Este», OCDE, 2022.

21. Henry Veltmeyer y Arturo Ezquerro-Cañete: *Development Beyond Extractivism: Alternative Scenarios and Lessons from Latin America*, Routledge, Londres, en prensa.

22. Alice Krozer: «Alianzas matrimoniales y concentración de riqueza entre elites mexicanas del siglo XIX» en *Estudios Sociológicos de El Colegio de México* vol. 40 N° 119, 2022.

23. V., entre otros, Paola García-Reyes y Henrik Wiig: «Reasons of Gender: Gender, Household Composition and Land Restitution Process in Colombia» en *Journal of Rural Studies* N° 75, 2020.

24. Graziella Moraes Silva, Matías López, Elisa Reis y Chana Teeger: «Who Are the Elite, What Do They Think About Inequality and Why Does It Matter?» en Katja Hujo y Maggie Carter (eds.): *Between Fault Lines and Front Lines: Shifting Power in an Unequal World*, Bloomsbury Academic, Londres, 2022.

de los ricos, que impacta en el Estado, en las reformas y las medidas de regulación y redistribución²⁵.

Si los nuevos gobiernos de izquierda en América Latina quieren poner en práctica sus programas políticos, deben encontrar nuevas respuestas y medidas para esta situación cada vez más crítica. Las reformas fiscales son una herramienta clave para ello: lo primero es mejorar el grado de conocimiento de la situación actual, las condiciones especiales y específicas de reproducción de la concentración excesiva de la riqueza. Esto significa más estudios empíricos y estadísticos y mayor financiamiento para la investigación sobre la riqueza. Muchos investigadores piden una y otra vez la expansión de los sistemas de información pública y, en particular, la puesta a disposición del público de datos censales e impositivos más amplios, no solo para finalmente poder tener un cuadro más certero de la riqueza, sino también para poder diseñar políticas fiscales efectivas.

Una reforma fiscal para América Latina

La riqueza altamente concentrada en América Latina muestra que el desarrollo futuro de la región no es una cuestión de escasez de recursos, sino de distribución. Esto hace de la reforma fiscal una de las cuestiones centrales del nuevo giro a la izquierda en América Latina.

Las reformas fiscales son un terreno particularmente minado en la región. Los sistemas tributarios de América Latina tienen tres características. Primero, ingresos enfocados en la exportación de materias primas y el comercio exterior. Segundo, un carácter fuertemente regresivo. El patrimonio, los altos ingresos o las herencias rara vez son gravados directamente: según datos de la Cepal, el impuesto a la renta regional es actualmente de 5,6% del PIB (OCDE: 11,5%) y los impuestos sobre el patrimonio, de 0,8% (OCDE: 1,9%). Además, los ricos disfrutaban de numerosos privilegios legales de elusión fiscal y se practica una culturalmente adornada tolerancia a la evasión fiscal ilegítima y la fuga de impuestos al extranjero. El nivel de evasión fiscal se ubica en alrededor de 60% de los ingresos fiscales regionales posibles y la tasa impositiva efectiva para el 10% más rico de la población es de 5,4%, mientras que en la Unión Europea es de 20%²⁶. Sin embargo, los impuestos indirectos (sobre todo el impuesto al valor agregado,

25. Fernando Ignacio Leiva: *Left Hand of Capital: Neoliberalism and the Left in Chile*, State University of New York Press, Albany, 2021.

26. Matías Busso y Julián Messina (eds.): *La crisis de la desigualdad. América Latina y el Caribe en la encrucijada*, BID, Nueva York, 2020.

IVA) superan en la región en casi 14 puntos porcentuales el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En general, los sistemas tributarios latinoamericanos se caracterizan por una carga impositiva notoriamente baja para los ricos y relativamente alta para los habitantes de bajos ingresos. Estos sistemas no reducen las desigualdades, sino que las perpetúan o incluso las incrementan. Tercero, el gasto público financiado con impuestos se enfoca tradicionalmente en tareas centrales (militares, administración, subsidios a empresas, servicio de la deuda) y descuida las áreas importantes de los servicios públicos que legitiman los impuestos (como salud, educación y cultura).

Hasta ahora, el sistema fiscal latinoamericano ha favorecido en particular a las elites económicas y las clases medias, cumple tareas redistributivas muy limitadas y apenas reduce la heterogeneidad estructural de la región. Esta constelación cambió poco durante la primera ola de gobiernos progresistas. El potencial de redistribución de los impuestos en América Latina es actualmente solo de 5%. A modo de comparación: la redistribución en la UE-OCDE después de impuestos es ahora de 38%²⁷.

Sin embargo, la falta de implementación de reformas fiscales no puede explicarse únicamente por una debilidad de las instituciones para imponer políticas, por un desánimo político o por oportunismo. Más bien parece ser el resultado del propio extractivismo, el modelo de desarrollo basado en la exportación de materias primas, que cuenta con el apoyo activo de la «marea rosa»: por un lado, ha producido elites pequeñas pero poderosas (empresariales, políticas, militares) que, debido a una economía poco diversificada y una sociedad poco diferenciada, tienen un enorme poder de veto y sabotean cualquier forma de política redistributiva que las afecte. Por otro lado, los abundantes ingresos debidos a las materias primas durante la última fase del *boom* de 2003 a 2014 tentaron a los gobiernos de izquierda a no resolver estos conflictos, sino a utilizar los ingresos adicionales temporales de la exportación de materias primas para distender la crisis social y, de ese modo, obtener legitimidad. Esto explica por qué las elites políticas en América Latina durante el último giro a la izquierda, incluso en condiciones óptimas para una reforma (mayorías parlamentarias, democracia consolidada, prosperidad económica, arcas estatales llenas, alta legitimidad), no implementaron la universalización de la política social, reformas agrarias y la redistribución fiscal que garantizan mayor cohesión social, productividad económica y estabilidad política continua.

A partir de este hallazgo, se puede elaborar una hoja de ruta clara para una nueva política progresista: los gobiernos de centroizquierda ciertamente

27. Alejandro Izquierdo y Carola Pessino: «Los efectos limitados de las políticas fiscales sobre la redistribución» en M. Busso y J. Messina (eds.): ob. cit.

pueden aprovechar el nuevo gran *boom* de las materias primas, pero para lograr un desarrollo sostenible deben ligarlo directamente a reformas estructurales en agricultura, política social, relaciones laborales y sistemas tributarios que reduzcan la heterogeneidad estructural en la región. Y esa ligazón debe ser tan estrecha que cada nueva explotación de materias primas encuentre su eco concreto en tales medidas de reforma.

La reforma del sistema tributario es un asunto prioritario. A través de los impuestos, el Estado puede garantizar ingresos que no están sujetos directamente a la explotación de la naturaleza ni a la dinámica volátil del mercado mundial, y que financian la expansión a largo plazo de los servicios públicos y ayudan a promover la diversificación económica y los potenciales productivos²⁸. Durante la fase de prosperidad que siga a un nuevo *boom* de las materias primas, los gobiernos podrían lograr, con menor conflictividad, la legitimidad democrática para realizar reformas fiscales. Para ello son centrales la mejora de los servicios sociales que brinda el Estado y el desarrollo de un sector público de calidad que apunte a la universalización, que beneficie a amplios sectores de la población y que no se reduzca a medidas asistencialistas, sino que se proponga la ampliación de los derechos sociales²⁹. Si estas medidas pueden financiarse inicialmente con los nuevos ingresos por exportación de materias primas, se debe formular una agenda clara desde el principio sobre cómo se pueden convertir gradualmente en financiamiento fiscal. El contrato fiscal resultante garantiza, además, la democratización de las relaciones entre el Estado y la sociedad: los ingresos fiscales y la erogación de recursos necesitan legitimación política. La fórmula *taxation and representation* (tributación y representación) se convertiría en la nueva configuración de la organización social.

El mejor momento para que los gobiernos obtengan una amplia legitimidad para las reformas fiscales es durante las fases de prosperidad económica, tal como promete el próximo *boom* de las materias primas. Así que no puede haber un mejor momento para los gobiernos progresistas. Si no se aprende de los errores de la primera ola progresista, la segunda fase de gobiernos de izquierda en América Latina no promoverá ni la cohesión social ni la sostenibilidad. Lo que quedará es una región aún más pobre en términos de recursos y personas, así como una izquierda completamente desacreditada, a la que esta vez solo sucederá, probablemente, un giro hacia la derecha. ☐

28. Philip Fehling y H.-J. Burchardt (eds.): *Taxation and Inequality in Latin America: New Perspectives on Political Economy and Tax Regimes*, Routledge, Londres, en prensa.

29. Para el caso de Colombia, v. Gustavo Flores-Macias y Cynthia J. Arnson: «Petro's Tax Reform: A Q&A with Professor Gustavo Flores-Macias» en *Wilson Center Blog*, 7/10/2022.

Recambio generacional y antielitismo

Las tensiones del cambio en Chile

Noam Titelman

Para entender lo que ha ocurrido en la política chilena en los últimos tiempos, vale la pena detenerse en el trayecto de las luchas generacionales entrecruzadas que tuvieron un momento crucial en 2011. Esas dinámicas explican el proceso de renovación política e ideológica, pero también las tensiones que atraviesa la actual experiencia transformadora.

Cuando Gabriel Boric fue elegido, las expectativas ante su futuro mandato eran altísimas. No solo asumía como el presidente más joven de la historia chilena, sino que, a los 36 años, se convertiría en el presidente más joven en ejercicio en el mundo. La fascinación por el nuevo presidente *millennial* se expresó en varios medios internacionales. No obstante, junto con las grandes expectativas, el nuevo gobierno se enfrentaba a enormes desafíos. Boric asumió en medio de un proceso constituyente que buscaba dotar al país de nuevas reglas de convivencia luego de que un estallido social en 2019 pareciera demoler las bases de los acuerdos de la transición posdictadura. La victoria de Boric en

Noam Titelman: es economista graduado de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), magíster en Métodos de la Investigación Social por la London School of Economics and Political Science (LSE) y doctor por la misma universidad. Fue presidente de la Federación de Estudiantes de la PUC y actualmente es investigador adjunto del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile.

Palabras claves: Constitución, elites, jóvenes, nueva generación, Gabriel Boric, Chile.

la contienda electoral no fue fácil. De hecho, aunque en la segunda vuelta alcanzó una contundente victoria con más de 10 puntos de diferencia y un número histórico de votos absolutos, en la primera ronda el candidato de la ultraderecha, José Antonio Kast, había alcanzado la mayoría relativa con casi 28% de los votos. Es más, Boric se convertiría en el presidente electo con menos votos en la primera vuelta (25,8%). Es decir, para llegar al récord de votos que obtuvo en el balotaje dependió de muchos votos «prestados», que no lo habían elegido como su primera opción. El desafío que significaba consolidar la coalición de segunda vuelta, en el contexto de un reflujo de los ánimos refundacionales que liberó el estallido social, era una barrera que el nuevo presidente tendría que saber sortear. Su juventud, que jugó un rol importante en su trayectoria hacia la Moneda, no sería suficiente.

Apenas cumplido un año desde las elecciones, el ex-líder estudiantil ya se ha ganado varios reconocimientos internacionales, incluida la portada de la revista *Time* y su inclusión entre las 50 personalidades más importantes en una lista elaborada por Bloomberg. Ese año se vio marcado por el rechazo abrumador en las urnas a la propuesta constitucional nacida de una asamblea paritaria, con representación de pueblos originarios y mayorías progresistas. La derrota del nuevo texto, que debía dejar atrás el aprobado durante la dictadura, constituyó un duro golpe para la izquierda chilena en su conjunto. Ese primer año en el sillón presidencial significó el fin del discurso de «joven promesa» y puso al presidente ante las dificultades y oportunidades de gobernar, independientemente de su edad. «Nos dimos cuenta de que otra cosa es con guitarra», sintetizó el propio mandatario para describir las dificultades de pasar de las críticas desde la oposición a asumir el mando del Estado, con los conflictos sociales y políticos que incluyen la violencia en la confrontación chileno-mapuche en la Araucanía¹.

Para entender lo que ha ocurrido en la política chilena este último año, valdría la pena detenerse en el trayecto de dos luchas generacionales entrecruzadas pero diferentes. Se trata de dos luchas cuyo sentido ha mutado, así como su grado de sintonía. En primer lugar, nos referimos a los cambios en la sociedad chilena, marcados por la emergencia de una nueva clase media y por el acceso de las nuevas generaciones a la educación superior, pero no a la calidad de vida prometida; en segundo lugar, a un recambio generacional en el nivel de la elite política en la disputa entre nuevas fuerzas y la tradicional coalición de centroizquierda, que lideró el proceso de transición democrática desde la década de 1990. Este recambio se puede ver no solo en la Presidencia de la República, sino también en una multiplicidad de alcaldías hoy

1. Daniela Salgado: «Nos dimos cuenta de que otra cosa es con guitarra»: Boric por dificultades a 8 meses del Gobierno» en *Biobiochile.cl*, 13/11/2022.

gobernadas por varones y mujeres menores de 35 años, incluida la comuna de Santiago Centro, en manos de la alcaldesa comunista Irací Hassler, de 32 años.

La historia de dos luchas generacionales

El pensador comunista italiano Antonio Gramsci se refirió en sus textos a las «cuestiones de los jóvenes» –en plural– y vinculó la cuestión generacional a las de clase. Gramsci se refirió a la relación pedagógica entre «jóvenes» y «viejos», la cual, más allá de los inevitables conflictos y discordias generacionales, siempre estará, en última instancia, alineada con las condiciones estructurales de clase. Es decir, la problemática de los jóvenes y las diferencias generacionales no sería lo central de las disputas políticas y sociales del momento y es, necesariamente, superficial y pasajera, «a menos que se trate de interferencias de clase, es decir, que los ‘jóvenes’ (o una parte sustancial de ellos) de la clase dirigente (entendida en el sentido más amplio, no solo económico, sino también político-moral) se rebelen y pasen a la clase progresiva [la clase trabajadora]». También se refiere a contextos de «rebelión permanente» en los que la estructura no puede satisfacer las nuevas exigencias y esto resulta en el «paro permanente o semipermanente de los llamados intelectuales». Es más, Gramsci afirma que una situación como esta –crisis de las viejas estructuras sin el nacimiento de otras nuevas– deja a los jóvenes sin «horizontes abiertos» y va agravando los problemas que es incapaz de resolver.

Es cierto que hoy las discusiones son formuladas con otros lenguajes y que la idea gramsciana respecto del rol dirigente de la clase obrera ha perdido peso en el pensamiento crítico. No obstante, podemos sostener que, en el caso chileno, la advertencia de que un debate atrapado en las disputas generacionales corre el riesgo de intoxicarse y distraer de las cuestiones centrales del momento político y social resuena con fuerza. La cuestión de los jóvenes y de las generaciones es inevitable y, en su justa medida, ayuda al progreso del cambio de la sociedad. Sin embargo, tan importante como reconocer el valor de esta cuestión es saber superarla y no quedar atrapados por sus múltiples formas, incluido el misticismo de una supuesta «juventud dorada».

Las tensiones generacionales no son nuevas en la política. Incluso se podría plantear que constituyen una parte inherente de los procesos de renovación y reemplazo mediante los cuales las sociedades avanzan en sus discusiones políticas y sociales. Pero hay un momento en la historia chilena reciente en el que la cuestión generacional y de los jóvenes pasó a la primera línea: el del auge del movimiento estudiantil de 2011. Ese año, lideradas por los estudiantes universitarios, cientos de miles de personas

salieron a las calles reclamando por los altos costos de la matrícula universitaria y el endeudamiento y, de forma germinal, expresando su malestar por una promesa de progreso e integración que, en el mejor de los casos, se había cumplido solo parcialmente.

Estos jóvenes universitarios, en realidad, expresaban a dos actores políticos distintos, aunque aliados. Como explica el sociólogo Manuel Canales: «No fue uno, sino que fueron dos los actores sociales que convergieron en el 2011. Fue una alianza de clases, sí, entre el segmento progresista y crítico de las clases dirigentes, y la masa popular recientemente estrenada en las lides universitarias»². La lucha generacional, la disputa entre los nuevos jóvenes y las generaciones que los antecedieron, se dio en dos niveles: en un nivel de la lucha política, entre dirigencias que disputaban el espacio de representación institucional, y, subterráneamente, en una disputa social de jóvenes pertenecientes a la clase media emergente, hijos e hijas del proceso de modernización capitalista que vivió Chile en los años 90 y 2000.

En el nivel dirigencial, el terremoto social de 2011 sacudió la política chilena. Por un lado, los tres principales dirigentes del movimiento estudiantil –Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Gabriel Boric– se volvieron líderes de opinión con incidencia nacional. Los tres llegaron al Parlamento en 2014 y consolidaron así el arribo de una nueva generación que nunca vivió en carne propia la dictadura. Por otro lado, el impacto de las movilizaciones sociales de 2011 fue tan fuerte que alteró la composición de la coalición de centroizquierda (democrristiana-socialista) que había gobernado los años 90 y primeros 2000. En un momento político que había cambiado, sus principales líderes se reagruparon en un proyecto más ambicioso que el construido en la etapa posdictadura. Nació así Nueva Mayoría, que se forjó con la incorporación del Partido Comunista –en el que logró ocupar un lugar destacado Camila Vallejo– y tuvo como líder a la socialista Michelle Bachelet. En 2014, Nueva Mayoría llegó al gobierno con un programa ambicioso y una mayoría parlamentaria nunca vista en ambas cámaras. Jackson y Boric no se incorporaron a Nueva Mayoría y terminaron de dar una estructura política a la disputa generacional: en 2016, se terminó de concretar una alianza de varios movimientos de origen estudiantil que adoptó el nombre de Frente Amplio (FA). Esta alianza le disputaría las

Los tres principales dirigentes del movimiento estudiantil –Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Gabriel Boric– se volvieron líderes de opinión con incidencia nacional

2. M. Canales: *La pregunta de Octubre*, LOM, Santiago de Chile, 2022, p. 246.

presidenciales a la centroizquierda en 2017 con la candidatura de la periodista Beatriz Sánchez, que obtuvo 20% de los votos.

Cinco años después de la constitución del FA, Boric, acompañado por Jackson y Vallejo, entraría a la Moneda como presidente. Entre medio, Chile viviría su movilización social más masiva y crítica del ordenamiento político y social nacional (más aún que la de 2011). El 25 de octubre de 2019 salieron a las calles millones de personas; en la que fue posiblemente la marcha más masiva de la historia del país, se manifestaron diversos grupos de la sociedad. Reclamaban por las desigualdades, los abusos y las injusticias y por lo que percibían como una institucionalidad política que no «escuchaba».

Es difícil especificar los sujetos y las demandas que protagonizaron una movilización tan masiva y transversal, pero al menos una parte se vinculaba a la nueva clase media emergente. Como explica Canales, en octubre de 2019 se habría movilizado un sector que en 2011 fue representado por una elite progresista, pero que en esta ocasión no tenía voceros ni pliego de demandas. Es más, Canales llega a afirmar que «las nuevas generaciones populares» estuvieron en la base del estallido social de 2019³.

En el mundo, y en Chile, el debate político se ha definido desde finales de la década de 1980 por la creciente preponderancia de las clases medias en la mayoría de las democracias. Vale decir, los hijos de la clase trabajadora que, gracias a nuevos accesos a la formación técnica y profesional, han logrado superar la barrera de la pobreza. En el caso chileno, el reciente desarrollo capitalista, iniciado a fines de la dictadura, estaría marcado por dos dinámicas que han definido a estas capas medias. Por un lado, el acceso al consumo, que ha traído patrones de conducta individualizantes y alejados de proyectos comunitarios o colectivos. Por otro lado, y de modo hasta cierto punto paradójico, una fuerza democratizadora que ha empujado demandas crecientes por derechos civiles y sociales. En Chile, el proceso neoliberal y la democratización se han implementado en conjunto y han penetrado la vivencia cotidiana de importantes segmentos de la población.

Al igual que en el sistema económico en su conjunto, en el subsistema educativo las máximas de competencia y emprendimiento privado se volvieron casi un dogma. Este sistema logró aumentar sustancialmente la cobertura en educación superior, que pasó de 16% a 46% entre 1990 y 2011⁴. Sin

3. *Ibid.*, p. 12.

4. Malone Gabor y Jordan Bazak: «The Price of Free Education», Council on Hemispheric Affairs, 12/10/2016.

embargo, este crecimiento es una de las razones que explican las fuertes movilizaciones de 2011. Las contradicciones del sistema de educación superior llegaron a involucrar a una proporción nunca vista de la población chilena. Millones habían depositado su confianza y sueños en las manos del sistema educativo y lo que encontraron distaba radicalmente de lo esperado. Esta situación configuró un sistema de educación superior que mantiene una elite, ya no tanto limitando el acceso, sino estableciendo diferenciaciones por tipo de institución y programa al que se puede acceder⁵. Como explica Canales, esto generó una nueva olla de presión cuando «ya no ser pobres» no fue suficiente y se sintió el «techo de estamento» que se percibía «siempre tan bajo y sofocante»⁶.

Este proceso de cambio social ha venido acompañado de una crisis de la mediación política y, en particular, del debilitamiento de los partidos. Un fenómeno que ha marcado la política chilena de los últimos años ha sido la caída de la confianza en las instituciones. En ese marco, ninguna institución resultó tan golpeada como los partidos políticos. No solo se trata de que estos apenas alcanzan 4% de confianza, sino que además hay un fenómeno de largo plazo vinculado a la desidentificación con ellos que se ha acelerado en la última década. Según datos del Centro de Estudios Públicos, el porcentaje de personas que se identificaba con algún partido cayó de 53% en 2006 a 22% en 2019. Es más, algunos estudios recientes han señalado que un porcentaje no menor de la población (12,9%) ha hecho de las posiciones antipartidos «tradicionales» su principal identidad⁷. El estallido social liberó una fuerte ola de indignación, pero su posición en el eje izquierda-derecha fue difusa. Pese a que varias de las demandas que emergieron de él «sonaban» de izquierda (derechos sociales, ecologismo, feminismo, etc.), la identidad de izquierda era y sigue siendo débil en el país. En cambio, las posiciones democratizadoras antielite son mucho más claras. Por ejemplo, en la última encuesta Latinobarómetro, 86% respondió que se gobernaba en el país para interés de los poderosos y no de todo el pueblo (el valor más alto registrado para Chile y el cuarto más alto de América Latina para esta versión).

La identidad de izquierda sigue siendo débil en el país. Las posiciones democratizadoras antielite son mucho más claras

5. Carlos Rodríguez Garcés y Víctor Castillo Riquelme: «Empleabilidad, ingresos y brechas: un análisis comparativo de los procesos de inserción laboral en Chile» en *Orientación y Sociedad* N° 14, 2014, p. 3.

6. M. Canales: ob. cit., p. 22.

7. Carlos Meléndez: *The Post-Partisans: Anti-Partisans, Anti-Establishment Identifiers, and Apartisans in Latin America*, Cambridge UP, Cambridge, 2022.

Este debilitamiento de la confianza ha llegado, por cierto, también a los nuevos espacios de mediación que formaron las generaciones políticas de 2011. En el «reventón» de 2019, en gran medida, se apuntó con el dedo a todos los dirigentes políticos, incluidos los que habían hecho lo mismo en 2011 contra las generaciones previas. La historia del estallido social de 2019 es, en parte, la historia del quiebre de una alianza de jóvenes dirigentes y de la clase media emergente que protagonizó las protestas callejeras. Las dos luchas generacionales, la de la elite dirigenzial y la de los jóvenes populares de la nueva clase media, ya no se veían en clara sintonía.

La era Boric

Más que un programa de izquierda tradicional, lo que Boric ofreció para la primera vuelta presidencial era un camino de profundización democrática, imbuido en las nuevas demandas feministas, ecologistas y progresistas del siglo XXI. Un programa que prometió una sociedad más equitativa en términos de distribución de la riqueza, pero, sobre todo, en términos de reconocimiento social, de sectores que se sintieron marginados por la desigualdad e indignados con esa marginación. En definitiva, el planteo era «democratizar la democracia», reuniendo las preocupaciones por el «fin del mundo» (ecologismo) con el «fin de mes» (derechos sociales). Frente a dos años de convulsiones sociales, el atractivo de la candidatura de Boric provino de la promesa de alcanzar cambios profundos en el modelo económico y una renovación de las dirigencias políticas, pero también de que el camino a ese cambio se basara en un diálogo institucional y republicano y tuviera un horizonte de tranquilidad.

Luego del resultado de la primera vuelta presidencial, Boric le escribió una carta al Consejo General de la Democracia Cristiana. En la misiva en la que le pedía su apoyo para la segunda vuelta, recalca: «La arrogancia generacional es una mala consejera», y apuntaba que «no hay virtud *per se* en la juventud y la novedad, sino que un proyecto político debe juzgarse por sus convicciones, principios y actuar en consecuencia». Más aún, se comprometió a que, de ser electo, sería un presidente que dialogaría con todos, sin distinción.

Cuando Boric finalmente ganó la segunda vuelta, su proceso de instalación se vio marcado por múltiples gestos de apoyo e incluso de cariño. En su oficina de instalación (denominada la «Moneda chica»), las personas se aglomeraban para poder conversar con el joven político. Incluso algunos empezaron a hablar de «Boricmanía». Sin embargo, las concentraciones de personas mostraban más las elevadas expectativas que apoyo

masivo. Apenas cumplidos 100 días en el cargo, el apoyo al flamante presidente alcanzaba el 41%, con 46% de desaprobación⁸. Si bien los dos gobiernos que precedieron al de Boric (los de Bachelet y Sebastián Piñera) tampoco gozaron de grandes niveles de apoyo durante su mandato, ambos disfrutaron de una luna de miel durante el primer año que no se repitió en el caso de Boric.

Junto con razones estructurales, como los mencionados niveles de desidentificación partidaria y desconfianza hacia las elites, algunos incidentes del nuevo gabinete profundizaron la distancia con el público. Un hito particularmente doloroso fue la accidentada visita a la Araucanía de la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, en un intento de establecer canales de diálogo con algunas comunidades mapuche. Una de las mayores críticas al gobierno de derecha de Piñera había sido precisamente por su manejo del conflicto entre el Estado chileno y sectores del pueblo mapuche. Sin embargo, el ambicioso plan de diálogo se enfrentó a un muro de desinterés por parte de sectores radicalizados que recibieron a la ministra con una barricada y balazos lanzados al aire.

En gran medida, el fracaso de este intento de diálogo inauguraba un nuevo clima en la opinión pública, que pasó a estar focalizada en las demandas de orden y seguridad pública por sobre las demandas de derechos sociales y profundización democrática. Todas las encuestas, sin excepción, mostraban consistentemente que la primera prioridad de la población era el orden y seguridad pública. Más aún, la razón principal aducida para la desaprobación presidencial, con 61%, era justamente este asunto. Lo seguía de cerca «falta de experiencia»⁹. La demanda de juventud y recambio de elite parece haber dado paso a una demanda de seguridad y certidumbre. La caída de la propia Siches, una joven médica que había sido la figura estrella de la campaña de Boric para la segunda vuelta, muestra las dificultades mencionadas para transformar las expectativas de cambio en realidad.

Probablemente, la mayor expresión de este cambio en el clima político haya sido el resultado del plebiscito constitucional, en el que por una aplastante mayoría de 62%, con una participación electoral nunca vista, se rechazó el texto propuesto por la Convención Constitucional, creada en respuesta

Todas las encuestas mostraban que la primera prioridad de la población era el orden y seguridad pública

8. Felipe Díaz Montero: «Cadem: Aprobación de Boric queda por debajo de Bachelet y Piñera en primeros 100 días de gobierno» en *Biobiochile.cl*, 19/6/2022.

9. Roberto Martínez: «Cadem: Delincuencia, orden público y falta de experiencia para gobernar son las principales razones de la desaprobación del Presidente Boric» en *La Tercera*, 20/11/2022.

al estallido social de 2019. Mientras que una parte de la explicación del rechazo se puede encontrar en su posicionamiento en el eje izquierda-derecha, con el texto situándose a la izquierda de la mayoría de la población, es posible que, paradójicamente, en el rechazo se exprese una continuidad del antielitismo que se manifestó en el estallido social de 2019, un antielitismo que encontraba su versión no progresista o antiprogresista. El nuevo gobierno estaba fuertemente asociado a la génesis del proceso constituyente, y en particular el presidente Boric desde su rol como diputado. Estar contra el proceso constituyente pasó a ser una forma de ser oposición al nuevo gobierno. Parte de la energía contra la institucionalidad política había pasado al lado del rechazo.

En cualquier caso, el resultado del plebiscito implicó un cambio importante en el proyecto de las nuevas dirigencias políticas que acompañan a Boric. La coalición inicial de gobierno denominada Apruebo Dignidad (integrada por el FA y el Partido Comunista) está en minoría en ambas cámaras del Congreso y, tras el cambio en las prioridades ciudadanas y una derrota contundente en el plebiscito, se vio obligada a reagruparse. De este modo, se realizó un cambio de gabinete por el cual varios de los compañeros de ruta del presidente, sus «aliados generacionales», abandonaron el primer lugar y fueron reemplazados por políticos pertenecientes a la tradición de centroizquierda y a otra generación. En particular, uno de los cambios más notorios fue la mencionada salida de Siches y su reemplazo por Carolina Tohá, importante dirigente de la histórica coalición de centroizquierda. El gobierno, luego del plebiscito, abandonó así su impronta generacional. En una especie de tregua de elites políticas, el proyecto político de Boric dio pasos significativos para dejar atrás las luchas generacionales que habían marcado la última década de la discusión y disputa en la izquierda y centroizquierda.

Un nuevo ciclo político

No hay nada intrínsecamente mejor en ser joven. Es interesante que este atributo haya podido ser un elemento deseado por la población en un momento y temido en otro. En parte, la tensión se da entre la demanda de renovación y reemplazo de la elite, por un lado, y la demanda de seguridad y certidumbre, por el otro. En este sentido, la «juventud» no depende tanto, para estos aspectos, del año de nacimiento, sino de cuán bien se reflejan estas dos polaridades.

De algún modo, el primer año del gobierno de Boric ha terminado siendo la consolidación de un punto medio entre estas polaridades. La última década de la política chilena estuvo marcada por la disputa entre la generación

política nacida en 2011 y la generación que comandó la política en la década de 1990 y 2000, la generación *millennial* y la *boomer*. El gobierno de Boric no ha terminado siendo la imposición del 2011 sobre la segunda, sino una especie de tregua frente a una sociedad igualmente escéptica de sus dirigentes, sin importar la edad de estos. En este sentido, ha jugado un rol crucial la generación intermedia, la que se forjó en las protestas de estudiantes secundarios a finales de los 80 y se mantuvo en roles de segunda línea durante las dos décadas que gobernó la centroizquierda. Pocos representan de manera más clara este renacer de la llamada «Generación x» que Tohá, una de las mejor evaluadas del gobierno¹⁰. El fin de la arrogancia generacional y, de algún modo, de la «juventud», abre la puerta a que la discusión de la izquierda y centroizquierda pueda darse más allá de la cuestión de los jóvenes, contra la que advertía Gramsci.

Por otro lado, mientras que las disputas generacionales en la elite han ido conduciendo a un acuerdo de convivencia, existe el peligro de que el otro mundo de los jóvenes, el de los que «patearon piedras»¹¹ estos años y se manifestaron en el estallido, no encuentre su espacio de representación. La elite se despolariza generacionalmente, mientras la ciudadanía se vuelve crecientemente antielite. De algún modo, la pregunta que queda por responder es si este nuevo equilibrio es resultado de una nueva alianza de clases o un quiebre irresoluble entre clases. En cualquier caso, la política chilena ha acordado empezar un nuevo proceso constituyente, muy distinto al anterior¹². Si en el primer proceso que dio vida a la propuesta rechazada primó el afán sacrificial de la elite política en su intento de apertura, en este nuevo proceso primó la demanda de seguridad y certezas.

Con tres años por delante, el gobierno del presidente Boric tiene la posibilidad de generar las bases de un nuevo pacto social que incorpore a sectores de la sociedad que miran a la clase dirigente con sospecha. En el año transcurrido, la nueva izquierda del presidente Boric y su proyecto generacional ha vivido cambios. Y en ese contexto, su principal desafío será escuchar las demandas de la sociedad, incluso por encima de la propia historia «generacional» del movimiento que lo llevó a la cima del poder. ☐

10. R. Martínez: ob. cit.

11. N. Titelman: «El baile de los que sobran: ¿qué Constitución quiere Chile?» en *Nueva Sociedad* edición digital, 4/2021, <www.nuso.org>.

12. Claudia Heiss: «Nueva Constitución chilena: segundo intento» en *Nueva Sociedad* edición digital, 12/2022, <www.nuso.org>.

Colombia: una nueva gramática del poder

Álvaro Jiménez Millán

Desde su arribo a la Presidencia, Gustavo Petro viene aprovechando el impulso inicial que le dio su histórica victoria en las urnas para avanzar en algunos proyectos claves, como la «paz total» y la reforma tributaria. Con las elites tradicionales divididas, el nuevo presidente ha logrado armar una amplia alianza parlamentaria y proyectarse fronteras afuera de Colombia.

Cinco meses después de que el ex-guerrillero, congresista y ex-alcalde de Bogotá Gustavo Petro llegara a la Casa de Nariño, sede del Poder Ejecutivo, tras una victoria electoral histórica para la izquierda colombiana, el país se encuentra frente a una serie de cambios que eran inimaginables hace poco tiempo. Petro es consciente de que cada día que pasa es uno menos de gobierno y lo hace saber. El ritmo autoimpuesto desde el día uno de su gobierno, sumado al hecho de poner en el centro de su acción los intereses, la movilización y la participación de indígenas, campesinos, cultivadores de coca, jóvenes, negros, activistas sociales, defensores de derechos humanos y ambientalistas, sectores excluidos tradicionalmente del poder y de la agenda de los gobiernos del país, construye una nueva gramática del poder en la Colombia del

Álvaro Jiménez Millán: es politólogo, columnista de la revista *Semana* y director de la Campaña Colombiana contra Minas (CCCM). Es cofundador de Colombia Risk Analysis, una iniciativa de estudio sobre el riesgo político en Colombia, y de Crudo Transparente, centro de pensamiento e incidencia sobre el impacto socioeconómico y político de la industria del petróleo en el mismo país.

Palabras claves: equidad social, paz total, reforma impositiva, Gustavo Petro, Colombia.

siglo XXI. Pero en paralelo, Petro y su gobierno desarrollan y estimulan la interlocución con aquellos que representan los viejos poderes, como puede verse en el diálogo con su contradictor principal, el ex-presidente Álvaro Uribe Vélez, e incluso adoptan algunas de las viejas formas de ejercicio del gobierno y administración de lo público, lo que les ha permitido armar una coalición para garantizarse una mayoría en el Congreso. Petro descoloca a sus críticos, pero también a muchos dentro de su propia fuerza.

Desde el 7 de agosto de 2022, el presidente colombiano avanzó con su agenda de «paz total» y con la reforma tributaria, hizo anuncios de cambios estructurales en la legislación laboral, de salud y educación, y anunció modificaciones en el sistema de pensiones, lo que se acompañó de una exitosa concertación por el salario mínimo con empresarios y trabajadores. Petro ha puesto la vida como el eje de la política de seguridad y defensa, ha instalado a actores sociales en instancias de poder e inició la adquisición de tres millones de hectáreas para impulsar la reforma agraria¹; ya había legalizado, en los primeros 100 días de gobierno, títulos de propiedad de casi 700.000 hectáreas², avanzando así una respuesta a uno de los mayores y más anacrónicos problemas sin solución en la historia del país. Finalmente, pero no menos importante, el nuevo gobierno está intentando dejar atrás el paradigma de la lucha contra las drogas mediante la decisión de no combatir los cultivos de coca de pequeños campesinos y poniendo el foco en los embarques de cocaína y la investigación de las cuentas e inversiones de los narcotraficantes; en ese marco, se promueve un acuerdo con Estados Unidos para impulsar una discusión regional respecto de la migración y el tema de las drogas.

Todo ello se produce en un contexto marcado por los efectos en la economía de Colombia de dinámicas de orden global, como la invasión rusa de Ucrania y las consecuencias aún vigentes de la crisis generada por la pandemia de covid-19: la inflación de 13,12% al cierre de 2022 es la más alta de las últimas dos décadas, y esto reduce el valor real de los salarios y los ahorros de los ciudadanos y se suma a la reducción de la inversión que presagian diversos analistas para 2023, en el marco de la falta de experiencia administrativa y liderazgo público de algunos de los ministros nombrados en carteras importantes del gobierno. Este es el escenario de amenazas que enfrentará en 2023 el denominado «gobierno del cambio», que pretende convertir a Colombia en una «potencia mundial de la vida».

1. «Hubo acuerdo: ganaderos venderán 3 millones de hectáreas al gobierno Petro» en *El Colombiano*, 6/12/2022.

2. María Camila Ramírez Cañón y Julián Ríos Monroy: «La tierra en los 100 días de Petro: una reforma agraria en marcha con preguntas por resolver» en *El Espectador*, 23/11/2022.

Los objetivos de Petro son ambiciosos en un contexto lleno de dificultades, pero estas podrían transformarse en oportunidades para mostrar que este, el primer gobierno de la izquierda en Colombia, no es flor de un día, sino el inicio de un proceso de democratización profunda desde el poder nacional, que transforme el país en un referente positivo para la región y para el mundo.

El pasado 31 de diciembre, Petro se apoderó de la agenda pública mediante el anuncio de un acuerdo de cese bilateral del fuego con los cinco grupos armados no estatales que más afectan la vida de las comunidades a lo largo de territorios que el Estado colombiano no ha conseguido controlar en sus más de dos siglos de existencia.

El anuncio del cese de hostilidades incluye al Ejército de Liberación Nacional (ELN); el denominado Estado Mayor Central y la segunda Marquetalia, ambas disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); Autodefensas Gaitanistas de Colombia (o Clan del Golfo) —poderosos herederos de los grupos paramilitares en el norte del país, y amos y señores de la frontera terrestre y marítima con Panamá en el estratégico Golfo de Urabá— y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada. Un anuncio de este tipo no tiene antecedentes en la historia colombiana.

Las distintas organizaciones armadas han reaccionado aceptando el cese de fuego, salvo el ELN, que ha expresado su disposición para discutirlo de manera inmediata en la mesa de negociaciones que tendría su sede en algún sitio del territorio mexicano. Con ello, y a pesar de las críticas al gobierno por lo acelerado del anuncio, el cese del fuego ha quedado instalado como la tarea inmediata en la estrategia de «paz total» con la que Petro busca extender los Acuerdos de Paz de 2016 con las FARC, que enfrentaron un fuerte rechazo de la derecha y fueron derrotados en el plebiscito de ese año, para ser reactivados tras algunas modificaciones.

Petro también ha logrado, en estos cinco meses de gobierno, modificar la política internacional: por un lado, ha decidido reabrir la frontera con Venezuela y restablecer las relaciones diplomáticas y de cooperación rotas durante siete años, y por el otro, ha reorientado y fortalecido la relación diplomática con EEUU, en un interesante ejercicio en el que aprovecha el contexto geopolítico actual, que exige a Washington una política cuidadosa hacia América Latina, con el objetivo de no ceder espacios y ventajas a China, que especialmente en estas dos últimas décadas ha aumentado su presencia en la región, y también en Colombia.

El gobierno de Petro se caracteriza por continuas decisiones que alimentan las expectativas de su base popular, mientras que las elites históricas colombianas, que detentaron el poder desde la época colonial, no logran



construir una estrategia de oposición al primer presidente de izquierda en la historia nacional, proveniente de la guerrilla del Movimiento 19 de Abril (M-19). Estas elites, en verdad, no solo están divididas, sino más bien fracturadas. Sus puentes de comunicación están rotos en muchos casos, y reinan las desconfianzas y desavenencias, que se vienen profundizando en la última década. Estas expresan viejos enfrentamientos entre las elites bogotanas y las elites regionales; diferentes concepciones sobre manejo del

**En este escenario
de fractura de
las elites, Petro
cuenta con amplios
porcentajes de
aceptación ciudadana**

Estado entre las elites urbanas y las elites rurales; y también una confrontación entre viejos poderes económicos y los sectores económicos emergentes, cuyos orígenes están en los circuitos derivados del lavado de dinero proveniente del narcotráfico y otros mercados ilícitos (oro, trata de personas, combustibles, madera, carbón, coltán, etc.). En este escenario de fractura de las elites, Petro cuenta con amplios porcentajes de aceptación ciudadana:

quienes piensan que las cosas en el país están mejorando aumentaron de 64% a 66% entre octubre y diciembre de 2022³.

En la Colombia actual, actores sociales y comunitarios se vienen convirtiendo en poder, transformando la cara institucional del país y causando escozor entre los viejos poderes y sus anteriores representantes. La juventud —en especial en los sectores populares, pero también entre las capas medias— es en su mayoría abiertamente partidaria del cambio. Las regiones históricamente afectadas por la violencia armada participan de manera activa en procesos de diálogo en busca de nuevas perspectivas para sus vidas, y los campesinos, incluidos los cultivadores de coca, son ya interlocutores válidos de los funcionarios del gobierno en el sector agrario, para discutir sobre la transición de cultivos ilícitos a economías legales y sobre los estímulos a la producción de las pequeñas economías campesinas para asegurar la soberanía alimentaria⁴. Numerosos grupos aspiran a verse beneficiados con un acuerdo impensable meses atrás: el que se negocia entre el gobierno y la organización que agrupa a los productores de ganado a lo largo del territorio nacional, la poderosa Federación Nacional de Ganaderos (opositora del gobierno y acusada de haber apoyado a grupos de paramilitares por más de cuatro décadas) para la mencionada compra y distribución de tierras por parte del Estado.

3. «Encuesta Invamer: aprobación de Petro se mantiene estable» en *El Espectador*, 14/12/2022.

4. Natalia Romero Peñuela: «Petro acepta que campesinos continúen con coca hasta que la sustitución sea eficaz» en *El Espectador*, 16/12/2022.

Los cambios están en proceso, inician su marcha luego de los anuncios presidenciales y del trabajo que viene cumpliendo la coalición legislativa que en el Congreso favorece las iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo.

Cabe destacar que, al no contar con mayoría parlamentaria, el gobierno de Petro ha debido constituir una coalición con diversas fuerzas de centroderecha, como los partidos Conservador, Liberal y de la U, además de las de centroizquierda e izquierda. Esta coalición está liderada por los presidentes del Senado, Roy Barreras, y de la Cámara de Representantes, David Racero. Mientras que Racero es un joven proveniente del espacio de Petro, Barreras es un avezado operador político, que estuvo en el equipo negociador con las FARC en Cuba y proviene del espacio político del ex-presidente Juan Manuel Santos, quien manifestó su apoyo a Petro en la búsqueda de la «paz total»⁵. En la oposición solo quedan el Centro Democrático, del ex-presidente Uribe, y la Liga de Gobernantes Anticorrupción, liderada por el ex-candidato presidencial Rodolfo Hernández, con escasa representación parlamentaria⁶. La oposición a Petro es hoy muy débil y tiene como combustible el temor en sectores de las clases medias urbanas, que las hace oscilar entre la desconfianza por el futuro y la ambición de que los cambios traigan estabilidad para la economía.

Esta amplia coalición parlamentaria le ha permitido al nuevo gobierno sacar adelante la reforma tributaria impulsada por el ministro de Economía José Antonio Ocampo. Esta reforma, con la que el gobierno espera recaudar unos 4.136 millones de dólares adicionales en 2023, forma parte del discurso oficial en torno de una mejora en la equidad social. «Aprobar una reforma tributaria no es fácil, nunca lo ha sido; como congresista estuve como en 15 que siempre giraban en los mismos ejes que consistían en extender el IVA [impuesto al valor agregado] a la canasta básica, originando que las reformas tributarias nunca mejoraron las circunstancias de desigualdad social en Colombia», dijo Petro en la Casa de Nariño al promulgar la ley⁷. Aunque la reforma debió ser negociada, se mantuvieron sus líneas básicas, vinculadas al discurso social y ambiental del nuevo presidente, uno de cuyos ejes es la transición energética para superar las energías fósiles.

Entre otros puntos, se establece una sobretasa para la extracción de carbón y petróleo que dependerá de los precios internacionales⁸. La reforma,

5. Jan Martínez Ahrens y Juan Esteban Lewin: «Juan Manuel Santos: ‘El Gobierno de Petro está bien orientado pero le falta rigor y método, y también afinar las narrativas’» en *El País*, 18/9/2022.

6. Juan Miguel Hernández Bonilla: «Petro sella una sólida coalición en el Congreso con el apoyo de los partidos tradicionales» en *El País*, 8/9/2022.

7. «Petro sanciona ley de la reforma tributaria que hace énfasis en la equidad» en *Swissinfo.ch*, 14/12/2022.

8. «El presidente Petro sanciona hoy la reforma tributaria» en *El Tiempo*, 13/12/2022.

como admitió el propio Petro, deberá implementarse en medio de los nubarrones económicos globales que se prevén para el año que inicia. En contraste con esta reforma, la de su antecesor, Iván Duque, considerada regresiva, había provocado una ola de protestas a lo largo y ancho del país.

En esta oleada de cambios profundos en los primeros cinco meses del gobierno de Petro, cabe destacar también el cambio de paradigma y de misión en las Fuerzas Armadas, centradas por más de seis décadas en la tarea de destruir al enemigo interno: las insurgencias armadas. A esas Fuerzas Armadas, Petro les ha planteado hoy como tarea principal el desarrollo de acciones de protección de las comunidades teniendo como indicador el número de vidas protegidas y salvadas, y no el de bajas o neutralizaciones, eufemismo utilizado para indicar números de enemigos muertos. Igualmente, Petro convocó a que el Ministerio de Defensa aproveche las capacidades, medios logísticos y tecnologías militares y policiales en un nuevo enfoque que permita defender la Amazonia de la depredación ilegal y desarrollar infraestructura vial y de transporte fluvial requerida en las zonas donde el conflicto armado tuvo presencia por más de medio siglo, como los departamentos del Chocó, Nariño y Putumayo. Estos objetivos planteados desde la autoridad presidencial van acompañados también de una exigencia de mayor disciplina, lucha contra la corrupción y disposiciones que buscan mejorar la calidad de vida y la dignidad de los soldados, los policías rasos y sus familias.

En relación con la nueva concepción institucional puesta en juego sobre los cultivos de coca y el tráfico de cocaína, Petro ha llamado a la comunidad internacional a asumir una nueva visión alrededor de este mercado y de la fracasada «guerra contra las drogas». Desde la Asamblea General de las Naciones Unidas, el mandatario colombiano lanzó un enfático alegato y preguntó desafiante: «¿Qué es más venenoso para la humanidad, la cocaína, el carbón o el petróleo?». Señaló que «el dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida, así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis, y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada, pero, en cambio, el carbón y el petróleo deben ser protegidos, así su uso pueda extinguir a toda la humanidad». Y responsabilizó a los países consumidores: «Nosotros les servimos para excusar los vacíos y las soleadas de su propia sociedad que la llevan a vivir en medio de las burbujas de las drogas. Les ocultamos sus problemas que se niegan a reformar». Insistió en la necesidad de cambiar el paradigma de la lucha contra las drogas, «que en los últimos 40 años ha dejado millones de muertos en América Latina sin grandes éxitos a la vista»⁹.

9. Discurso disponible en *YouTube*, <www.youtube.com/watch?v=1T46oAkrydg>.

La apuesta de Petro es construir una visión regional, un liderazgo como región frente al mundo y, desde luego, una nueva forma de relacionamiento con los diversos poderes, en especial con EEUU y Europa. La vuelta al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil configura el escenario deseado para el presidente colombiano. La defensa de la Amazonia puede unificar energías, dado que Lula da Silva ha hecho de ella uno de los ejes de su diferenciación con la gestión de Jair Bolsonaro y su negacionismo climático. La nueva ministra de Medio Ambiente brasileña, Marina Silva, podría ser una aliada de las políticas ambientales de Petro; habrá que ver cómo se articula esto con los intereses de la petrolera estatal brasileña Petrobras y los objetivos de la transición ecológica. Con el apoyo de nuevas generaciones de jóvenes, que hacen propia la causa ambiental, Petro busca transformar su liderazgo personal en un liderazgo de Colombia en la región.

¿Cómo se tramitará esta disputa de liderazgo con un Lula da Silva y un Brasil que desean emerger nuevamente en la región y en la discusión global? Todo indica que dependerá en mucho de la estabilidad interna que logre el presidente brasileño, en medio de la polarización política y de la radicalización de un sector del bolsonarismo.

En el caso de Petro y del Pacto Histórico, su fortaleza política será puesta a prueba en las elecciones regionales de octubre de 2023. Hasta ahora, el mandatario colombiano ha dado muestras de habilidad y audacia política. Con un gobierno diverso desde el punto de vista ideológico, Petro se enfrenta a diario a la exigencia de resultados por parte de una opinión pública que hasta el momento apoyó mayoritariamente su gestión. En estos cinco meses, ha logrado dominar la discusión nacional, mostrar resultados y proyectarse fuera de Colombia. EEUU y Europa respaldan sin ambages su política de paz y muestran apertura a nuevas visiones en la discusión de temas como drogas, migración y crisis en Venezuela. Sin embargo, los indicadores de reducción de la violencia interna serán los que marquen las posibilidades de continuidad de su proyecto de gobierno, en un país donde la reelección fue prohibida. A Petro le quedan tres años y medio de gobierno para conseguir que esto no se termine en la gestión del actual presidente, sino que se consolide la paz, se profundice la democracia y, como dice Francia Márquez, la carismática vicepresidenta y cabeza del recién creado Ministerio de la Igualdad, «la dignidad se haga costumbre». ☒

Venezuela: elites fugitivas en un país hecho escombros

Florantonia Singer

La Revolución Bolivariana ha dado lugar a una reconfiguración de las elites en el país y a la emergencia de una nueva «burguesía bolivariana». Como en la novela de Francisco Herrera Luque, *Los amos del valle*, el país se parece más a una nación de feudos, hoy asociados a oscuros negocios bajo el ala del Estado, que en Venezuela rima con petróleo.

¿Quién manda hoy en Venezuela? La pregunta puede tornarse en un chiste cruel. La respuesta es una madeja de la que todavía no se ha encontrado punta. Venezuela, ese país al norte de Sudamérica, de clima formidable y grandes riquezas que describían en las clases de geografía de la escuela, atraviesa la que podría ser su mayor crisis contemporánea. Con los harapos de la democracia, en las últimas dos décadas se consolidó en el país un modelo autoritario, que ha desterrado la propiedad básica de la vida en democracia que es la alternabilidad del poder, esa que también hace pendular a las elites. Hoy varios grupos se enfrentan, hacen movimientos en el tablero, pero se unen en la repartición de privilegios y cuotas para mantener el modelo, incluso con elecciones fabricadas a la medida.

Florantonia Singer: es periodista. Por 15 años fue reportera y editora en los diarios *El Nacional* y *Últimas Noticias*. Desde 2017 es colaboradora de *El País* de España. Es parte de *El Bus TV*, un medio *offline*.

Palabras claves: bodegones, elites, Revolución Bolivariana, Venezuela.

Nota: este artículo se publicó previamente en el marco del proyecto «Elites sin destino», apoyado por la Fundación Friedrich Ebert y coordinado por Omar Rincón.

La Revolución Bolivariana, a la vuelta de 20 años, logró arrinconar a algunas elites y sustituirlas por otras. Los enroques de todo truco de refundación que, en el caso venezolano, han significado la quiebra del país con las más grandes reservas probadas de petróleo, justamente en la antesala del fin de la era de los combustibles fósiles. En ese terreno emergió una clase que concentra riqueza y poder fáctico, pero para la que aún el apelativo de elite se hace difuso.

Durante los primeros años de la década de los 2000, Venezuela registró su pico histórico en ingresos por venta de petróleo. Hugo Chávez comenzó su gobierno en 1999 con la buena estrella del mercado energético internacional. La cesta petrolera, que se promediaba en 16 dólares por barril, se duplicó en un lustro y no paró allí. En unos 88 dólares rondaba el barril a comienzos de 2008 y dio un salto a 146 dólares. Vivió una fugaz caída en 2009 por la crisis financiera mundial, para luego repuntar a partir de 2010 y llegar hasta los 103 dólares por barril que pudo acariciar el comandante en sus últimos años de vida –y gobierno–, antes de fallecer de cáncer en 2013, sin imaginar –o quizás sí– que la gasolina que regaló por años y los barriles con los que levantó su fortaleza geopolítica en la región iban a hacer falta luego.

Pero con ese caudal de ingresos y todavía algo de arrastre popular, el líder populista logró algo más importante para su consolidación. Chávez torció la Constitución que promovió en 1999 para asegurar su permanencia. La enmienda constitucional de 2009, que permitió la reelección indefinida en todos los cargos de elección popular, aniquiló la alternabilidad. Este zarpazo, que se concretó meses después de que el país rechazara en un referéndum la reforma de la Carta Magna que contenía esta y otras ambiciones, con aplausos de las izquierdas de la región y sin levantar ninguna sospecha en las democracias vecinas, es el alimento de la actual debacle institucional.

Venezuela es un país en bancarrota con una producción petrolera similar a la de principios del siglo xx, cuando comenzó a salir por borbotones la brea en Mene Grande, en la costa oriental del Lago de Maracaibo, en el estado de Zulia. Es también un país que ha perdido su democracia. Dos resultados de una ecuación que explica a las elites que ahora traccionan el poder.

Cerca de un billón de dólares ingresó a Venezuela entre 1999 y 2014, el año en que el país comenzó su caída libre y el desaguadero de migrantes. Ya son seis millones de venezolanos los que se han ido porque no hay cómo sobrevivir en un territorio donde comenzaron a instalarse agencias humanitarias, esa agria señal de que ha ocurrido un desastre. ¿Cómo se repartió ese enorme botín? Otra respuesta con varios caminos.

El chavismo se divide en dos vertientes para explicar el rol de las clases dirigentes y la conducción económica del país. La dura, la más radical, la cubana, es en la que creía Chávez, que dio lugar a la expropiación de tierras,

edificios, supermercados, joyerías, empresas de todo tipo con la bandera de la propiedad pública y social.

—¿Qué es eso que está ahí? —preguntó Chávez una vez mientras caminaba por el centro de Caracas con sus cámaras de televisión. Tras una respuesta tímida dio la orden.

—¡Exprópiese!

Con su uniforme militar, Chávez decía en tono de predicador que ser rico era malo. Con esa idea hizo que el Estado se hiciera cargo de todo, o más bien que se apropiara de todo. Es lo que sociólogos como Luis Pedro España llaman el «socialismo petrolero» —con su alias de «socialismo del siglo XXI»—, en el que los grupos económicos podían ser suplantables porque el Estado-gobierno-partido era, o pretendía ser, la única cadena de transmisión entre el ingreso y los ciudadanos. Es el modelo que hoy ha hecho aguas.

La segunda vertiente que también soporta al chavismo dibuja a la llamada «boliburguesía», que apostaba por controles moderados que permitieran a una clase vinculada a los contratos estatales acumular capitales, a la usanza de los anteriores gobiernos, pero con niveles de descontrol que le han labrado un hito en la historia de la corrupción venezolana. Esta burguesía estuvo a la sombra durante los años de economía centralizada, control de precios y prohibición del uso libre de divisas. Estuvo engordando en ese engranaje de restricciones y ahora muestra sus carnes.

Lo que nació del colapso

Numerosos relatos visten a la nueva clase venezolana que ha crecido bajo el chavismo en varias etapas. Una propina de 100.000 euros empeñada en 2009 a un trabajador de un hotel de París por un familiar de quien por una década fue presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Rafael Ramírez, ha sido el hilo que han jalado la justicia de Andorra, Estados Unidos, Suiza y Lichtenstein para hacer acusaciones contra funcionarios venezolanos. El tamaño de la «propina», sin duda, es directamente proporcional al desfalco. Este se ha convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción que el periodismo de investigación en todo el mundo se ha dedicado a desollar. Un hallazgo de esta trama también encandila: dos ex-ministros y el primo de Ramírez lavaron cinco millones de dólares a través de una joyería de lujo en Caracas mediante la compra de 250 relojes de las marcas Rolex (de oro y acero), Cartier, Chopard y Breguet¹. Unos pocos

1. «Jerarcas chavistas usaron a un joyero para blanquear cinco millones con la compra de 250 relojes Rolex y Cartier» en *El País*, 5/11/2021.

de los involucrados están siendo juzgados en Madrid. Pero Ramírez, el gran patriarca de la petrolera, que salió en la purga que vivió el chavismo luego de la muerte de Chávez, ahora es opositor a Nicolás Maduro, vive en Italia y se esconde de la justicia. Otra postal de las formas de esta nueva clase está en el alquiler de un piso en la calle Lagasta 99, de Madrid, por 16.000 euros al mes, con vecinos multimillonarios de Latinoamérica. Es propiedad de una pareja de venezolanos vinculada a contratos de construcción con el gobierno que hoy vive en Miami.

«Hay nuevos empresarios y hombres de negocios que gravitan en torno del chavismo que están pasando a ser dueños de lo que queda en Venezuela. Está muy claro que están reconfigurándose unas nuevas elites y definiendo patrones de consumo», dice el historiador Tomás Straka, para quien los tiempos de hoy figuran como una especie de neogomecismo. A principios del siglo xx, el general Juan Vicente Gómez gobernó por casi 30 años, el tiempo en que se inauguró el festín de la era petrolera venezolana. «El chavismo vivió un *boom* petrolero como el del gomecismo. Cuando los gomecistas tenían 10 años en el poder todos compraban caballos de paso y pianolas y mandaban a sus hijos a estudiar francés», dice comparando con las camionetas, apartamentos de lujo y otras extravagancias que pueden costearse algunas elites.

Caracas, donde se concentra la mayor riqueza y la precariedad de los servicios es más llevadera, parece hoy un parque temático de la abundancia. A mediados de agosto, las redes sociales se encendieron con la foto de una Ferrari roja con un lazo de regalo estacionada frente a una clínica privada. Se trataba de un *push gift*, lo que –según Google– refiere a esa tradición estadounidense de premiar a las madres por pujar un bebé. Nadie supo la identidad de los padres ni del recién nacido. Pero la escena, que no es casual sino que forma parte de los nuevos excesos cotidianos, sirvió para alimentar las ilusiones ópticas sobre que el país dejó atrás los años más duros de su crisis económica. «Venezuela se arregló» es una frase que se repite ahora con frecuencia, pero que rápidamente se ha vuelto un meme.

La selva de torres empresariales de espejos y luces en que se ha convertido Las Mercedes también podría engañar a quienes se quedaron atrapados en los tiempos de hacer filas en los automercados y morir por no tener un medicamento, el momento del colapso del socialismo bolivariano. La vieja urbanización, con su pasado de hacienda, vive un arrase constructivo. Aunque la zona conserva su vocación de vida nocturna, enclave de restaurantes, discotecas y ahora casinos, los ejecutivos que deberían salir de esas torres

Tomás Straka:
«Hay nuevos empresarios que gravitan en torno del chavismo que están pasando a ser dueños de lo que queda en Venezuela»

para una cerveza después de la jornada no existen. En una decena de manzanas solo hay demoliciones o torres vacías. Un cascarón.

Después de años de subsidios a la gasolina y los servicios públicos, de importaciones financiadas con petrodólares en operaciones ficticias o sobrefacturadas, Maduro se quedó sin dinero para soportar el gasto público, incluso luego de rebañar las reservas internacionales, reducidas al mínimo histórico en 2020. Las sanciones sectoriales de EEUU contra el mandatario venezolano, señalado por Washington por actos de corrupción y violaciones de derechos humanos, acusaciones sostenidas por una torre de informes de organismos internacionales, complicaron su liquidez y lo han empujado a hacer reformas. Contrario a lo que la narrativa oficial considera un bloqueo comparable al de Cuba, el acicate de las sanciones, por vía indirecta, favoreció la liberalización de la economía y sirvió de paño caliente para calmar la escasez de alimentos y medicinas entre quienes pueden pagarlos.

La dolarización *de facto*, empujada por la hiperinflación, y la obligada liberalización de los controles han tenido su efecto. Un sector privado contra las cuerdas, sobreviviente del desastre, está dando señales de vida. Pero también se le ha abierto cancha a una economía sumergida que aporta 20% del PIB —según firmas como Econanalítica— y reduce de alguna manera la tensión social, luego de los peores años de la crisis. Las sanciones internacionales contra Maduro han potenciado esta zona gris que opera en distintos ámbitos: desde valerse de barcos fantasma para vender petróleo fuera del radar de EEUU hasta abrir en tiempo récord decenas de supermercados o concesionarios con coches de lujo. En esas transacciones, una parte

«Ha sido una apertura hecha a los trancazos, que es el verdadero capitalismo salvaje», dice el sociólogo España

de los dólares permea aguas abajo de quienes controlan los hilos, aunque aumentando las desigualdades.

Con un Estado colapsado por la estatización, el chavismo también empezó recientemente a privatizar todo lo que acaparó con apoyo de esos empresarios que le orbitan, que se saben mover en el terreno de la opacidad y la fragilidad institucional y jurídica. «Ha sido una apertura hecha a los trancazos, que es el verdadero capitalismo salvaje», dice el sociólogo España. Pero esta nueva economía surgida del fin del socia-

lismo del siglo XXI, advierte el investigador, tiene techo bajo. «Estas nuevas elites solo consumen, no generan empleo ni conocimiento, y poco permean al resto del país. Estamos hablando de bodegueros».

La ola de recuperación económica de la que el gobierno se apropia es precisamente esa, la de los llamados bodegones, una versión de restaurantes con tiendas de ultramarinos que trajo la conquista de las importaciones libres de aranceles para una elite que ha acumulado suficiente dinero como para

invertirlo en la subterránea economía venezolana, incluso sacando provecho de la moneda nacional, evaporada tras cuatro años en hiperinflación. Es la «Venezuela emprendedora y productiva» que se replica como un virus y de la que Nicolás Maduro se ufanaba a principios de octubre mientras recorría una feria de *food trucks* y recomendaba freír las papas con aceite de trufa. Lo que también algunos analistas llaman con sorna la «*pax* bodegónica», que ha llevado a muchos venezolanos, como indican sondeos de opinión recientes, a desprenderse del dilema sobre el cambio político, la salida de Maduro o el regreso a la democracia que daba contenido a la narrativa de la oposición hace unos años, y a preferir, quizás, el surgimiento de una Singapur en el Caribe.

Luis Pedro España tiene años estudiando la pobreza en Venezuela. Es parte del grupo de investigación que hace cinco años comenzó la Encuesta de Condiciones de Vida, el único diagnóstico estadístico consecuente sobre cómo se vive en un país cuyo gobierno oculta sus cifras. Sobre la base de esos datos, España dice que la desigualdad al año 2021 no tiene precedentes en la historia moderna del país. «El expediente de este nuevo modelo económico es una desigualdad como nunca habíamos tenido», añade. Al dividir el país en deciles de ingresos, el decil más rico puede ser 15 veces más rico que el que le sigue. En ese decil más rico a la cabeza de la cadena trófica, señala España, están 1,7 millones de los 28 millones de venezolanos. Unos 600.000 estarían en Caracas, alimentando la reducida economía de importación de productos de automercado, electrodomésticos y artículos de lujo, con poca capacidad de generar ingresos reales y valor al país. Con respecto al más pobre, donde se agrupa una espesa masa en la que viven personas con menos de dos dólares al día, hay un abismo. España matiza el cálculo con maña estadística, para subrayar que, pese a las evidentes contradicciones sociales, el problema venezolano actual no es la desigualdad sino la contracción. «Si dividimos el ingreso de todo el país entre los habitantes, todos somos pobres extremos».

El sustrato de las elites

El chavismo llegó con la bandera de darles el poder a los más pobres, de la lucha contra las oligarquías, de la refundación de la nación. Ciertamente, el proceso impulsado por Chávez y continuado por sus herederos políticos se ha convertido en un parteaguas en la historia contemporánea de la nación. Ya se ha visto en Cuba y otros escenarios a los revolucionarios de izquierda convertirse, apenas tocan dinero, en parte de la elite que adversaron. En Venezuela también pasó, pero en la historia previa al chavismo hay luces para entender qué son las elites allí.

Entre principios de las décadas de 1960 y 1990, el país vivió una democracia joven con instituciones flácidas, vestida con los trajes de la centroizquierda o de la socialdemocracia cristiana

Entre principios de las décadas de 1960 y 1990, el país vivió una democracia joven con instituciones flácidas, vestida con los trajes de la centroizquierda o de la socialdemocracia cristiana. Straka describe las elites antes de la llegada del chavismo como las de una sociedad más permeable, que se acomodó al escenario en el que el Estado se volvió providencial gracias a la explotación del petróleo de principios del siglo xx. Eran elites vinculadas a los valores democráticos, a la educación, la cultura y sus privilegios, menos a la dirigencia. «Eran elites incluso porosas, como ciertas tragedias que terminan en comedias románticas», señala el profesor universitario.

La Venezuela de la última parte del siglo xx funcionó gracias al «sistema populista de conciliación de elites» descrito por el politólogo español Juan Carlos Rey, prolífico académico que dedicó su ciencia a Venezuela y falleció en Caracas en octubre de 2020. Ese proceso implicó un reconocimiento de la pluralidad de intereses sociales, económicos y políticos que garantizó a las elites —el Estado, la Iglesia católica, las Fuerzas Armadas, empresarios, gremios, academia— no salir afectadas por «la aplicación de la regla de la mayoría», explica Miriam Kornblith en un ensayo de 1994 publicado en la revista *Nueva Sociedad*². Este mecanismo, sin embargo, tuvo sus daños colaterales. Un ensanchamiento de las brechas sociales, apunta Straka, que le permitió a Chávez hacerles creer a los casi tres millones de venezolanos que votaron por él en 1998 que había una oligarquía que se había robado todo y que por eso él ocuparía la silla presidencial para reivindicar a los excluidos. «La llegada de Hugo Chávez al poder es el fracaso de las elites de ese momento», subraya.

Venezuela vivió en 1989 un estallido como los que hoy están asimilando países como Chile o Colombia. El 27 de febrero de ese año hubo una ola de disturbios detonados por el aumento del precio de la gasolina y las tarifas del transporte público como parte de un paquete de medidas económicas del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. El Caracazo dejó saqueos, detenciones, muertos, desaparecidos; una herida social que no cerró del todo. La policía abrió un nuevo expediente de violaciones de derechos humanos que hoy siguen impunes. Pero un día antes Venezuela era uno de los países más estables de América Latina.

El desborde de febrero de 1989, al que siguió una etapa de conflictividad que tuvo su cumbre en la intentona golpista del teniente coronel Chávez del

2. M. Kornblith: «La crisis del sistema político venezolano» en *Nueva Sociedad* N^o 134, 11-12/1994, disponible en <www.nuso.org>.

4 de febrero de 1992, terminó por replegar a la clase política, que no hizo nada con ese grito. El bipartidismo, que servía de cadena de rodamiento a la democracia venezolana luego del fin de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez en 1958, comenzó a fracturarse. El 27 de febrero de 1989 –como afirma el periodista Alonso Moleiro en el libro *La nación incivil*– es la carta de nacimiento del fenómeno de la antipolítica que hizo posible la llegada de Chávez al poder por la vía electoral³.

Uno de los mayores oráculos para comprender los pasos en falso de este país, el dramaturgo José Ignacio Cabrujas, escribió en sus artículos en la prensa de esos convulsos años 80 y 90 sobre el disimulo, esa identidad que signa la nacionalidad venezolana, la de un país provisional con una precaria institucionalidad y una corta visión de futuro. De ese sustrato, por supuesto, también están hechas sus elites.

Quiénes son

Un andamio cuelga de la pared exterior del Centro San Ignacio, un exclusivo centro comercial de Caracas, donde estaba la joyería que vendió los 250 relojes a los lavadores de PDVSA. Adentro resiste la mole de cemento con el oxígeno de restaurantes y bodegones, sin poder ocultar decenas de tiendas cerradas como lastre de una economía que se redujo a un quinto de su tamaño. Las poleas que cuelgan en lo más alto del edificio son las herramientas para un bautismo. En enormes letras blancas se lee «Gorrín», por Raúl Gorrín, que puede considerarse emblema del nuevo empresariado que ha surgido en los 20 años de Revolución Bolivariana. Es la marquesina que anuncia que Venezuela tiene nuevos dueños.

En este edificio el Grupo Gorrín tiene sus oficinas. El empresario, de profesión abogado, se hizo rico en el mercado de las aseguradoras. Apenas era un treintañero cuando llegó la revolución, pero en 2014, con Maduro en las riendas, despegó en otras áreas de negocios. Compró el único canal de noticias 24 horas que había en Venezuela, un contrapoder crítico del gobierno. Tras la transacción, el medio cambió totalmente su línea a una favorable al gobierno y dejó de ser un canal exclusivo de noticias para entregar su parrilla a la evasión.

Este fue un mecanismo que se aplicó con otros capitales mediáticos, como el tabloide de mayor circulación en el país, el diario *Últimas Noticias*, y luego el centenario diario *El Universal*. El resto de la crítica fue apagada

3. A. Moleiro: *La nación incivil. El Caracazo, sus consecuencias y el fin de la democracia*, Dahbar, Caracas, 2021.

poco a poco, como en la fábula de la rana y el agua hirviendo, con la propia crisis económica, la restricción del acceso al papel y los insumos que ha provocado el cierre de unos 60 impresos; con la revocatoria de las licencias para transmitir de centenares de emisoras, el ejemplo que tempranamente dio Chávez en 2007 con el cierre del primer canal de televisión venezolano, Radio Caracas Televisión.

Ese cuarto poder que fueron los medios en Venezuela, y que todavía son en Latinoamérica, hoy no tiene ninguna incidencia en el país. Han quedado sin voz o como muñecos de ventrílocuos. Esta elite fue enterrada junto

Esta elite fue enterrada junto con otras, como la de los intelectuales o universitarios, la elite del conocimiento

con otras, como la de los intelectuales o universitarios, la elite del conocimiento, conformada por *phD* cuyos salarios los ubican en la pobreza, al punto de autodenominarse en sus protestas «pobresores» en vez de profesores.

Estos nuevos grupos de poder movidos por el dinero y los contratos con el gobierno, los llamados comúnmente «enchufados», no solo se han favorecido del reparto de los ingresos del Estado sino que

también han sido útiles para la consolidación de un modelo autoritario en Venezuela. Algunos de ellos tienen en común tener su nombre en expedientes en juzgados de EEUU, España y Suiza y sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense. Al menos 20 países investigan 50 casos de corrupción y blanqueo de capitales ligados al desfalco del patrimonio público venezolano, según contabilizaba el capítulo local de Transparencia Internacional a finales de 2019. La anterior Asamblea Nacional, controlada por la oposición, calculó el tamaño del agujero en el patrimonio nacional. Para 2019 señalaba que se habían perdido entre 400.000 y 800.000 millones de dólares en toda la corrupción chavista. Pero el monto es una niebla aún. El costo más evidente está en la crisis humanitaria que atraviesa el que ahora es el país más pobre de América Latina y el más rezagado en superar la contracción adicional de la pandemia, según los balances del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2021.

Así como Gorrín tiene su apellido en altorrelieve sobre un edificio, el nombre de Alex Saab está escrito en paredes por todo el país como parte de una campaña para exigir su liberación. El gobierno desnudó finalmente el rol de un empresario que estuvo por años en las sombras, que se hizo millonario en la Venezuela más pobre y se convirtió en agente de las fortunas del entorno de Maduro, según han demostrado investigaciones periodísticas en la región y expedientes abiertos en cortes de EEUU. Así como Gorrín, Saab tiene cargos de lavado de dinero en EEUU. Ambos han sido sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense y representan a las nuevas clases en Venezuela.

El hombre más poderoso del país, el contratista favorito del gobierno de Maduro, se ha sentado a comer en la mesa de los venezolanos. Se convirtió en agente de negocios en áreas tan distintas como la importación de espaguetis turcos y leche mexicana de mala calidad con sobreprecio –como detectó en su momento la Fiscalía de México– para abastecer a los más pobres en Venezuela, y también asegurar su dependencia de las llamadas bolsas CLAP, siglas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, la figura de control social que ideó Maduro en 2015 para hacer frente a la escasez que ha vivido el país. Saab también ha vendido lingotes de oro sacados del Arco Minero del Orinoco, una franja sometida a una voraz explotación que abarca 12% del territorio venezolano y se monta sobre la Amazonia y áreas protegidas por su biodiversidad. Carbón, construcción de gimnasios sociales, importación de gasolina. También supermercados o bodegones. Hoy Saab espera su juicio en una cárcel de Miami y sus cartas, supuestamente escritas durante la detención hace más de un año en Cabo Verde, desde donde fue extraditado en octubre, fueron editadas en un libro que se bautizó recientemente en la feria oficial del libro en Caracas y que editó el gobierno.

Este empresario colombiano fue detenido cuando paró en su avión a cargar combustible en una ruta hacia Irán. Justamente iba a cerrar acuerdos para importar la gasolina por la que hoy los venezolanos hacen cola. Pese a lo grueso de su responsabilidad, solo fue hasta su detención que el gobierno pronunció su nombre en su defensa, lo designó diplomático para intentar evitar que cayera en manos de la justicia estadounidense y pudiera ser merodeado por los acuerdos de delación. Como él, antes han caído banqueros, guardaespaldas, tesoreros de la nación, empresarios, militares y funcionarios de un amplio espectro de mandos que sacaron fortunas de un país en escombros. Un ex-fiscal venezolano en el exilio dice que en Miami se mueve un mercado de pruebas de un impreciso número de colaboradores, testigos y actores principales de la corrupción que intentan negociar el descongelamiento de bienes y una vida sin cuentas pendientes. Todos ellos fueron parte de esa elite difusa que ha mandado en Venezuela estos años.

El chavismo supo apalancarse en los poderes públicos para atornillarse en el poder, siguiendo el mismo modelo de gobiernos afines como el de Nicaragua. A los militares los puso a comandar negocios.

Chávez modeló la Fuerza Armada Nacional como un ejército revolucionario, como su guardia pretoriana. La constitucionalidad de la institución fue mellada cuando los militares comenzaron a ocupar ministerios y cargos en empresas públicas, con terribles resultados de gestión. Siendo civil, Maduro tiene un gobierno con más piezas militares que el que tuvo Chávez. Son su sostén. Los presos políticos militares son mayoría entre los más de

250 que ha dejado la persecución política de estos años, según los reportes de organizaciones de derechos humanos como Foro Penal Venezolano. Nunca ha habido tantos militares presos, degradados, expulsados, dados de baja o desertores. Hay otro número que expresa el papel de elite que tiene la cúpula militar en la estabilidad del gobierno de Maduro, reelegido en 2018 en comicios que tuvieron serias fallas de origen que tambalean su legitimidad y le achican la diplomacia. En la última década se ha ascendido a más de 1.200 generales y almirantes, «lo cual puede ser considerado un mecanismo ideado como incentivo de lealtad, ya que es excesivo, de acuerdo con el tamaño de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana», escribió en un análisis Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano⁴.

Si uno de los rasgos de la modernidad es la heterogeneidad de las elites, ese paisaje ha sido aplanado por el chavismo. Las cúpulas que se beneficiaron de los negocios con el gobierno, en torno de la Fuerza Armada o el Partido Socialista Unido de Venezuela, son las que están a flote y han establecido sus mecanismos para compartir el poder sin perderlo. El país se parece más a una nación de feudos, como el país campamento que el historiador Francisco Herrera Luque noveló en *Los amos del valle* en 1979 y en otras obras; como una nación fragmentada, cuya reconstrucción dependerá del surgimiento de nuevas elites y nuevos relieves. ☒

4. R. San Miguel: «Diagnóstico y propuestas para la Fuerza Armada Nacional» en Juan Carlos Rueda Azcuénaga (ed.): *Elementos de una transición integral e incluyente en Venezuela: una visión desde lo local*, Instituto para las Transiciones Integrales, s./l., 4/2020.

Intelectuales y elites

¿Parte del problema o parte de la solución?

Cristóbal Villalobos Dintrans

Durante las últimas décadas, existe una revitalización de la discusión sobre las elites, que sin embargo no ha estado acompañada de un debate profundo sobre el rol de los intelectuales en la reproducción social. Tal discusión resulta importante en un contexto en el que se suele mencionar el alejamiento de las elites de la sociedad como una de las razones del deterioro democrático, tanto en América Latina como a escala global.

La (re)emergencia de las elites y la ausencia de debate sobre los y las intelectuales

Si a mediados y finales del siglo pasado la pregunta por la coexistencia pacífica, el armamentismo, los procesos de liberación nacional y las posibles consecuencias de una guerra nuclear constituían los tópicos

Cristóbal Villalobos Dintrans: es sociólogo, trabajador social y magíster en Economía Aplicada, así como doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Chile. Actualmente es subdirector del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (CEPPE-UC) de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus áreas de investigación incluyen las desigualdades educativas, los movimientos sociales de la educación, y educación y elites.

Palabras claves: democracia, dominantes/dominados, elites, intelectuales.

Nota del autor: este artículo ha sido elaborado luego de conversaciones, discusiones y lecturas llevadas a cabo como parte de la estancia de investigación que desarrollé en el Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales (CALAS), en el marco del «Laboratorio de Conocimiento II. Confrontando las desigualdades en América Latina: perspectivas sobre riqueza y poder». Muchas de estas reflexiones se han complementado con los análisis y debates desarrollados en el marco del Proyecto Fondecyt Regular 1200841: «Radiografía del pensamiento crítico latinoamericano: las Antologías de Clasco como aproximación a un canon regional», financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) del gobierno de Chile.

más importantes de discusión, hoy las preguntas centrales de las sociedades occidentales giran en torno de los exorbitantes niveles de desigualdad social y sus implicancias para la cohesión social, los efectos del cambio climático sobre la especie humana y sobre el planeta, y las consecuencias de la (aparente) eclosión de las democracias liberales.

El alcance y la profundidad de estas discusiones han implicado transformaciones en múltiples campos y áreas de investigación. En las ciencias sociales, el impacto de la desigualdad, la relevancia de la crisis del Antropoceno y el debilitamiento del Estado-nación como forma de organización han permitido reposicionar la discusión sobre cómo es, cómo se produce y cómo se reproduce el orden contemporáneo. En esta línea, se ha (re)considerado especialmente el rol de un sujeto social olvidado durante décadas: las elites. Caracterizadas como aquellos sujetos que poseen altos niveles de capital (social, cultural, económico) y prestigio con respecto al resto de la sociedad¹, las elites constituyen parte fundamental de la sociedad neoliberal contemporánea. La constatación de la relevancia de las elites políticas y económicas como agentes que, siguiendo a Charles Wright Mills, «hacen historia»² ha generado un auge —algo inesperado, hay que decirlo— de los estudios sobre este grupo en las últimas dos décadas. Aunque fructífera y densa en campos como la sociología, la economía, la educación o la ciencia política, la revitalización de los estudios sobre las elites no se ha acompañado, sin embargo, de un debate igualmente intenso sobre el rol que los intelectuales pueden (podemos) cumplir en la configuración de la reproducción social, ni sobre las implicancias de esta posición social en los problemas que, paradójicamente, han (¿o hemos?) ayudado a iluminar. Como una forma de contribuir (desde la mirada de un investigador inmerso en

**Los y las intelectuales
no han (hemos)
problematizado lo
suficiente cuál es su
(nuestra) posición en
la estructura social**

el campo académico en América Latina) a este debate intelectual del Sur global, en este ensayo busco problematizar las relaciones, imbricaciones y tensiones entre elite e intelectuales. La tesis central que recorre el ensayo y que intento defender es que, más allá de las problemáticas que han ayudado a poner en discusión, los y las intelectuales no han (hemos) problematizado lo suficiente cuál es su (nuestra) posición en la estructura social de las sociedades occidentales (y especialmente, en las latinoame-

ricanas), lo que ha contribuido a que se conviertan en un actor social que ha colaborado —muchas veces, más allá de sus intenciones— en la reproducción de las elites políticas y económicas, aunque muchas veces el discurso intelectual (tanto público como privado) haya sido altamente crítico con estas mismas elites.

1. Shamus Khan: «Elite Identities» en *Identities: Global Studies in Culture and Power* vol. 19 N° 4, 2012.

2. C. Wright Mills: *The Causes of World War Three*, Ballantine Books, Nueva York, 1960.

Intelectuales, clase y poder: algunos vínculos entre elite e intelectuales

La categoría de intelectual es una noción eminentemente moderna, originada al calor de un debate público desarrollado en la Francia de finales del 1800, a raíz del caso Dreyfus. Con el nombre de «intelectual» se buscó denominar (y, de paso, clasificar y categorizar) a un conjunto de escritores –a esas alturas, casi exclusivamente hombres– que buscaban defender los principios fundadores de la modernidad occidental (libertad, igualdad y fraternidad) en la esfera pública³. Posteriormente, las ciencias sociales –sobre todo, pero no únicamente, la sociología– adoptaron esta categoría, y se desplegó toda una tradición y un campo de discusión en los siglos XIX y XX.

Desde mi perspectiva, dos temas que han sido debatidos respecto de los intelectuales se entroncan directamente con la discusión sobre las elites. Por una parte, y desde inicios del siglo XX, se ha discutido intensamente la posición de la intelectualidad dentro de la estructura social. De esta manera, se ha buscado (a veces, de forma bastante esquizofrénica) determinar si este grupo constituiría una clase o grupo diferenciado o, por el contrario, si podría ser considerado una fracción particular de otras clases sociales ya existentes⁴. Este debate posiciona una primera pregunta central para entender la relación entre elites e intelectuales: ¿somos las y los intelectuales parte de una clase en sí misma o, por el contrario, somos parte de otra clase social? En la «conversión» en intelectuales, ¿pasamos de una clase a otra? En consecuencia ¿somos las y los intelectuales agentes que podemos deshacer nos de nuestras «pasiones políticas» o de nuestra condición socioeconómica y de clase para discutir en el espacio público o, por el contrario, estamos indefectiblemente constreñidos por nuestra posición en la estructura social? Mientras que la idea del intelectual como clase particular será defendida especialmente por el filósofo y escritor francés Julien Benda, la noción del intelectual como agente «atado» o «condicionado» por su estructura social será popularizada bajo la categoría de «intelectual orgánico» por el comunista italiano Antonio Gramsci⁵.

Conectada con lo anterior, una segunda pregunta central en el debate sobre la categoría «intelectual» se vincula con el impulso ético y el sentido

3. Carlos Altamirano: *Intelectuales. Notas de investigación de una tribu*, Norma, Buenos Aires, 2006.

4. Mohammed Brahimí, Marcos González, Marcus Morgan y Amín Pérez: «Strategies of Public Intellectual Engagement» en *The Sociological Review* vol. 68 N^o 5, 2020.

5. J. Benda: *The Treason of the Intellectuals* [1928], Transaction, New Brunswick, 2007; A. Gramsci: *Cuadernos de la cárcel* [1929], Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 1975.

político de la acción intelectual⁶. En este caso, lo central de la discusión es la lealtad que el intelectual tiene (o puede tener) hacia quienes detentan y ejercen el poder, así como la direccionalidad de la transformación social que busca promover. De esta manera, lo que aquí se debate no es tanto el lugar o la posición del intelectual, sino más bien el sentido o la orientación de su acción. Para algunos, los intelectuales son (de hecho o de derecho) agentes que pueden/deben confrontarse críticamente al poder social y político⁷, personas que tienen como función principal «cuestionarlo todo y a todos», con Jean-Paul Sartre como la figura icónica de lo que Pierre Bourdieu denominó «intelectual total» y que puede verse como un prototipo de este tipo de actor⁸. En contraste, Wright Mills, en su ya clásico *La elite del poder*, defendería la idea de que los y las intelectuales de las sociedades capitalistas (y también los de los países del orbe soviético) estaban altamente constreñidos en su capacidad crítica y se convertían con facilidad (y frecuencia) en reproductores del poder social y político⁹. Desde otro enfoque, los trabajos más recientes de Gisèle Sapiro destacan el proceso de autonomización del campo intelectual respecto del campo político, y muestran cómo las y los intelectuales no se movilizan solo para influir en la esfera política, sino también, de manera creciente, como actores que buscan influir en su propia esfera o campo, así como en los campos sociotécnicos o mediáticos que sirven como correas transmisoras entre «lo político» y «lo intelectual»¹⁰.

Tanto la pregunta por la posición como la pregunta por la acción permiten interseccionar la discusión sobre intelectuales y elites, y son la base de las preguntas centrales de este artículo: ¿son (somos) los y las intelectuales parte de las elites? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Qué diferencia y qué asemeja a los y las intelectuales con las elites políticas y/o económicas? ¿De qué forma y en qué medida pueden (podemos) los y las intelectuales posicionarse (posicionarnos) contra o con el poder político y económico? En definitiva, ¿son (somos) los y las intelectuales parte de los procesos de reproducción de las elites o parte de su cuestionamiento? Como forma de problematizar estas preguntas (más que responderlas), en las siguientes secciones exploramos

6. Gill Eyal y Larissa Buchholz: «From the Sociology of Intellectuals to the Sociology of Interventions» en *Annual Review of Sociology* vol. 36, 2010.

7. Razmig Keucheyán: «Las mutaciones de la teoría crítica. Un mapa del pensamiento radical hoy» en *Nueva Sociedad* N° 261, 1-2/2016, disponible en <www.nuso.org>.

8. P. Bourdieu: *Contrafuegos. Reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión neoliberal*, Anagrama, Barcelona, 2006.

9. C. Wright Mills: *La elite del poder*, FCE, Ciudad de México, 2005.

10. G. Sapiro: «Modelos de intervención política de los intelectuales. El caso francés» en *Prismas* vol. 15 N° 2, 2011.



© Nueva Sociedad / Álvaro Díaz 2023

Álvaro Díaz es un diseñador gráfico e ilustrador uruguayo. Trabaja en su estudio desde 2013. Ilustra sobre historias cotidianas y temas de connotación social y política. Su estilo se inspira en la técnica serigráfica; utiliza texturas y colores contrastantes para lograr composiciones contundentes y definidas. Instagram: <@negroilustre>.

algunas características, condicionantes y análisis de la relación entre elites e intelectuales buscando, de esta manera, aproximarnos a algunas respuestas.

Los y las intelectuales como «dominantes dominados»

Quizás lo primero es partir de una sentencia: en la actualidad, la gran mayoría de las y los intelectuales son (somos) parte consustancial de las elites. Distintos motivos pueden permitir sustentar esta afirmación. En primer lugar, tal como han descrito Mike Savage y Karel Williams, una parte de las fracciones contemporáneas de las elites son las de conocimiento o intelectuales¹¹. Caracterizados como grupos que tienen el privilegio de ciertos capitales, principalmente simbólicos, los intelectuales representan una fracción ínfima de la población que tiene (tenemos) un acceso desproporcionado de influencia y voz en las sociedades —a través de los medios, la prensa, las redes sociales y/o las publicaciones académicas—, y por lo mismo pueden (podemos) ser catalogados sin muchas ambigüedades como una parte relevante de las elites contemporáneas. En segundo lugar, durante las últimas décadas se ha mostrado que parte importante de lo que se reconoce como intelectuales tiene un rol de soporte simbólico y/o ideológico de los grupos de poder, ejerciendo funciones de enlace, conexión o entroncamiento entre el conocimiento y otras fracciones de las elites. Así, los y las intelectuales ejercen (ejercemos) muchas veces una posición y disposición específica dentro de las elites: la de desarrollar redes y flujos entre las elites de conocimiento y otras fracciones de la elite, mediante la elaboración, traducción o promoción de ciertas ideas. Finalmente, es posible indicar que las y los intelectuales son (somos), *grosso modo*, una fracción relevante de las elites por un tercer motivo: en la mayoría de las sociedades contemporáneas, se trata de actores con altos grados académicos, reconocimiento social y/o premios. En sociedades como las latinoamericanas, donde menos de 1% de las personas posee un doctorado (en México, por ejemplo, el porcentaje es de 0,1%), tener este grado académico posiciona, casi automáticamente, más dentro que fuera de las elites.

Por estas tres razones (constitución como elite de conocimiento, relación simbiótica con el poder y posesión de altos niveles de capital cultural), los y las intelectuales pueden definirse, a lo menos de forma inicial, como parte de las elites contemporáneas. Ahora bien, ¿cuál es su (nuestra) posición entre las distintas fracciones de las elites? Más allá de las individualidades (que obviamente hacen que ciertos sujetos estén mejor y otros peor posicionados), es posible

11. M. Savage y K. Williams (eds.): *Remembering Elites*, Blackwell, Nueva York, 2008.

afirmar que los intelectuales ocupan la posición que Bourdieu definió como de actores *dominantes dominados*¹². Esta idea busca indicar que, a pesar de ser parte de los sujetos que están en la cúspide de la estructura social respecto del conjunto de la población, son sujetos dominados en el interior de estos grupos, y por lo mismo, son (somos) actores sociales que se entienden (nos entendemos) desde una dualidad de ser y no ser al mismo tiempo parte de estas elites.

«Crear» intelectuales: ¿producción o reproducción de una elite de conocimiento?

Habiendo (habiéndonos) posicionado a los y las intelectuales como actores *dominantes dominados* dentro de la estructura social y como parte de las elites, vale la pena ahora preguntarse: ¿de qué forma el campo intelectual produce y reproduce a sus miembros? Esta pregunta nos lleva directamente a la discusión sobre los procesos de reproducción de las elites intelectuales. Todas las elites generan distintos mecanismos para reproducirse y perpetuar sus privilegios, lo que incluye estrategias de reproducción matrimonial, pertenencia a ciertos clubes, generación de redes de amistad, generación de pautas de comportamiento específicas o uso de ciertas vestimentas¹³. Con diferencias, todas estas estrategias de reproducción buscan separar a las elites del resto de la sociedad y también de otras fracciones de las propias elites, promoviendo una distinción —simbólica pero con efectos reales— entre «ellos» y «nosotros»¹⁴.

Todas las elites generan distintos mecanismos para reproducirse y perpetuar sus privilegios

En el caso del espacio intelectual, suele pensarse que los mecanismos de producción y reproducción de las posiciones se vinculan menos con procesos de clausura social y más con la lógica del mérito y la capacidad individual, especialmente en las últimas décadas, en las que la lógica de la competencia y el funcionamiento del capitalismo académico han cooptado parte importante de los espacios y dinámicas donde las elites se desenvuelven¹⁵. De esta forma, se ha extendido la idea de que, a diferencia de otros grupos de la elite (como las elites políticas o las económicas), el de los y las intelectuales sería un grupo al que no se pertenece *per se*, sino por lo que uno hace (o deja de hacer).

12. P. Bourdieu: *Homo academicus*, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2008.

13. P. Bourdieu: *Las estrategias de la reproducción social*, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2011.

14. Michele Lamont y Virag Molnár: «The Study of Boundaries across the Social Sciences» en *Annual Review of Sociology* vol. 28, 2002.

15. Sheila Slaughter y Gary Rhoades: *Academic Capitalism and the New Economy: Markets, State, and Higher Education*, Johns Hopkins UP, Baltimore, 2004.

Esta idea, sin embargo, es poco más que una ilusión promovida precisamente por el mundo intelectual. Por una parte, la posición de intelectual está bastante más condicionada por la procedencia, los capitales simbólicos de la familia, el peso de la educación y la posición institucional de lo que a muchos de los y las intelectuales les gusta reconocer, tal como se pudo ver, por ejemplo, en un reciente estudio sobre población con doctorado en Chile, que mostró que las probabilidades de obtener ese título están altamente mediadas por la clase de origen y por la universidad donde se estudió¹⁶. Por otra parte, la posición que ocupamos tanto dentro como fuera del campo intelectual está siempre interseccionada por la clase, el género y la raza. Tal como ha mostrado, por ejemplo, Angela Davis a través de su autoanálisis¹⁷, la posición del intelectual es inevitablemente una posición corporizada en un sujeto que no opera en el vacío, sino en una sociedad que lo cataloga y clasifica. Por estas razones, los procesos de reproducción de los y las intelectuales no distan mucho de los otros procesos de reproducción de las elites, que tienden mucho más a la reproducción que al recambio.

Los y las intelectuales en el mundo: más allá del compromiso y la neutralidad

Tanto la pregunta por la posición de los y las intelectuales en tanto miembros de las elites como aquella por los procesos de reproducción de esas posiciones se focalizan en lo que podríamos denominar «dimensiones posicionales» de las elites, pues buscan describir *el lugar* que estas tienen en las sociedades. Por el contrario, las siguientes tres secciones abordarán lo que esta fracción de las elites *hace* en las sociedades. En el caso de las y los intelectuales, la pregunta por la acción ha sido largamente abordada, aunque dos enfoques han sido predominantes. Por una parte, una concepción hegemónica ha cultivado la idea de que el rol central del intelectual es ser un sujeto sin «pasiones» (políticas, sociales, sexuales) que, desde la racionalidad, tiene la capacidad de analizar cierto ámbito de la sociedad, promoviendo lo que Max Weber denominó «neutralidad valorativa»¹⁸. En oposición a esta visión, se ha indicado que precisamente lo que puede diferenciar a los y las intelectuales de otros

16. Paulina Pérez Mejías, Roxana Chiappa y Carolina Guzmán-Valenzuela: «Privileging the Privileged: The Effects of International University Rankings on a Chilean Fellowship Program for Graduate Studies Abroad» en *Social Sciences* vol. 7 N°12, 2018.

17. A. Davis: *Mujeres, raza y clase*, Akal, Barcelona, 2005.

18. M. Weber: *Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva*, FCE, Ciudad de México, 2008.

grupos es su capacidad eminentemente crítica, es decir, la posibilidad de contrastar y hacer frente al poder y a las injusticias sociales¹⁹.

Aunque no tengo el espacio para desarrollar todos los argumentos, lo central que quiero destacar sobre este punto es que, en sociedades como las contemporáneas, el abandono de la pretensión weberiana de neutralidad valorativa en el análisis de los fenómenos sociales constituye un primer impulso ético-político para poder reconfigurar la relación entre elites e intelectuales. Este abandono no implica de manera mecánica un resurgimiento del «intelectual militante» comprometido socialmente y que abandona el espacio académico²⁰, ni tampoco una práctica «anfibia» que combine de forma separada la militancia social con el quehacer intelectual²¹, sino más bien una sentencia que permita una recontextualización de los usos y orientaciones de la labor intelectual.

Siguiendo a Alan Sokal y Jean Bricmont, lo central no es tanto tomar posición abandonando la pretensión analítica, sino reconocer que el análisis de la realidad involucra –inevitablemente– una toma de posición y observación sobre esa realidad, buscando así aumentar los niveles de capacidad crítica y analítica²² y no entendiendo ambos elementos como aspectos contradictorios sino, por el contrario, como complementarios. En definitiva, se trata de incorporar la idea de que los y las intelectuales no son (somos) actores neutrales ni externos a los problemas sociales de la región, pero tampoco son (somos) –por posición y rol– simplemente actores que vivencian las situaciones que buscan describir. De este modo, pueden (podemos) ser actores no neutrales, pero sí objetivos (o, si se quiere ser más precisos, rigurosos), lo que, más que restarles (restarnos) potencia política y capacidad de transformación, aumenta esa potencia.

Los y las intelectuales no son (somos) actores neutrales ni externos a los problemas sociales de la región

Resistencias y contrarresistencias del modo de ser intelectual: ¿contra uno mismo?

Junto con la discusión del sentido de la acción ético-política de los y las intelectuales en tanto fracción de las elites de conocimiento, también me parece

19. R. Keucheyán: ob. cit.

20. C. Altamirano: ob. cit.

21. Maristella Svampa: *Cambio de época. Movimientos sociales y poder político*, Clacso / Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2014.

22. A. Sokal y J. Bricmont: *Imposturas intelectuales*, Paidós, Barcelona, 1999.

importante preguntarnos por las formas de acción cotidianas, es decir, no solo respecto del sentido de la acción, sino también de su forma de concreción diaria. Al respecto, y a diferencia de lo que ocurrió en buena parte del siglo xx, cabe destacar que la acción de los y las intelectuales (especialmente en América Latina) está circunscrita de forma importante a las universidades más que a centros de pensamiento, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en Europa o en Estados Unidos²³. De esta forma, hoy los y las intelectuales están casi inevitablemente ligados a las prácticas y políticas de las universidades contemporáneas, basadas en el *management*, un potenciamiento de las prácticas individualizantes y la centralidad de la investigación aplicada, rápida y de corto plazo²⁴.

Como es esperable, este marco constriñe y delimita el margen de acción diaria de las y los intelectuales. Sin embargo, como donde hay coacción hay resistencia²⁵, este constreñimiento puede ser entendido también como un espacio de posibilidad para que emerjan distintas modalidades de contestación a estas prácticas. En este sentido, multiplicar las formas de resistencia –tanto públicas como subterráneas, tanto sutiles como directas– que permitan imaginar nuevas maneras de ser y aparecer como intelectual se constituye en una segunda tarea de acción. Aunque las direcciones de estas formas de resistencia pueden ser múltiples, me parece que lo fundamental a destacar son cuatro grupos de acciones: (a) las que permitan contrarrestar la lógica individualizante del conocimiento, potenciando el desarrollo de proyectos colectivos por sobre formas de reconocimiento intelectual hiperindividualizadas; (b) las que potencian formas de conocimiento abierto y de procesos de investigación más «lentos»; (c) las que permitan diseñar agendas de investigación contextualizadas y relevantes para las comunidades y sociedades, más que los «problemas imaginados» seleccionados individualmente por los y las intelectuales y (d) las que permitan un posicionamiento de temas centrales, futuros imaginados y, por qué no, soluciones para las comunidades y sociedades en las que vivimos, y no solamente planteando preguntas o debates muchas veces abstractos e infructíferos para mejorar la calidad de vida de las personas.

Aunque difícil, creo que esta agenda posiciona uno de los puntos centrales para subvertir la dinámica de producción y reproducción de los y las intelectuales, resquebrajando así su vinculación como elites de conocimiento, pues permite cuestionar la idea del intelectual como un actor individual,

23. José Joaquín Brunner, Orazio Belletini y Adriana Arellano (eds.): *Más Saber América Latina. Potenciando el vínculo entre think-tanks y universidades*, Think-Tank Initiative, Santiago de Chile, 2014.

24. Yann Moulier-Boutang: *Cognitive Capitalism*, Polity Press, Malden, 2011.

25. Michael Foucault: *Nacimiento de la biopolítica*, FCE, Ciudad de México, 2007.

que genera sus problemas desde una «torre de marfil» y que se focaliza en sus propios problemas más que en los de las sociedades. Se trata, en definitiva, de promover un acercamiento entre el «ellos» y el «nosotros», reconociéndonos como parte de la comunidad política y social a la que pertenecemos.

Hacia la construcción de un intelectual no elitizado: el lugar central de la autorreflexividad

Tanto el sentido ético-político de la acción de los y las intelectuales como las prácticas de resistencia que puedan llevar adelante no emergerán de forma normativa, indicativa ni menos aún coercitiva. Por el contrario, me parece que abordar estos desafíos requiere de una transformación que reposicione —de forma crítica pero a la vez productiva— la pregunta por quiénes somos en la sociedad. Para lograr esto, se requiere que el mundo intelectual pueda desarrollar altos niveles de reflexividad y autorreflexividad. Entendida como la capacidad de observar el operar particular desde un punto de vista propio, pero también desde otras miradas²⁶, la autorreflexividad no se limita a un ejercicio psicológico, sino que puede comprenderse como un ejercicio académico (si se quiere, científico) inmanente al quehacer intelectual²⁷.

Vista de esta manera, la autorreflexividad es más que una declaración de principios: es una actividad que nos permite discutir (de forma sistemática) los fundamentos y límites de los propios discursos, los sentidos de los propios productos y los impactos de las propias acciones, reconociendo, a la vez, la potencialidad y los límites de esos pensamientos, ideas y acciones y su impacto como parte de las elites de las sociedades. Así, la autorreflexividad se estructura como una piedra angular del trabajo intelectual contemporáneo, que permite subvertir las lógicas estatuidas de «ser intelectual» en los marcos del capitalismo académico, pero también producir pensamientos y acciones considerando esta realidad. En definitiva, la autorreflexividad va más allá de un pensamiento marginal, es una acción que se introduce dentro del propio saber-hacer del y de la intelectual, pues permite generar una observación de segundo orden sobre el propio hacer. En sociedades como las latinoamericanas, donde

**La autorreflexividad
se estructura
como una piedra
angular del trabajo
intelectual
contemporáneo**

26. Suzanne Day: «A Reflexive Lens: Exploring Dilemmas of Qualitative Methodology through the Concept of Reflexivity» en *Qualitative Sociology Review* vol. 8 N^o 1, 2012.

27. P. Bourdieu y Loïc Wacquant: *Una invitación a la sociología reflexiva*, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 1992.

los y las intelectuales están (estamos), por decirlo de alguna forma, «lejos» de la sociedad, este ejercicio de autorreflexividad se constituye no solo como una *posibilidad* de acción, sino más bien como una *necesidad* de acción.

Una condición fundamental para desarrollar procesos de autorreflexividad es que estos sean sistemáticos. Para ello, es posible rescatar las herramientas propias de las ciencias sociales, para aportar un sello de rigurosidad, que permita salir de la reflexión como una actividad aislada y descontextualizada del trabajo intelectual diario. En esta línea, acciones como el autoanálisis sociológico, la autoetnografía o la construcción de círculos de autoconciencia propios de los enfoques feministas son, entre muchas otras, herramientas que nos permitirán incorporar la autorreflexividad como un horizonte de acción de los y las intelectuales²⁸. En definitiva, se trata de incorporar al trabajo diario la siguiente premisa: para conocer la sociedad, hay que conocerse a sí mismo.

A modo de cierre

Utilizando tanto elementos normativos como descriptivos de la realidad social contemporánea, en este ensayo busqué analizar la relación entre elites e intelectuales. Partiendo de la constatación de que las elites y los y las intelectuales son actores claves para entender fenómenos críticos de la actualidad, propuse que el mundo intelectual puede ser caracterizado a grandes rasgos como una fracción de las elites de conocimiento y como actores *dominantes dominados* en la estructura social, que desarrollan intensos procesos de reproducción simbólica y social, fomentando así la autorreproducción como grupo. A partir de esta constatación, describí la posibilidad de desarrollar un giro en esta tendencia, a través de una transformación ético-política de los y las intelectuales (abandonando la neutralidad valorativa weberiana pero sin necesariamente adoptar una postura militante), de la gestación de prácticas de resistencia cotidianas que permitan hacer frente al capitalismo académico en el que se desenvuelven (nos desenvolvemos) los y las intelectuales y mediante la aplicación de herramientas de autorreflexividad que permitan situarnos en el mundo por conocer desde una mirada crítica del yo.

Visto así, este ensayo puede caracterizarse como un esfuerzo con una triple dimensionalidad: política, intelectual y biográfica. Siguiendo las reflexiones de Wright Mills sobre este punto, esas tres dimensiones configuran el locus

28. Katie Sarachild: *Consciousness-Raising: A Radical Weapon*, Random House, Nueva York, 1978.

principal del quehacer intelectual, pues la historia, la biografía y la sociedad no son dimensiones separadas, sino caminos que convergen en la producción de ideas y conocimiento²⁹. Aunque pueda parecer abstracta, me parece que esta noción permitirá acercar al resto de la sociedad a uno de los grupos de las elites que se encuentran (nos encontramos) hoy en día más alejados de la ciudadanía: los y las intelectuales.

Como destacaron recientemente Jorge Atria y Cristóbal Rovira³⁰ —aunque pensando más en la elite económica—, el alejamiento de las elites de la sociedad es una de las principales causas del deterioro democrático, algo especialmente evidente en las sociedades latinoamericanas. Por lo mismo, construir puentes de acercamiento, aunque difícil, no es nunca una tarea irrelevante para aportar a la construcción de un horizonte más justo, igualitario y esperanzador para nuestras sociedades. ☒

29. Charles Wright-Mills: *Cartas y escritos autobiográficos*, FCE, Ciudad de México, 2005.

30. Jorge Atria y Cristóbal Rovira: «Las elites chilenas y su (des)conexión con la sociedad» en *Nueva Sociedad* N° 295, 9-10/2021, disponible en <www.nuso.org>.

Colapsología: ¿una mutilación de la ecología?

Renaud Garcia

El discurso del colapso ha venido ocupando cada vez más espacio. Lejos de arar en el mar, quienes lo promueven tienen cada vez más audiencias, incluso entre los poderosos. Esa toma de conciencia parece alentadora, pero tiene también una dimensión de espectáculo y tiende a opacar parte de la potencia crítica del ecologismo como tradición. En este sentido, la colapsología podría ser una suerte de ecología mutilada.

Un fantasma recorre la crítica social: el de su destrucción programada, al igual que la del mundo que se esforzó por comprender desde hace dos siglos. Porque eso hacia lo cual tiende en adelante la dinámica patológica del capitalismo industrial, obsesionado por el crecimiento, cada vez más voraz en energías naturales y en carburante humano, es la

producción final de un planeta enfermo. Un planeta sobre el cual estaría condenada a vagar una humanidad exangüe, desgarrada por catástrofes de todo tipo y pronto reducida a la superfluidad frente a un complejo de procesos automatizados. Colocada en el corazón mismo de esta civilización industrial (en el sentido en que Marcel Mauss entendía el

Renaud Garcia: es profesor de Filosofía en la educación secundaria en Francia. Sus investigaciones tratan fundamentalmente sobre el anarquismo, la crítica social y el decrecimiento. Ha publicado *Léon Tolstoï. Contre le fantôme de toute-puissance* (Le Passager Clandestin, París, 2013); *Pierre Kropotkine ou l'économie par l'entraide* (Le Passager Clandestin, París, 2014); *La nature de l'entraide* (ENS Éditions, Lyon, 2015); *Alexandre Chayanov. Pour un socialisme paysan* (Le Passager Clandestin, París, 2017) y *El sentido de los límites. Contra la abstracción capitalista* (La Cebra, Adrogué, 2022).

Palabras claves: colapso, colapsología, crisis climática, ecología.

Nota: este texto corresponde a la introducción del libro *La colapsología o la ecología mutilada* (La Cebra, Adrogué, 2021). Traducción de Víctor Goldstein.

término «civilización»: un fenómeno común a un número más o menos grande de sociedades y a una historia más o menos larga de esas sociedades), la ciencia, o más precisamente las ciencias «duras» cuyo modelo sigue siendo el de la física, documentan en abundancia sus signos de extinción. Solo a título indicativo, recuérdense las principales degradaciones ecológicas que tienen lugar todos los días a un ritmo agobiante, inclusive en la minúscula escala de los pocos meses de la redacción de un ensayo filosófico que, en el momento de ponerle el punto final, verá el medio vital más perjudicado de lo que está en la hora en que se escriben estas primeras líneas. Son conocidos, pues, con un conocimiento más o menos cierto, más o menos teñido de afectos depresivos, las pandemias, el agotamiento de los suelos, la escasez de las energías fósiles, el cambio climático, las extinciones masivas de especies animales y vegetales, los desechos de plástico, la acidificación de los océanos, la deforestación, los megaincendios, los refugiados climáticos que se añaden a los refugiados de guerra, los esclavos de las industrias extractivas, y más generalmente los disfuncionamientos cada vez más marcados de los servicios sociales básicos, incluso en los países opulentos (educación, transporte, cuidados, protección). Se ha vuelto corriente afirmar que todo esto indica una trayectoria de «derrumbe» de la civilización industrial, tal como lo definió el antropólogo y arqueólogo Joseph Tainter, autor en 1988 de un libro que dejó huellas, *The*

Collapse of Complex Societies [El colapso de las sociedades complejas]: la pérdida rápida y determinante de un nivel establecido de complejidad sociopolítica. En otros términos, no se trata tanto de una catástrofe como de un retorno a la «condición normal de menor complejidad»¹, como ocurrió con las civilizaciones romana, micénica o incluso maya. Con la salvedad de que esta vez atañe a sociedades industriales que descansan en organizaciones gigantescas.

Precisamente acá aparecen los primeros escrúpulos para quien aún quisiera dar muestras de crítica social y cultural. En efecto, frente a esta aplastante masa de hechos, ¿todavía vale la pena internarse en análisis ceñidos de los mecanismos de explotación económica, de la propiedad privada como robo o de la extorsión de la plusvalía? ¿Vale la pena todavía atarearse en denunciar la unidimensionalidad de la sociedad consumista, sus formas groseras o sutiles de neutralización de toda vida realmente vivida en beneficio del espectáculo triunfante de la mercancía? ¿Vale la pena todavía señalar la desposesión de la autonomía individual y colectiva de las instituciones burocráticas sobredimensionadas y absurdas? Con relación a nuestros abuelos, incluso a nuestros padres, habríamos entrado en una nueva era de la crítica, una era de la urgencia donde la elección que se nos presenta se expresa radicalmente en términos de vida y de muerte. A todas luces, quienquiera que intente circunscribir un poco mejor la naturaleza del curso actual de

1. J.A. Tainter: *The Collapse of Complex Societies*, Cambridge UP, 1988.

las cosas y aquello hacia lo cual parece irrevocablemente arrastrarnos debería volverse «apocalíptica», según el sentido que daba a este término el filósofo de la era atómica Günther Anders: comprender que ahora se trata de vivir de la mejor manera posible, soportando los golpes, en un tiempo histórico que se ha transformado en simple «prórroga».

En semejante contexto, desde hace cinco a diez años, los discursos sobre el derrumbe a corto plazo de la «civilización» industrial causan furor. La noción de «colapsología», forjada por los investigadores Raphaël Stevens y Pablo Servigne a partir del título de la obra de Tainter, pero también del superventas de historia comparativa del geógrafo Jared Diamond, *Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed*², obra muy discutida por la comunidad científica internacional, poco a poco ganó visibilidad. Utilizada primero por sus creadores como una suerte de ocurrencia que permitía poner distancia de la gravedad de los hechos constatados y el peso del campo de estudio explorado, desde entonces se busca una legitimidad epistemológica, como «ejercicio transdisciplinario de estudio del derrumbe de nuestra civilización industrial, y de lo que podría sucederle»³. El caso es que la colapsología parece reforzar esa impresión de militar

a la sombra de las catástrofes que, hace todavía algunas décadas, eran atributo de los ecologistas. En todo caso, tal es la tesis del especialista en ciencia política Luc Semal, autor de un ensayo sobre la cuestión, que sostiene que «hoy las redes de la colapsología son la encarnación más dinámica de esta perspectiva catastrofista que irriga las teorías y las movilizaciones ecologistas desde hace medio siglo»⁴. Algunos podrían ver en esto la reactivación de un milenarismo propio de toda época embarcada en una trayectoria apocalíptica. Es cierto que algunos «colapsólogos» no vacilan en lanzarse en profecías de este tipo. En su última obra, *Devant l'effondrement* [Ante el derrumbe]⁵, el ex-ministro de Medio Ambiente francés Yves Cochet llega incluso a suministrar una fecha precisa y describir el contenido de las etapas de ese cambio radical: entre 2020 y 2030, un periodo de derrumbe; entre 2030 y 2040, un intervalo de supervivencia marcado por la desaparición de la mitad de la población mundial; luego, entre 2040 y 2050, un renacimiento de sociedades locales que descansan en fuertes lazos de solidaridad. La pandemia de covid-19, por cierto, ofreció al autor la ocasión de saborear un triunfo sinies-tro. Así, Cochet no se privó de anunciar que nos situábamos en vísperas de un

2. J. Diamond: *Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed*, Viking Penguin, Nueva York, 2005. [Hay edición en español: *Colapso. Por qué unas civilizaciones perduran y otras desaparecen*, Debolsillo, Barcelona, 2017].

3. P. Servigne y R. Stevens: *Comment tout peut s'effondrer. Petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes*, Seuil, París, 2015, p. 253. [Hay edición en español: *Colapsología*, Arpa, Barcelona, 2020].

4. L. Semal: *Face à l'effondrement. Militer à l'ombre des catastrophes*, PUF, París, 2019, p. 23.

5. Y. Cochet: *Devant l'effondrement. Essai de collapsologie*, Les Liens qui Libèrent, París, 2019.

derrumbe más amplio, que apuntaba hacia el caos social⁶, al tiempo que citaba un fragmento de su obra donde se preguntaba si «una cepa virulenta tan mortal como el ébola y tan contagiosa como la gripe» iba a propagarse por el mundo sin que se pudiera poner a punto una respuesta sanitaria⁷.

No obstante, esa entrada milenarista en el discurso de la colapsología no es necesariamente pertinente, ni siquiera fructífera intelectualmente. Porque en todas partes, tanto en la vieja Europa como en el mundo anglosajón (donde no se habla directamente de *collapsology*), el discurso que emerge es un poco diferente, y en verdad es ese el que da más guerra al pensamiento crítico. En efecto, más allá de los desacuerdos, más allá de las querellas de camarillas políticas, se trataría de ponerse a la altura de una toma de conciencia de un desafío global, que reclamaría movilizaciones masivas y nuevas alianzas para salvar el planeta y preparar una transición hacia un mundo viable. Porque ya no tenemos tiempo, porque se franqueó el punto de equilibrio y nos arrastran procesos irreversibles, habría que acabar con nuestras ilusiones, renunciar a las promesas de la Historia y unir todas las buenas voluntades en un gran esfuerzo que trascienda las fronteras ideológicas. Por otra parte, ¿cómo podría ser de otra manera, a partir del

momento en que, como lo indica el filósofo australiano Clive Hamilton, aceptamos «hacer un cambio radical y tomar debida nota del hecho de que muy simplemente no [vamos] a actuar en la medida requerida por la urgencia»⁸? En Estados Unidos, el periodista y ecologista Bill McKibben, que en 2007 fundó la ONG 350 (en referencia al umbral que no se puede superar de 350 partes por millón –es decir, una fracción equivalente a un millonésimo– de CO₂ en la atmósfera), ¿no llegó a sostener que la humanidad lleva a cabo ahora una Tercera Guerra Mundial, y que sería «razonable preguntarse, frente a la degradación ecológica, si la aventura humana no comenzó a fallar e incluso a perder quizá todo interés»⁹? De modo que la esperanza de un cambio residiría en movimientos de gran amplitud para modificar el espíritu de la época. Cuando gigantescos incendios causaron estragos recientemente en Australia, ¿no anunciaba Pablo Servigne, reaccionando a ese ejemplo funesto, que había llegado el tiempo no solo de las movilizaciones masivas, sino incluso de una «economía de guerra, o de excepción, que tome medidas radicales, que busque la emulación de los vecinos»¹⁰?

Bajo el peso de un drama tan aplastante, la resolución de sostener un

6. Y. Cochet: «Un effondrement mondial va arriver, j'en suis encore plus sûr» en *Midilibre.fr*, 23/4/2020.

7. Y. Cochet: *Devant l'effondrement*, cit., p. 123.

8. C. Hamilton: *Requiem pour l'espèce humaine*, Presses de Sciences Po, París, 2013, p. 9. [Hay edición en español: *Requiem para una especie. Cambio climático: por qué nos resistimos a la verdad*, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2011].

9. B. McKibben: «How Extreme Weather Is Shrinking the Planet» en *The New Yorker*, 16/11/2018.

10. P. Servigne: «Avec les mégafeux, le projet moderne a trouvé plus fort que lui» en *Reporterre*, 9/1/2020.

discurso crítico parece consagrada a volar en pedazos. Por cierto, no se puede hablar de una forma de intimidación. Está claro que nadie nos apunta con una pistola en la sien. Simplemente, la carga emocional de los hechos descritos, la diferencia incommensurable entre las capacidades reflexivas e imaginativas de los humanos por un lado, y la dimensión de los fenómenos a los cuales enfrentarse por el otro, en apariencia hace que la situación sea demasiado grave para que uno se dé el lujo de divertimentos teoristas. Máxime cuando lo real toma la delantera a la anticipación intelectual, como en la crisis del coronavirus. Así, el periodista de *New York Magazine* David Wallace-Wells, especialista en el calentamiento global, autor en 2017 del artículo «The Uninhabitable Earth» [La Tierra inhabitable], que fue el más leído de la historia de esa revista bimensual, de tal modo que luego lo reestructuró para convertirlo en un super-ventas que apareció en 2019¹¹, consideró la pandemia de covid-19 como el «terrible signo anunciador de las pandemias futuras que se desarrollarán si el cambio climático sigue desestabilizando tan profundamente el mundo natural»¹²: migraciones de insectos, fundición del permafrost y liberación de bacterias sepultadas desde hace millones de años, desplazamiento de las enfermedades, nueva letalidad de bacterias que hasta entonces vivían en simbiosis con los organismos animales y humanos.

Una duda legítima en el tiempo del espectáculo triunfante

Sin embargo, algo no funciona. Precisamente en virtud de las urgencias del tiempo, lo que en verdad se requiere es el esfuerzo de pensamiento más difícil e ingrato. Ya que, por dramática que sea, la situación actual sigue siendo bastante curiosa si se piensa en la manera en que la «opinión pública» se la representa. De ahí proviene una duda legítima. Época extraña, en efecto, donde los «profetas de la desgracia» que tienen la impresión de predicar en el desierto suscitan una gran atención en los círculos del poder y los puestos avanzados del «neoliberalismo». Cyril Dion, autor de los films *Mañana* (2015) y *Pasado mañana* (2018), que presentaban al gran público una multitud de experimentaciones «de transición», heraldo de la petición «L'affaire du siècle», que justifica llevar a la justicia al Estado francés por «inacción climática» (una petición cuya cantidad de firmantes terminó en casi dos millones en un poco más de cinco días, a fines de diciembre de 2018), participó muy cerca del poder en un Consejo de Defensa Ecológica. Las actividades de esta instancia apuntaron en particular a supervisar la constitución de una «Convención Ciudadana para el Clima», compuesta por 150 ciudadanos elegidos al azar e invitados a asumir las cuestiones ecológicas candentes, al tiempo que ofrecen al poder un contrapeso

11. D. Wallace-Wells: *El planeta inhóspito. La vida después del calentamiento*, Debate, Barcelona, 2020.

12. D. Wallace-Wells: «The Coronavirus is a Preview of our Climate-Change Future» en *Intelligence*, 8/4/2020.

bienvenido frente al movimiento de los «chalecos amarillos». Según el testimonio mismo del documentalista, se trataba «para el gobierno de una manera de desviar la coerción de proposiciones radicales, de evitar así ser cuestionado directamente»¹³. En cuanto al entonces primer ministro Édouard Philippe, cuyas antiguas funciones de director de relaciones públicas en Areva¹⁴ dan testimonio de una participación activa en el desastre en curso, no vaciló en confesar, como bombero pirómano, que estaba obsesionado por la cuestión del derrumbe, a tal punto que la obra de Jared Diamond sería uno de sus libros de cabecera. Como es usual entre los tecnócratas, en realidad no admite la eventualidad de la catástrofe final sino para impugnarla inmediatamente, confiando en las inagotables soluciones técnicas que ofrecerá una «transición ecológica avanzada» para salvaguardar el progreso humano. Al leerlo, lo que queda es que «ya nadie [tendría] el monopolio de lo verde»¹⁵.

Y piensen todavía cuando el diario *Le Monde*, «diario oficial de todos los poderes» (según la fórmula de la Internacional Situacionista), consagraba en julio de 2019 una semana de tribunas libres a la cuestión del derrumbe, o ponía

a Pablo Servigne encabezando el afiche de su festival Imagine en octubre de 2019, alrededor de la cuestión «¿Cómo vivir en un mundo colapsado?». Y eso cuando un año antes arrojaba la crítica del industrialismo (que, si se apela al sentido común, encarna lo que de otra manera se llamaría «ecología política») a la alcantarilla de los grupúsculos primitivistas, ligados de cerca o de lejos a la reacción¹⁶. Una amplificación mediática que por otra parte no se limita a Francia. En EEUU, una tribuna publicada en 2013 en uno de los blogs de *The New York Times* por el veterano de la Guerra de Iraq Roy Scranton, titulada «Learning How to Die in the Anthropocene» [Aprender a morir en el Antropoceno]¹⁷ dio mucho que hablar muy rápidamente, hasta ser seleccionada para el premio al mejor ensayo de *nature writing*, para luego ser prolongada en la forma de un librito exitoso. Todo esto (pero ¿aún es necesario señalarlo?), sobre un fondo de fascinación hacia la musa ecologista Greta Thunberg, capaz de administrar lecciones de sabiduría a todas las Christine Lagarde del mundo. Todavía recientemente, el peatón común y corriente podía cruzarse con una fotografía gigante de la joven «huelguista» del clima junto a imágenes del derretimiento de hielos,

13. Gaspard d'Allens: «Comment Cyril Dion et Emmanuel Macron ont élaboré l'assemblée citoyenne pour le climat» en *Reporterre*, 10/5/2019.

14. Conglomerado multinacional francés líder en el sector de la energía nuclear [N. del T.].

15. É. Philippe: «Face à l'effondrement, l'humanité est loin d'avoir dit son dernier mot» en *Huffpost*, 2/12/2019.

16. Frédéric Cazenave: «Derrière la décroissance, de la gauche à la droite identitaire, une multitude de chapelles» en *Le Monde*, 2/12/2018.

17. R. Scranton: «Learning How to Die in the Anthropocene» en *The Stone* (blog), *The New York Times*, 10/11/2013.

de incendios forestales o de la cara rubicunda y rencorosa de Donald Trump en los carteles publicitarios de la radio Europa 1, en plena estrategia de reconquista del *rating* con su eslogan «Cambiamos el mundo».

Por lo tanto, si se puede admitir que un «viento de colapsología» sopla sin lugar a duda en la ecología política (Luc Semal), este también ofrece un reordenamiento inesperado de las condiciones generales del *espectáculo*. Afirmar esto es aplicar una regla de higiene intelectual enunciada por Jacques Ellul, uno de los analistas más perspicaces de las técnicas de propaganda: «En una sociedad, cuando se *habla* en exceso de cierta circunstancia humana, es porque esa circunstancia no existe»¹⁸. Por ejemplo, expresaba, si se habla incesantemente de libertad, es porque la libertad fue suprimida. Para el caso que nos ocupa, hay que entenderse: hablar cada vez más del derrumbe y de los contornos de la vida humana «después» ciertamente no significa que la realidad en el centro de tales discusiones no existe. El problema se presenta de otra manera. Considerar esa trayectoria como la ocasión de una toma de conciencia ecológica inédita, bajo el aspecto de la colapsología, bien podría contribuir a derogar la herencia misma de la ecología política, es decir, la parte que es irrecuperable para el poder. Se puede dilapidar una herencia de diferentes

maneras. Es posible tratar de librarse de ella decididamente, lisa y llanamente negando el legado. Pero también es posible exhibirse como legatario al tiempo que se rechazan las obligaciones que eso presupone. A mi juicio, esa es la naturaleza del lazo ambiguo que mantiene la colapsología con la crítica de la «civilización» industrial. La colapsología es la ecología mutilada.

Propongo pues tomar al revés el discurso de numerosos partidarios del derrumbe (para mayor comodidad, se los podrá llamar los «derrumbistas») que estiman que, en general, los poderosos temen las comprobaciones irrefutables del desastre venidero. Cosa que contraría el estado normal del sistema político y económico, así como la tranquila confianza en una continuidad del progreso humano bajo la égida de las democracias representativas y de una economía globalizada. Para el profesor de Ciencias Políticas Carlos Taibo, en un libro varias veces reeditado en España¹⁹, el asunto parece entenderse de la siguiente manera: si el gran público fue sensibilizado en el tema del derrumbe, es más por el sesgo del cine hollywoodense (*Mad Max*, *Armageddon*, *World War z*, *I Am Legend*), de las series (*The Walking Dead*, etc.) o de la literatura postapocalíptica (*La carretera*, de Cormac McCarthy) que por un debate intelectual y político

18. J. Ellul: *Ce que je crois*, Grasset, París, 1987, p. 91.

19. C. Taibo: *Colapso. Capitalismo terminal, transición ecosocial, ecofascismo*, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2016.

sobre la catástrofe ecológica, que sigue estando ampliamente marginado. Evidentemente, conviene tener en cuenta las particularidades de la recepción de la ecología en España, donde el debate está en efecto muy poco abierto en comparación con lo que ocurre del otro lado de los Pirineos. Pero, más en general, esta manera de oponer el interés suscitado por la cuestión del derrumbe *en la forma del divertimento* y la ocultación del debate de fondo sobre sus implicaciones políticas *reales* da que reflexionar. En vez de una oposición, ¿no habrá que hablar más bien de una continuidad, con los medios culturales masivos preparando la acogida de las tesis de la colapsología, en el seno del mundo invertido del espectáculo y de su fábrica de sensacionalismo? El hecho de que esto probablemente se efectúe para el gran perjuicio de ciertos derrumbistas no cambia nada de la realidad de las transformaciones de la ideología dominante: más que nunca, con el espaldarazo mediático de la colapsología, *ahí lo verdadero es un momento de lo falso*. Todo lo cual contribuye a pasar por alto lo mejor que el pensamiento crítico construyó desde los años 60, se trate de análisis tajantes del derrumbe ya presentes o de prospectivas estetizantes, tales

como la tetralogía de John Brunner²⁰ o los «cuatro apocalipsis» de James Graham Ballard²¹.

La trampa de los Lotófagos

Quien ya leyó u oyó discurrir a colapsólogos, tanto en el área francófona como anglófona, ciertamente observó su propensión a arraigar sus reflexiones sobre el desastre ecológico en anécdotas personales, instantes de impacto emocional (cuando su corazón, por ejemplo, se encoge en el momento de preguntarse si hacer hoy un hijo, en definitiva, no equivale a agregar algo a la desdicha de este mundo), o consideraciones en vivo y en directo engendradas por el derrumbe. Me tomaré aquí la licencia de hacer otro tanto, exponiendo una imagen que se me apareció a fuerza de frecuentar la literatura derrumbista.

En *La Odisea*, el retorno hacia la tierra natal está puntuado de encuentros desagradables, de peligros y de historias de devoración. Las escalas de Ulises y de sus compañeros entre los Cicones, los gigantes Lestrigones, en la gruta de Polifemo o en Eolo, donde reside la hechicera Circe, jamás se producen sin una masacre de por medio. Algunos de esos «anfitriones» son comedores de alimentos

20. John Brunner (1934-1995) es el autor de cuatro novelas mayores ilustradas por los cuatro jinetes del apocalipsis del mundo moderno, que tratan alternativamente de los efectos catastróficos de la superpoblación, de la colusión entre Estado y mafia, de la polución y de las tecnologías de la información: *Todos sobre Zanzíbar* (1968), *Órbita inestable* (1969), *El rebaño ciego* (1972) y *El jinete de la onda del shock* (1975).

21. En orden cronológico: *El huracán cósmico* (1961), *El mundo sumergido* (1962), *La sequía* (1964), *El mundo de cristal* (1966).

divinos (Circe o Calipso), otros de buena gana se comen hombres (los Lestrigones o Polifemo), pero todos resultan ser inhospitalarios y pueblan una tierra donde mayoritariamente no aparecen ni sembradíos ni jardines. No obstante, un pueblo constituye una excepción, al que encuentran en los primeros tiempos en el camino del retorno: los Lotófagos, pacíficos y amables. Estos comedores de flores no tienen nada contra la vida de los compañeros de Ulises. Por el contrario, les ofrecen lotos para que los saboreen. Habiendo probado ese «fruto dulce como la miel», a los informantes del héroe les cuesta el mayor trabajo volver a su hogar. Ulises se ve obligado a «llevarlos a la fuerza, aunque lloraban», para «arrastrarlos a las naves y atarlos bajo los bancos». En efecto, «repletos de lotos, los compañeros se olvidan del regreso».

En cierto modo, vistos a través del prisma de la crítica social y cultural, los que anuncian el derrumbe próximo son parecidos a los Lotófagos, a tal punto transpiran una empalagosa benevolencia. En sus diversas «redes», ¿no proponen métodos para dejar aflorar nuestras emociones más profundas respecto del «choque moral» constituido por el descubrimiento del pico petrolero, el cambio climático o la sexta extinción masiva? Gracias a las lecciones de la ecopsicología práctica, ¿no nos incitan a mantener una «expectación en movimiento» para maravillarnos por el espectáculo de nuestras emociones colectivas devueltas a la riqueza de lo viviente? Parecería muy

grosero volverles la espalda, máxime cuando sabemos que están rodeados de devoradores atrapados en la negación de la catástrofe. Sin embargo, es lo que me parece necesario hacer, a riesgo de dar muestras de rudeza, para evitar sumirse en un nebuloso olvido. Solo con esta condición se podrá volver a llevar la reflexión ecológica a su suelo primordial, aquel a partir del cual se puede medir la extensión real del desastre en curso y señalar sus causas con precisión.

A este respecto, que se me permita proseguir un poco la analogía mediante observaciones suplementarias sobre *La Odisea*. ¿Cómo explicar que Ulises renuncie a su exilio, así como a la inmortalidad prometida por su amante Calipso? Es muy posible que, en definitiva, Homero subraye el triunfo del amor y del hogar, es decir, de la comunidad de pertenencia primera: un orden doméstico donde el cuerpo amoroso irradia en y por el cuidado aportado a la tierra (precisamente cuando, en su exilio, Ulises no recorrió jamás un espacio en el cual comer el alimento de los hombres, resultando totalmente decepcionada la esperanza de ver campos cultivados). El mismo lecho conyugal está constituido por un bello olivo a cuyo alrededor Ulises había construido la cámara nupcial, como nos enteramos cuando Penélope intenta verificar de una vez por todas su identidad exhortando a Euriclea a que transporte el lecho fuera de la cámara y lo prepare para Ulises, para el furor de este último. Hasta el mismo encuentro final entre él y su

padre Laertes, solo en un vergel cuyas hierbas arranca, puede ser apreciado en función de la defensa de los valores agrarios. Para el escritor ecologista y campesino Wendell Berry, gran comentarista del texto homérico, está claro que es «como campesino que Laertes sobrevivió a la ausencia de su hijo (...). En una época de desorden, volvió a cuidar la tierra, fundamento de vida y de esperanza»²². En este sentido, la epopeya homérica sigue exponiendo el revés de la fuerza, que por su parte predomina en *La Ilíada*. En semejante cuadro, el despiadado castigo reservado a los pretendientes resulta plenamente legítimo en la medida en que ellos despreciaron el orden doméstico que afirma el poeta. Finalmente, Ulises renuncia a la promesa de ser liberado de su condición encarnada, y por el contrario escoge asumirla castigando a quienes intentaron destruir el equilibrio de su *oikos*.

Salud del cuerpo, salud de la tierra, apego al medio vital, amor de los seres queridos, es lo mismo. Es aquello a lo cual Ulises no quiere renunciar. A pesar de Calipso, que le promete la omnipotencia. A pesar de las distracciones apaciguadoras de los Lotófagos en el duro camino del retorno.

¿Qué nos inspira esa analogía? Por cierto, es fundamental rehusar las promesas adulteradas de una abundancia industrial que se desarrolla a crédito sobre los medios naturales. Para quien no tuviera ya suficiente confianza en sus

sentidos para atestiguar el descalabro producido por la artificialización del mundo, existe una estimación cifrada con el *overshoot day*, el día del año en que los recursos acumulados para mantener el sistema mundial superan las capacidades anuales de regeneración del «ecosistema». En 2019 se ubicaba en el 29 de julio. No obstante, y esto me parece igualmente crucial, se trata de no extrañarse tampoco a mitad de camino dejándose atrapar en la trampa de una forma de narcosis. Tal debería ser la tarea de una reflexión eco-lógica (en el sentido en que pone a nuestra humanidad en el corazón de nuestra «casa común») que, más allá de las estrategias de transición focalizadas en un futuro sin porvenir, se confrontaría con una comprensión penosa del desastre *en curso* remontando hasta su lógica fundamental: el proceso de abstracción de la condición encarnada inherente al capitalismo industrial. Casi todos los derrumbistas de hoy sienten o saben eso, pero por lo general lo callan, con fines estratégicos, para no perder a la mayoría. Sin lugar a duda, el ejemplo más impactante es el astrofísico Aurélien Barrau, no exactamente «colapsólogo», pero no menos «lanzador de alertas» mediático que ostenta simpatías libertarias, autor del libro *¡Ahora! El desafío más grande de la historia de la humanidad*, quien declaró en un programa televisivo: «Si se formula la deconstrucción [*sic*] del capitalismo como premisa se pierde de entrada a 80% de la gente»²³.

22. W. Berry: *The Unsettling of America: Culture and Agriculture* [1977], Counterpoint, Berkeley, 2015, p. 133.

23. Entrevista en el programa *Interdit d'interdire*, conducido por Frédéric Taddeï en RT France, 12/6/2019.

No desmovilizar frente a la urgencia. Mantener a todo el mundo en la misma línea del frente, masiva e inclusiva. Es aquí donde los colapsólogos se parecen más a los Lotófagos. Es aquí donde frente a la amenaza del olvido dejan a otros, que se preocupan igualmente por el porvenir, la tarea de salvaguardar y reavivar la memoria del pasado de la ecología radical.

De la importancia de ser consistente

Uno se indignará frente a semejante comparación. Los colapsólogos bien pueden ser considerados como los agentes del olvido de un legado histórico y político, el caso es que parecen tener éxito allí donde sus detractores, supuestamente intransigentes, fracasaron de manera repetida. No contentos con llevar al debate público cuestiones ecológicas y existenciales cruciales, hablan al corazón de una generación que se politiza en torno de esos desafíos. Una generación joven que no solo se manifiesta, sino que también interroga sus privilegios y la idea misma de hacer carrera, a imagen de Clément Choisine, joven diplomado de la Escuela Central de Nantes, en un discurso pronunciado en la entrega de los diplomas, el 30 de noviembre de 2018, en el que señaló:

Como buena cantidad de mis compañeros, cuando la situación climática y las desigualdades de nuestra

sociedad no dejan de agravarse, cuando el GIEC [Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático] llora y los seres se mueren, me siento perdido, incapaz de reconocermé en la promesa de una vida de rango superior como engranaje esencial de un sistema capitalista de sobreconsumo.

La ecología social y libertaria, los neoluditas, los tecnocríticos (poco importa el nombre que se les atribuya), ¿pueden jactarse acaso de haber suscitado semejantes conversiones? Al igual que los colapsólogos, tampoco nosotros quisimos el desastre, pero todo lleva a creer que ellos encontraron un medio de ponerle remedio haciendo vibrar otras cuerdas que las que nosotros acostumbrábamos a tocar. Una vez que la mayoría estuviera a la escucha, repentinamente sensible a la significación profunda de la ecología (que no se limita a la preocupación por el «medio ambiente»), entonces se dispondría de una mayor latitud para refinar los análisis, incluso para radicalizarlos.

Sin embargo, sería un error pensar que mi objetivo es llevar a cabo un juicio por falta de radicalidad. Después de todo, no se puede decir exactamente que un movimiento como Extinction Rebellion, que se formó sobre un fondo de anticipación de la catástrofe, esté desprovisto de ella. En él se discute incluso acerca de la pertinencia de la violencia frente a las estrategias no violentas²⁴, cosa que no lo constituye *a priori* en

24. Jonas Lum: «La non-violence, ‘une résistance molle’ qui ne provoque pas de changement profond» en *Reporterre*, 10/1/2020.

un movimiento tibio. El hecho de que pululen los pequeños actos o las acciones notables no es el indicio de una debilidad de actuar, sino más bien de un ardor activista. Las «tristes» épocas —y con seguridad la nuestra lo es— con mucha frecuencia terminan por dar paso a una fascinación por la práctica, donde parece volver a jugarse incesantemente lo absolutamente inédito con militantes neófitos que se consideran como pioneros. Talleres de «trabajo que reconecta» destinados a padecer juntos el impacto moral de la ineluctabilidad del derrumbe; residencias del «Nuevo Guerrero» para encontrar en sí al salvaje oculto; formación y entrenamiento en la supervivencia en bases autónomas sustentables (BAD, por sus siglas en francés)²⁵; ocupaciones e impugnaciones por Extinction Rebellion; «huelgas» estudiantiles por el clima; estímulo al «cero desperdicio»; campañas de L214²⁶ contra la industria mundial de la carne; *happenings* diversos y variados, etc.: el ambiente catastrofista produce reacciones en cadena a diestra y siniestra. Más bien, el problema mayor es saber si esa efervescencia de movilizaciones de todo tipo tiene una coherencia. A este respecto, siempre vale la pena recordar la advertencia de Max Horkheimer en el prefacio de *Éclipse de la raison* [Eclipse de la razón], una obra publicada en 1947, al

salir de un doble apocalipsis cuyo horror está condensado en los nombres Auschwitz e Hiroshima-Nagasaki. El fundador del Instituto de Investigación Social, más conocido con el nombre de Escuela de Fráncfort, afirmaba allí: «La tendencia moderna a traducir toda idea en acción, o en abstención activa de toda acción, constituye uno de los síntomas de la presente crisis cultural. La acción por la acción, de ninguna manera superior al pensamiento por el pensamiento, incluso le es quizá inferior»²⁷.

En otros términos, lo que hay que preguntarse a propósito de los discursos y de las prácticas derrumbistas no es cuál es su objetivo político o su resultado esperado sino en verdad: ¿cuáles son su sentido y su coherencia? Por lo tanto, no es en el registro de la eficacia donde nos posicionaremos, sino en el del pensamiento. Sus trayéndose a toda subordinación a la lógica del rendimiento, el pensamiento recupera su filo y responde a su exigencia de *consistencia*. Porque tal es el principal reclamo imputable a la colapsología: corresponde a un discurso fundamentalmente *inconsistente*.

En primer lugar, el término de «derrumbe» mismo es suficientemente indeterminado para depender de lo que el lingüista y medievalista Uwe Pörksen llama las «palabras plásticas»²⁸. Iván

25. BAD, *base autonome durable* [base autosuficiente sostenible], un concepto del survivalismo [n. del t.].

26. Organización francesa de derechos de los animales [n. del t.].

27. M. Horkheimer: *Éclipse de la raison*, Payot, París, 1974, p. 10.

28. U. Pörksen: *Plastic Words: The Tyranny of a Modular Language*, Penn State UP, State College, 1995.

Illich, que había alentado a Pörksen a escribir sobre este tema, calificaba de «amebas» ese tipo de términos (entre los cuales «desarrollo», «crecimiento», «proyecto», «resiliencia», «sistémico» serían ejemplos contemporáneos). Una palabra plástica cambia de forma en función de los contextos, pero en el conjunto permanece siempre igual de vaga. Puede prestarse a múltiples usos, independientemente del objetivo del comentario. Se emparenta con un bloque en un juego de construcción, utilizable con cualquier fin y susceptible de plegarse a cualquier intención del constructor. Así, la palabra «derrumbe» posee una significación dilatada y una connotación imponente para impactar la imaginación y dejar estupefacto el entendimiento. Pero detrás de la pantalla de humo hay realidades que se deben desenmarañar con paciencia, y lógicas que funcionan y no dependen de un desplome fatal: derrumbe brutal o progresivo (en cuyo caso no se trataría ya estrictamente de un derrumbe sino de una «decadencia»); destrucción integral de la vida social y cultural o caída hacia un nivel de complejidad menor; disfuncionamiento de los servicios públicos básicos o eliminación concertada bajo el efecto de la digitalización creciente de la vida: todas estas alternativas, entre

muchas otras, no se vuelven concretas y discutibles a menos que uno se deshaga del dominio de las palabras plásticas.

El movimiento colapsológico es invertebrado, y también lo es en el hecho de que propone (a veces entre los mismos individuos) todo y su contrario: apoyar a la vez la ZAD²⁹ y la BAD³⁰, que es reivindicada por activistas de extrema derecha; hacer presión sobre los gobiernos mediante una batería de peticiones y de manifestaciones masivas; retirarse en una práctica survivalista en forma individual; datar con precisión el derrumbe, en una suerte de «milenarismo laico»³¹, o considerarlo como algo indeterminable en lo cual se cree para reforzar nuestro actuar en el presente; entablar la transición en grupos de ayuda mutua y de apoyo psicológico; meditar y llorar por la Tierra; rendirse ante lo ineluctable, modelizado por un arsenal de datos científicos; «reconectarse» activamente con el Todo de la vida; predicar el «negarse a medrar» libertario³² o tomar cualquier micrófono o cámara que se pudiera presentar.

Para que se comprenda mejor la trayectoria catastrófica de la civilización «termoindustrial», los partidarios del derrumbe recurren con mucha frecuencia a la imagen de un automóvil que se precipita a una velocidad exponencial

29. *Zone à défendre*: zona por defender, para referirse a una ocupación militante que pretende bloquear físicamente un «proyecto de desarrollo» con consecuencias ambientales o sociales negativas y da lugar a formas autónomas de organización [N. del E.].

30. V. nota 25.

31. Y. Cochet: *Devant l'effondrement*, cit., p. 229.

32. Sobre este punto, v. Corinne Morel Darleux: *Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce*, Libertalia, París, 2019.

precisamente cuando sus frenos están bloqueados³³. La situación es tal que habríamos alcanzado el estado de *predicamento*, en otras palabras, un camino sin salida, una crisis terminal que arrasa con ella «nuestra» civilización y la biosfera en su conjunto. Por mi parte, me referiré a otro objeto muy útil: la brújula. En el seno y sin duda más allá de

ese agregado heteróclito de discursos y prácticas, trato de encontrar cómo reorientarse, en primer lugar echándole una zancadilla a esa *cultura del olvido* de la que participa la colapsología. Así, aunque sin duda alguna tengamos el tiempo contado, séame permitido gastar un poco de ese tiempo para llevar este trabajo a buen término. ☐

33. La primera parte de la obra *Comment tout peut s'effondrer*, de Servigne y Stevens, está construida sobre esta imagen.

Summaries

Resúmenes en inglés

Esther Solano Gallego: «Lula 3» or How to Leave Jair Bolsonaro's Legacy Behind [4849]

The inauguration of Luiz Inácio Lula da Silva was loaded with symbols. From the aesthetics of the act to his first decrees, the new president sought to show a break from his predecessor, who traveled to the United States to not hand him over the presidential sash. Environment, weapons, social policy, diversity, national reunion are some of the pillars, which have a cabinet packed with prestigious names as a backdrop. However, Bolsonarismo transcends Jair Bolsonaro and the new government will have to deal with the half of the country that has voted for the former president and has given rise to a Congress and governorships with a broad conservative presence.

Keywords: Left, Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, Brazil.

Alessandro Stanziani: Wheat as a Weapon: Grain Trade, Speculation, and International Order [4850]

Is the wheat shortage due to the conflict in Ukraine impeding the production and trade of cereals? Yes, but only in part: what the history of its trade shows is that wheat has always been a weapon at the service of power and speculation, and has been immersed in strong geopolitical disputes.

Keywords: Geopolitics, Speculation, War, Wheat, Russia, Ukraine.

Mariana Heredia: Of Oligarchies and Straw Men: How to Understand Capital in Latin America? [4851]

In Latin America, the term «oligarchy» has a long history, has organized numerous political and social conflicts, and

continues to operate in the worldview of progressive sectors. But to what extent does it serve to understand current capitalism and its ramifications in the region? What weight do the old patrician surnames have and how have their activities changed? And, finally, does its use still make sense?

Keywords: Capitalism, Oligarchy, Raw Materials, Rich, Latin America.

Francisco Robles-Rivera / Inés Nercesian: Who Puts the Bell on the Cat? The Elites and Their Power of Influence in Central America [4852]

In the 1990s, peace agreements and democratic transitions seemed to open up new perspectives in a region traditionally plagued by deep inequalities. However, today authoritarianism, violence and the absence of shared horizons for a large part of the population have returned to the fore. In this framework, the study of the elites sheds light on the similarities and differences between the Central American countries and on the persistence of unequal systems.

Keywords: Elites, Revolving Doors, States, Central America.

Hugo Cerón Anaya: Poor Skin Color, Privileged Skin Color: Elites and Whiteness in Latin America [4853]

Despite the fact that miscegenation has been a prism to try to understand the Latin American reality, in Latin America

wealth and whiteness are closely linked, both symbolically and materially. Several recent qualitative works on the study of elites show that both the phenotype and a set of habits associated with whiteness are used to define ideas of belonging and identity.

Keywords: Class, Elites, Inequalities, Mixed Race, Race, Latin America.

Rosario Figari Layús: Elites and Violence: Alliances, Impunity and Inequality [4854]

The construction of strategic alliances between economic elites and various types of actors has been key to the exercise of violence that works for their interests, as well as to obtaining the necessary impunity to continue operating and reproducing their accumulation models and the resulting inequalities. Beyond their significant differences, the cases of Argentina and Colombia make it possible to see how political violence, state repression, and impunity have frequently been used for the benefit of economic elites and to the detriment of the civil, political, and economic rights of their victims.

Keywords: Elites, Impunity, Violence, Argentina, Colombia.

Hans-Jürgen Burchardt / Jan Ickler: Rich, Elites, Taxes: Old Challenges for a New «Left Turn» [4855]

A new trend is emerging in Latin America. New centre-left alliances are coming

to power. It is, therefore, a pertinent moment to take stock of the «pink tide» of the early 2000s and think about reforms that go beyond extractivism. The recent increases in the prices of raw materials, in a context of energy crisis, may be just another mirage that makes us forget the need for profound reforms, especially in the tax field.

Keywords: Elites, Pink Tide, Tax Reform, Wealth, Latin America.

Noam Titelman: Generational Change and Anti-Elitism: The Tensions of Change in Chile [4856]

To understand what has happened in Chilean politics in recent times, it is worth taking a look at the intersecting generational struggles, which had a crucial moment in 2011. These dynamics explain the process of political and ideological renewal, but also the tensions that the current transformative experience is going through.

Keywords: Constitution, Elites, New Generation, Youth, Gabriel Boric, Chile.

Álvaro Jiménez Millán: Colombia: A New Grammar of Power [4857]

Since his arrival at the Presidency, Gustavo Petro has been taking advantage of the initial impulse that his historic victory at the polls gave him to advance in some key projects, such as «total peace» and tax reform. With the traditional elites divided, the new president has managed to put together a broad

parliamentary alliance and to project beyond Colombia's borders.

Keywords: Social Equity, Tax Reform, Total Peace, Gustavo Petro, Colombia.

Florantonia Singer: Venezuela: Fugitive Elites in a Country Made Rubble [4858]

The Bolivarian Revolution has given rise to a reconfiguration of the elites in the country, and to the emergence of a new «Bolivarian bourgeoisie». As in Francisco Herrera Luque's novel *Los amos del valle* [Masters of the Valley], the country looks more like a nation of fiefdoms, today associated with dark businesses under the wing of the State, which in Venezuela rhymes with oil.

Keywords: Bolivarian Revolution, Bodegones, Elites, Venezuela.

Cristóbal Villalobos Dintrans: Intellectuals and Elites: Part of the Problem or Part of the Solution? [4859]

During the last decades, there has been a revitalization of the discussion on elites, a discussion that, however, has not been accompanied by a deep debate on the role of intellectuals in social reproduction. Such a discussion is important in a context in which the alienation of society's elites is often mentioned as one of the reasons for democratic deterioration, both in Latin America and globally.

Keywords: Democracy, Dominant/Dominated, Elites, Intellectuals.

**Renaud Garcia: Collapsology:
A Mutilation of Ecology?**
[4860]

The collapse discourse has been occupying more and more space. Far from plowing the sea, those who promote it have a growing audience, even among

the powerful. This awareness seems encouraging, but it also has a spectacle dimension and tends to obscure part of the critical power of environmentalism as a tradition. In this sense, collapsology could be a kind of mutilated ecology.

Keywords: Climate Crisis, Collapse, Collapsology, Ecology.

Ecuador Debate

Agosto de 2022

Quito

Nº 116

EL DERECHO DE LA NATURALEZA

PRESENTACIÓN. COYUNTURA: El Paro Nacional de junio 2022. ¡Otra vez la CONAIE!, **Pablo Ospina Peralta**. Conflictividad socio-política: Marzo-Junio 2022. TEMA CENTRAL: Derechos de la naturaleza y derechos humanos, **Agustín Grijalva**. De objeto a sujeto de derechos: la naturaleza en la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador, **Javier Arcentales**. Los derechos de la naturaleza en perspectiva intercultural: los desafíos de una justicia ecológica decolonial, **Adriana Rodríguez Caguana**. Consentimiento de las comunidades indígenas y la naturaleza como sujeto de derechos: las Sentencias «Triángulo de Cuembi» y «Sinangoe», **Mario Melo**. Los fundamentos éticos que entretienen los derechos de los animales y de la naturaleza: una revisión a la Sentencia sobre la Mona Estrellita, **Viviana Morales Naranjo**. Derechos de la naturaleza en Colombia: el caso del río Atrato, **Gonzalo A. Ramírez Cleves**. Los derechos de la naturaleza en el contexto jurídico europeo y comparado, **Silvia Bagni**. La teoría sistémica del derecho en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, **Ramiro Ávila Santamaría**. DEBATE AGRARIO: La organización campesina imagen y realidad, **Alain Dubly**. ANÁLISIS: Inicios y llegada de la Sociología al Ecuador. Notas para su historia, **César Albornoz**. ¿Qué pasó en la calle Loja?: estigma y COVID-19, **Fabián Regalado Villarroel**. RESEÑAS.

Ecuador Debate es una publicación del Centro Andino de Acción Popular. Redacción: Diego de Utreras N28-43 y Selva Alegre, Apartado aéreo 17-15-173-B, Quito, Ecuador, Tel.: 2522763. Correo electrónico: <caaporg.ec@uio.satnet.net>.

ENCUESTA

#QuépiensaALSobrelaUE

América Latina – Unión Europea: miradas, agendas y expectativas

Resultados en la web

> data.nuso.org

FRIEDRICH
EBERT
STIFTUNG
ARGENTINA



NUEVA SOCIEDAD



Latinobarómetro™
OPINIÓN PÚBLICA LATINOAMERICANA



NUEVA SOCIEDAD Especial em português



**Progressismos latino-americanos:
segundo tempo**



NUEVA SOCIEDAD 301



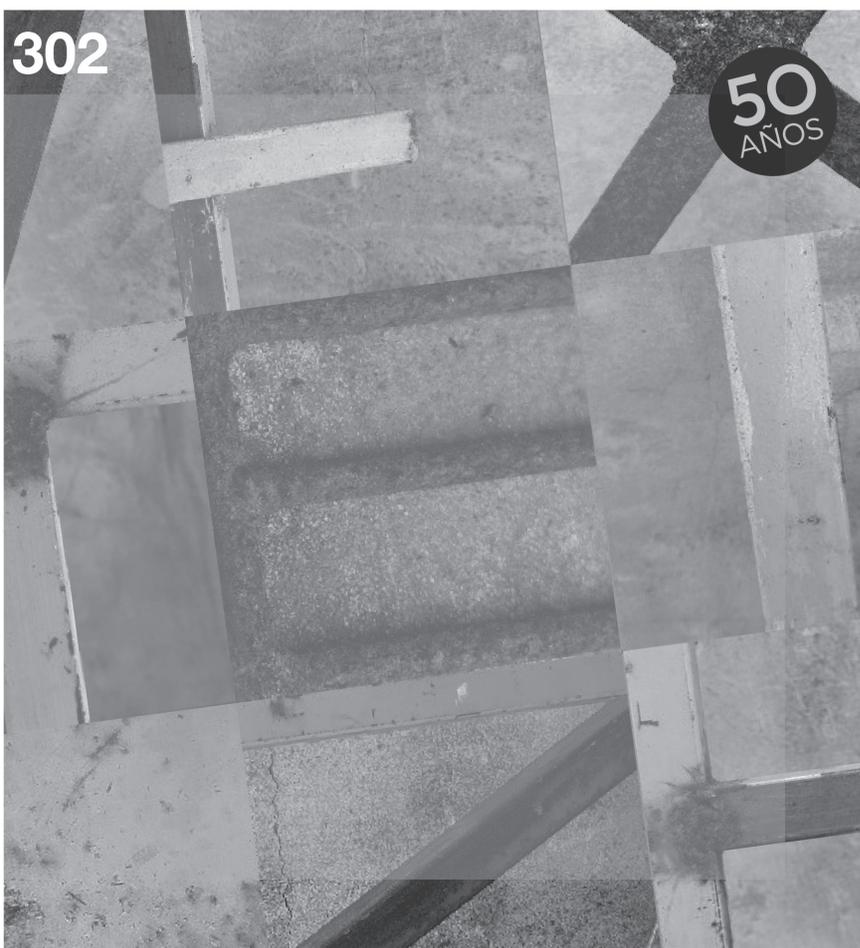
Geopolítica en tiempos de guerra



NUEVA SOCIEDAD 302



Minidiccionario del presente



Alemania: F. Delbanco, Tel.: (49 4131) 2428-8, e-mail: <post@delbanco.de>.

Argentina: Distribuidor: Jorge Waldhuter, Pavón 2636, Buenos Aires, Tel./Fax: (5411) 6091.4786, e-mail: <hola@waldhuter.com.ar>.

Bolivia: en La Paz: Yachaywasi, Tel.: (591) 2 2441.042, e-mail: <yachaywa@acelerate.com>.

En Santa Cruz de la Sierra: Lewylibros, Junín 229, Tel.: (591) 3 3360709.

Colombia: Librería Fondo de Cultura Económica, Calle 11 No. 5-60, Barrio La Candelaria, Bogotá, Colombia. Tel.: (571) 2832200, e-mail: <libreria@fce.com.co>.

Costa Rica: Librería Nueva Década, Tel.: (506) 2225.8540, e-mail: <ndecada@ice.co.cr>.

Ecuador: LibriMundi, Tel.: (5932) 252.1606, 223.4791, e-mail: <librimu1@librimundi.com.ec>.

España: Marcial Pons-Librero, Tel.: (34 914) 304.3303, e-mail: <revistas@marcialpons.es>.

Japón: Italia Shobo, Fax: 3234.6469; Spain Shobo Co., Ltd., Tel.: 84.1280, Fax: 84.1283, e-mail: <info@spainshobo.co.jp>.

Perú: El Virrey, Bolognesi 510, Miraflores, Lima, Tel.: 444.4141, e-mail: <info@elvirrey.com>.

Puerto Rico: Laberinto, 251 calle de la Cruz, San Juan, Tel.: (787) 724.8200, e-mail: <info@librerialaberinto.com>.

Ventas y consultas por internet:
<www.nuso.org>

Distribución internacional a librerías:
<distribucion@nuso.org>

PARA SUSCRIBIRSE A NUEVA SOCIEDAD

SUSCRIPCIÓN	ANUAL	BIENAL
Incluye flete aéreo	6 números	12 números
América Latina	US\$ 70	US\$ 121
Resto del mundo	US\$ 107	US\$ 196
Argentina	\$ 2.900	\$ 5.800

> Formas de pago

1. **Pago online:** Ingrese en <www.nuso.org/suscribirse/>, donde encontrará un formulario para registrar su pedido y efectuar el pago.

2. **Pago con tarjeta de crédito:** Solicite instrucciones a <distribucion@nuso.org>

3. **Pago con cheque:** Envíe un cheque por el importe correspondiente a la orden de **Fundación Foro Nueva Sociedad** a la siguiente dirección: Nueva Sociedad, Humberto Primo 531, C1103ACK Buenos Aires, R. Argentina, acompañado de los datos del suscriptor (nombre, domicilio postal completo, teléfono, correo electrónico).

> Para otros medios de pago y cualquier otra consulta, escriba a <distribucion@nuso.org>.

GEOPOLÍTICA EN TIEMPOS DE GUERRA

COYUNTURA

Noam Titelman / Tomás Leighton.

¿Por qué ganó el rechazo a la nueva Constitución chilena?

TRIBUNA GLOBAL

Éric Toussaint. «El canario en la mina»:

la crisis de Sri Lanka y las protestas ciudadanas. Entrevista a Balasingham Skanthakumar

TEMA CENTRAL

Pere Ortega. La OTAN ante los retos globales (1987-2022)

Helen Thompson. El frente de

la transición energética

Xulio Ríos. China ante la invasión rusa de Ucrania

Sergio Lirio. América del Sur en la nueva geopolítica global. Entrevista a Celso Amorim

Naomi Klein. Nostalgia tóxica: de Putin a Trump y las caravanas de camiones

Federico Fuentes. Guerra, represión y disidencia en la Rusia de Putin.

Entrevista a Boris Kagarlitsky

Galip Dalay. Turquía y Rusia: equilibrio geopolítico y antioccidentalismo

Bertrand de Franqueville /

Adrien Nonjon. Sentimiento nacional y batallas por la memoria en Ucrania

Zbigniew Marcin Kowalewski.

Una larga caminata con el imperialismo ruso en la mochila

ENTREVISTAS | 50 AÑOS

Elena Poniatowska / Mariano Schuster.

Vida y obra de la princesa roja

SUMMARIES

MINIDICCIONARIO DEL PRESENTE

COYUNTURA

Giancarlo Summa. La tercera vez de Lula en un Brasil partido en dos.

TRIBUNA GLOBAL

Sylvain Cypel. La memoria selectiva de la sociedad israelí.

TEMA CENTRAL

Mariana Heredia. 1%. ¿Alcanza con «combatir» a los súper ricos?

Jordi Bonet i Martí. Antifeminismo. Una forma de violencia digital en América Latina

Alejandro Galliano. Colapso. Tendencia e imagen

Ricardo Dudda. Corrección política. La tiranía de las etiquetas

Juliana Martínez Franzoni. Cuidados.

Entre la ola feminista y la austeridad

Edgar Straehle. Fascismo. ¿La llama sigue ardiendo?

Santiago Alba Rico. Guerra.

El conflicto y el mundo

José Antonio Sanahuja. Interregno. La actualidad de un orden mundial en crisis

Laura Fernández Cordero. Melancolía. Izquierdas y feminismos

Juan Ruocco. Meme. Vector de ideas

en los ecosistemas digitales y más allá

Asma Mhalla. Musk 3T. ¿Una economía de la posverdad?

Moira Pérez. No binario. Discursos y paradojas

Peio H. Riaño. Pantalla. La única realidad que no contagia

Claudio Ingerflom. Rusia. La implacable letra z

Christophe Giraud. Tinder. El amor en tiempos de *match*

Siobhan Guerrero Mc Manus. Trans. Transfeminismo en primera persona

Éric Sadin. Twitter. El triunfo de la palabra sobre la acción.

ENTREVISTAS | 50 AÑOS

Gioconda Belli / Carolina Arenes.

Lejos de una Nicaragua irreal

SUMMARIES

www.nuso.org

Enero-Febrero 2023



NUEVA SOCIEDAD | 303

Elites, política y desigualdades en América Latina

COYUNTURA

Esther Solano Gallego «Lula 3» o cómo dejar atrás el legado de Jair Bolsonaro

TRIBUNA GLOBAL

Alessandro Stanziani El trigo como arma

TEMA CENTRAL

Mariana Heredia De oligarquías y hombres de paja

Francisco Robles-Rivera / Inés Nercesian Las elites y su poder de influencia en Centroamérica

Hugo Cerón Anaya Elites y blancura en América Latina

Rosario Figari Layús Elites y violencia: alianzas, impunidad y desigualdad

Hans-Jürgen Burchardt / Jan Ickler Riqueza, elites, impuestos

Noam Titelman Recambio generacional y antielitismo. Las tensiones del cambio en Chile

Álvaro Jiménez Millán Colombia: una nueva gramática del poder

Florantonia Singer Venezuela: elites fugitivas en un país hecho escombros

Cristóbal Villalobos Dintrans Intelectuales y elites. ¿Parte del problema o parte de la solución?

ENSAYO

Renaud Garcia Colapsología: ¿una mutilación de la ecología?